

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

**Las obligaciones naturales en derecho comparado y en
derecho español**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Manuel de Soroa y Suarez Tangil

Madrid, 2015

TE
2021

U N I V E R S I D A D C O M P L U T E N S E

D E M A D R I D

F A C U L T A D D E D E R E C H O

" LAS OBLIGACIONES NATURALES
EN DERECHO COMPARADO
Y EN DERECHO ESPAÑOL. "

Tesis que para la obtención del
grado de Doctor presenta Don
Manuel de Soroa y Suarez de
Tangil.

Madrid, Abril, 1975.

I N D I C E

	<u>Páginas</u>
PREAMBULO	1
PRIMERA PARTE	
CAPITULO I	
LAS OBLIGACIONES NATURALES EN EL DERECHO ROMANO	11
SEGUNDA PARTE	
LAS OBLIGACIONES NATURALES EN EL DERECHO COMPARADO	27
CAPITULO I	
DERECHO FRANCES	29
CAPITULO II	
DERECHO ITALIANO	47
CAPITULO III	
DERECHO ALEMAN	62

CAPITULO IV	
DERECHOS SUIZO Y PORTUGUES	74
CAPITULO V	
DERECHO ANGLOSAJON	76
CAPITULO VI	
DERECHO DE LOS PAISES HISPANOAMERICANOS Y DE FILIPINAS	87
SECCION 1.- ARGENTINA	87
SECCION 2.- CHILE	103
SECCION 3.- FILIPINAS	116
SECCION 4.- MEJICO	122
SECCION 5.- VENEZUELA	124
SECCION 6.- URUGUAY	126
TERCERA PARTE	
LAS OBLIGACIONES NATURALES EN EL DERECHO ESPAÑOL	129
CAPITULO I	
ANTECEDENTES HISTORICOS	129
CAPITULO II	
OBLIGACIONES NATURALES EN EL CODIGO CIVIL	138
SECCION 1.- PROYECTO DE 1851	138
SECCION 2.- POSIBLES SUPUESTOS EN EL CODIGO	139

SECCION 3.- OTROS CASOS DE OBLI- GACIONES NATURALES	158
SECCION 4.- ESTUDIO DEL SUPUESTO CONTENIDO EN EL ART. 1901. ALCANCE DEL MISMO	161
SECCION 5.- EL LLAMADO PAGO O CUM- PLIMIENTO DE LA OBLIGA- CION NATURAL	174
SECCION 6.- DOCTRINA JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA EN TORNO A LA FIGURA DE LAS OBLIGACIO- NES NATURALES	182
SECCION 7.- SUMARIA ALUSION AL DERE- CHO FORAL NAVARRO.....	197
CONCLUSIONES	199
BIBLIOGRAFIA	207

LAS OBLIGACIONES NATURALES
EN DERECHO COMPARADO Y EN DERECHO ESPAÑOL

"La civilización occidental, después de centenares de años, se había desarrollado, basando su derecho positivo en las reglas de la moral cristiana. Hoy se nos dice que este Derecho no puede ser mantenido. Es, pues, esta misma moral la que está en juego".

(G. RIPERT, Prólogo a la 4a. edición de su obra "LA REGLE MORAL DANS LES OBLIGATIONS CIVILES", Paris, 1949).

- PREAMBULO -

El tema del presente estudio ha sido, desde mucho tiempo atrás, objeto de minuciosos exámenes. Sabido es que "la idea de la obligación natural nació históricamente en el marco del Derecho Romano, respondiendo a especiales características de aquel sistema" (1)

(1) DIEZ PICAZO "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial", Madrid, 1970.

Por ello, la doctrina romanista le dedicó preferente atención. Es abundantísima la bibliografía. Citemos, por vía de ejemplo y entre otras muchas, la clásica monografía de BONFANTE, "LE OBLIGAZIONI NATURALI E IL DEBITO DE GIUCO", publicada en la RIV. DIRITTO COMM., 1915 II, completada en los "SCRITTI GIURIDICI", la de BURDESE, "LA NOZIONE CLASICA DE NATURALIS OBLIGATIO". Destacables los trabajos de ALBERTARIO en su "CORSO DI DIRITTO ROMANO", de SIBER, BESELER, VAZNY, DEVILLA, GRANDEWITZ, LONGO, CORNIOLEY, HELLMAN, etc., etc.

Por otro lado, la doctrina civilista ha explorado modernamente el instituto con variados rumbos investigadores y contradictorios resultados. En efecto, hay quienes, desde posturas extremas, niegan su viabilidad -e incluso, su existencia misma- hasta quienes mantienen tesis defensoras de su utilidad y aplicación en el Derecho actual.

Es evidente, tal como ha señalado el Prof. DIEZ PICAZO (ob. cit.) que "aquellos casos en los cuales se basó toda la construcción romanista, no puedan hoy reproducirse por haber variado esencialmente las condiciones sociales al calor de las cuales fueron posibles".

"Efectivamente -añade el citado autor- con la abolición de la esclavitud, con la radical mudanza de la estructura de la familia y con la moderna ordenación de la contratación, han desaparecido las causas que originaron el concepto de la obligación natural y los tipos históricos de la misma".

Se ha dicho certeramente que "de anómala "prima facie" cabe enjuiciar a la obligación natural, dispar amalgama de elementos de heterogénea proge-
nie" (1). El mismo nombre -obligación natural- encie-
rra contraste. He aquí que el primer término, obliga-
ción, es netamente jurídico. Escribe el Prof. HERNAN-
DEZ GIL que "la idea de la obligación no se da, des-
de luego, en el mundo de la naturaleza, sino en el de
la conducta humana" (2). Y se ha expuesto asimismo
que "es de esencia de la obligación que el deudor se
constituya en una posición de deber. El concepto de
deber jurídico responde a una idea común al Derecho
y a la moral : a saber, que el hombre puede y debe
ajustar su conducta a determinados preceptos. El de-
ber jurídico es, metafóricamente hablando, un orden,
un imperativo que el orden jurídico dirige al individuo
y que éste ha de acatar. Más, se distingue del deber
moral en que su acatamiento puede imponerse, general-
mente -aunque no siempre de un modo eficaz-, emplean-
do los medios coactivos de que dispone el Estado (eje-

(1) MARTINEZ G. CALCERRADA "Problemática de las obligaciones naturales. Eficacia jurídica del deber moral cualificado". R.G.L.J. Marzo, 1964.

(2) A. HERNANDEZ GIL. "Derecho de obligaciones". Tomo I, Madrid, 1960.

cución forzosa, resarcimiento de daños, penas)". (1)

Si nos preguntásemos cual sería la "caracterización jurídica" del deber jurídico podríamos responder, simple, escuetamente: la coercibilidad. En efecto, allí donde no sea posible, a tenor de lo dispuesto por el orden jurídico, el imponer una coacción inexorable al sujeto, al hombre, en definitiva, no hay -es evidente- un deber jurídico. Podrá sobre el hombre pesar un deber u obligación moral de rango superior, o una obligación social o una religiosa de comportarse de una determinada manera, de ajustar su actuación a ciertos módulos. Pero en el caso de que, si no lo hiciese, no pueda ser objeto de una sanción, entonces no tiene, no gravita sobre él, obligación o deber jurídico alguno (2).

Pues bien, si ello es así, si la idea de la obligación es ante todo y sobre todo idea jurídica, idea a rescatar por los juristas -y "jurídicamente" sólo por ellos-, observaremos, por contra, que el calificativo "natural" de por sí no cuadra ni se adecúa a un sistema formalista del Derecho, a un enfoque exclusivamente jurídico. Escapa, sin duda, del marco de la ciencia jurídica. Casi resulta un cuerpo extraño a ella. Más, atención a ésto: lo natural, referido al Derecho tiene una denominación: lo iusnatural, el iusnaturalismo como corriente de la ciencia

(1) A. VON TUHR: "Tratado de las obligaciones", tomo I, trad. española de W. ROCES. Madrid, 1934 - pág. 4.

(2) Cfr. L. RECASENS SICHES: "Introducción al estudio del Derecho". México, 1970.

jurídica. Y también, sin que se pretenda ninguna precisión conceptual, sólo como trazo o boceto, como sector de la ciencia jurídica que se ocupa del tradicionalmente llamado Derecho Natural.

Y si a una categoría de obligaciones se las ha motejado de naturales, ¿querrá ello significar que se sitúan en la zona donde el Derecho Natural linda y se entremezcla, acaso, con la moral?

No se entrará a dilucidar la cuestión. Sí en cambio será necesario prevenir cómo la moral hace referencia a la intimidad y el Derecho a la exterioridad; nótese que el Derecho ha de partir siempre de los "indicios externos del comportamiento" (1).

Por otra parte, parece como si la categoría "obligación natural" fuese reconocida, sí, por el Derecho positivo pero sin proveerla de los mecanismos protectores que posee la obligación civil. He aquí la paradoja: se la admite, más no con plenitud. Se la reconoce como instrumento de vinculación entre los hombres; más no se le proporciona virtualidad para actuarse coactivamente.

Ahora bien, en el supuesto de que un obligado "naturalmente", cumpla -guiado por cualesquiera móviles morales o de conciencia-, es decir, cuando la obli

(1) Cfr. L. RECASENS SICHES: Ob. Cit.

gación llegue a su normal desenlace biológico, entonces la eficacia normativa plena envuelve, con su fuerza vinculante, ese acto particular que, técnicamente, habría de llamarse cumplimiento.

Cabe, no obstante, abrigar muy serias dudas acerca de si resulta correcto hablar de cumplimiento de la obligación natural. Se hace preciso tener en cuenta que la obligación natural, en tanto no se cumple, es algo ajeno rigurosamente al Derecho. Es algo que lleva -al decir de LACRUZ- una existencia meta-jurídica. (1)

Y surge lo contradictorio, lo extraño: un acto (el del, llamémosle, cumplimiento) desconocido por la norma, adquiere relevancia como si se tratara de un acto perfectamente admitido y protegido por ella. ¿En qué forma, y por qué motivos se justifica tal paradoja? ¿Qué consecuencias implica?

Retrocedamos brevemente: no se intenta, mediante la obligación natural, trazar una frontera absoluta entre Moral y Derecho al modo del racionalismo de GROCIO, KANT y PUFFENDORFF. Todo lo contrario. La idea que, en suma, se postula es la de que las obligaciones naturales "constituyen una categoría de obligaciones intermedias entre la Ley moral y la jurídica, cuyo carácter fundamental estriba en su carencia de

(1) JOSE L. LACRUZ BERDEJO: "Estudios de Derecho Civil. La Obligación Natural". Barcelona, 1958.

acción y en que la ejecución de las mismas -como la de los deberes morales- es una facultad del deudor". (1)

Y se estima, de acuerdo con una importante línea de pensamiento, que "las obligaciones naturales difieren de los simples deberes morales en que mientras éstos sólo tienen vigencia en el seno de la conciencia, aquellas trascienden de ésta, al mundo jurídico". (2)

No olvidemos lo escrito por el Prof. HERNANDEZ GIL : "el orden jurídico no es rigurosamente autónomo; mantiene una comunicación con el orden social y con el orden moral. Y si no la mantuviere quedaría reducido a un formalismo desprovisto de significación" (3). Cabría, con mayor énfasis, establecer que al verdadero Derecho sólo se llega considerándolo ubicado en el orden moral. De esta manera se considera al Derecho en su esencia, o sea como el "conjunto de preceptos de la moral y el Derecho que se realiza en la conducta de los hombres, en función a su libre albedrío". (4)

(1) E. JONESCO: "Les obligations naturelles". París, 1911. Pág. 7.

(2) P. ROCAMORA: "Contribución al estudio de las obligaciones naturales". Rev. de Derecho Privado, 1945. Pág. 548

(3) A. HERNANDEZ GIL : "Derecho de obligaciones", tomo I, Madrid, 1960.

(4) Cfr. F. DE CASTRO: "Derecho Civil de España", tomo I, Madrid, 1955, pág. 22.

Pues bien, si todo ésto es así, si se piensa en la inesquivable aceptación de estas líneas generales del pensamiento filosófico jurídico, aquí y ahora, tratemos de avanzar más: supuesto que el fin de la norma no es la voluntad del sujeto que realiza la conducta, sino la garantía de la situación de otro, este asunto cobra, si cabe, mayor relieve cuando se analiza la relación jurídica obligatoria. En ella, el "otro", junto al "uno" son términos que suponen dos conductas de alteridades convergentes. No sólo se dá en la misma la nota de "alinidad", sino también la de "alteridad". La Justicia, sabido es, en cuanto virtud posee bilateralidad pero no alteridad. La Justicia como alteridad es jurídica. De aquí que la norma de Derecho regule conductas de alteridad y, por eso mismo, constituya el ordenamiento jurídico un instrumento de la seguridad y certeza de la conducta social. (1)

En fín, resultaría inagotable el venero de cuestiones a formular en torno a problemática tan atrayente. No es éste el objeto del presente estudio, mucho más modesto y concreto. Quede, sí, constancia de nuestra preocupación por los temas de filosofía jurídica.

Y ahora, con el propósito de analizar alguna parte de las cuestiones enunciadas antes, se efectuarán,

(1) Véanse las reflexiones que respecto al tema hace el Prof. T. FERNANDEZ-MIRANDA, en su reciente obra "Estado y Constitución". Madrid, 1975.

como primera parte de la tesis, unas acotaciones históricas sobre las obligaciones naturales en Derecho Romano. Ello, por razones obvias; baste la conocida expresión de IHERING: "a través del Derecho Romano, más allá del Derecho Romano".

Y, además, porque, "cualquier atleta sabe que si quiere dar un buen salto hacia delante, debe tomar carrera, o sea, andar un poco hacia atrás" (1).

En segundo término se trazará una panorámica acerca del tratamiento que la obligación natural ha recibido en el Derecho Comparado. Nosotros estimamos que éste tiene como esencial finalidad el favorecer el perfeccionamiento común de los diversos Derechos nacionales por medio de su comparación sistemática. Y que, conforme piensa A. GALLARDO RUEDA (2), debe hablarse, más que de un Derecho Comparado, de un método jurídico comparado que puede ser adscrito, como instrumento auxiliar, a la investigación jurídica, histórica, doctrinal o positiva.

Nos detendremos en el Derecho francés, en el italiano y en el alemán. Más tarde se aludirá al anglosajón y luego al de los países iberoamericanos.

Y, finalmente, como tercer gran apartado del

(1) B. BIONDI: "Arte y Ciencia del Derecho"; traduc. española, 1953 - Pág. 198.

(2) A. GALLARDO RUEDA: "El método y el Derecho Comparados". Boletín de Información del Ministerio de Justicia - Año III -

trabajo, se examinarán los diversos posibles supuestos de obligaciones naturales en nuestro Derecho Civil, a la luz de la doctrina y jurisprudencia patrias.

I . - LAS OBLIGACIONES NATURALES EN ROMA.

Señala certeramente el Prof. ESPIN que la teoría romana de las obligaciones naturales no llegó a constituir una doctrina completamente elaborada. En efecto, aún hoy no está claramente dilucidada la contraposición entre obligaciones civiles y obligaciones naturales. Porque, al decir del Prof. IGLESIAS SANTOS, los problemas planteados alcanzan a la raíz o fundamento, a la esencia misma de la "obligatio naturalis". Para GIORGI, todos los casos de obligaciones naturales "se compendian o en el origen imperfecto o en la extinción imperfecta de la "obligatio civilis". El contrato del esclavo, del pupilo, del hijo de familia, del menor y ciertos oficios de piedad, son ejemplos del origen imperfecto. La confusión, la "litis contestatio" y, acaso, la prescripción extintiva, son ejemplos de extinción imperfecta".

Veamos, en intento de análisis, lo que se esconde en Roma tras el término "naturalis obligatio". En primer término, cabe apuntar cómo lo.

natural es aquello que se contrapone a lo artificial, es decir, a lo hecho por la mano del hombre. Por una metonimia general, escribió BONFANTE, "natura" es la fuerza misteriosa que crea estas cosas o estos efectos: así se habla de "naturalis ager", "motus naturalis arboris", del agua que cae "naturalis causa", del "naturalis alveus", etc.

Con gran agudeza se ha destacado la contraposición apuntada entre lo natural y lo producido artificialmente por el hombre. Y al hilo de esta idea se observa una bipolaridad que comprende en Derecho dos términos antitéticos en cierta medida: "natura", por un lado, y "ius", por otro. O, si se prefiere, "natura" y "lex". Ampliaremos este esquema.

Ley natural - o, simplemente, "naturalis" - significaría el conjunto de normas o de reglas que configuran la sociedad, o sea, la convivencia de los hombres. Reglas dictadas por la moral, el honor, la urbanidad ("pietas", "fide", "officium", "religio") pero que el Derecho no ha creado ni reconocido. Razón: sencillamente, no tenía por qué hacerlo.

Llegados a este punto, en el discurrir del citado BONFANTE, no resulta ocioso recordar la

advertencia del Prof. IGLESIAS cuando amonesta a los científicos frente al grave riesgo que supone "levantar templos a dioses tan perfectos como los queridos por su propia imaginación". "Cuidémonos -añade- de las seudorrealidades siempre atractivas por lo mismo que tienen de sumo, de acabado modelo". (1) Podemos quedar con la duda de si la brillante y original construcción de BONFANTE - a la que, pese a todo, nos adherimos - no ha incurrido en este riesgo. Quede al menos constancia de ello sin dilucidar la cuestión.

En otro sentido, sigue BONFANTE, "naturalis" significa todo lo que en Derecho tiene existencia objetiva, independientemente de la voluntad (tanto del Estado, como voluntad creadora del Derecho, como del individuo).

Pues bien, notoriamente se nos conduce por esta vía a destacar una nueva antítesis. Nueva antítesis que, como pone de relieve BONFANTE, es la única que ha persistido en el lenguaje moderno: se contraponen, por ejemplo, los frutos naturales ("ex naturae fructus") con los civiles ("ex opere, ex facto"). Algo similar a lo que hoy se destacaría como contraposición entre "factum" y "ius".

(1) Juan Iglesias. "Estudios". "Perspectivas Romanísticas".

E inmediatamente, como corolario del razonamiento anterior, se expone una nueva dicotomía: la que existe polarizándose en torno a dos realidades jurídicas de muy honda trascendencia: nos referimos, de un lado, al Derecho que vive en la conciencia social; de otro, al Derecho que el Estado crea a su arbitrio.

Con precisión se ha escrito que la antítesis citada corresponde, ni más ni menos, que a la existente entre "ius naturale" y "ius civile".

Pero anotemos un dato crucial. En Roma, durante la época del Derecho Clásico, era esencia de la labor jurisprudencial el adaptar la realidad social a la realidad jurídica. O, por expresarlo de otro modo, el "juridificar" lo que, en principio, no pasaron de ser sino simples deberes morales provenientes de la "pietas", de la "fides" o del "officium". A estos deberes u obligaciones, no amparados jurídicamente mediante una formal y concreta "actio", se les proveyó de una estructura y características comunes aunque en su etiología y modalidades presentasen muy diversos aspectos.

En tal sentido se ha dicho (IGLESIAS) (1) que, entre otras obligaciones naturales, cabe incluir las siguientes, referidas todas al período

(1) Juan Iglesias. "Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado". Barcelona, 1958.

clásico :

- 1.- Las obligaciones contraídas entre los "filii familias" y entre éstos y el "pater".
- 2.- Las contraídas por los pupilos sin la "auctoritas tutoris".
- 3.- La "obligatio naturalis servi".
- 4.- La obligación extinguida por "capitis deminutio".
- 5.- El supuesto de exclusión de la "repetitio soluti" en el caso del "filius familias" que contrae un préstamo de dinero y, fuera ya de la "patria potestas", paga al mutuante en lugar de valerse de la "exceptio senatus consulti macedoniani".
- 6.- La obligación nacida de simple pacto sobre el pago de intereses.
- 7.- La obligación extinguida por la "litis contestatio".

Ahora bien, junto a estas obligaciones naturales propias, existen en el Derecho justiniano otras

que cabe calificar de impropias. Se citan en esta categoría los siguientes supuestos :

- 1.- La prestación de servicios al patrono por parte del liberto sin que medie "promissio iurata".
- 2.- La prestación de alimentos a ciertos parientes cuando no se está obligado a ello civilmente. En parecidos términos, el pago de los gastos hechos para el funeral de un pariente.
- 3.- El pago efectuado por la madre para rescatar al hijo de la esclavitud.
- 4.- La constitución de dote por la mujer, en orden a sí misma bajo la creencia de considerarse obligada a ello.

A juicio de BONFANTE, significan las obligaciones naturales "aquellas relaciones que el Derecho no ha creado sino que se limitó a tomarlas de la conciencia social, tal y como ésta las dictaba". Sig-nifican también, añade en otro pasaje, las obligaciones que nacen de una relación de hecho (aquí la con-traposición entre "ius" y "factum" a que antes se alu-dió) independiente de la voluntad del hombre. Ejem-

plo de ello: el caso del impúber, que no puede consentir, y que al recibir una suma queda jurídicamente obligado por el enriquecimiento.

Reflejábamos, líneas más arriba, cómo la jurisprudencia romana no se detuvo, sino que, audaz mente, supo dar ropaje jurídico a las relaciones sociales no sancionadas por el "ius civile". Comparó con insólita brillantez los principios de mero Derecho Civil con la "ratio" y la "equitas". No se olvide que "el jurista romano es un intérprete de lo humano eterno, de la tradición fecunda e inderogable, silenciosa y honda, que es sustancia de la historia". (1)

Hay un caso - ya hicimos mención de él - que tiene perfiles interesantes al objeto de configurar la génesis de la idea romana de obligación natural; es el del mutuo en su plenitud, como contrato, como acto voluntario.

En efecto, cabe la posibilidad de que una obligación "iuris naturalis" debidamente constituida sea anulada por un principio de puro Derecho Civil: supuesto del mutuo concertado por un "filius familias" que se anula por consideraciones de lo que hoy llamamos orden público, en definitiva para proteger el orden y seguridad de las familias y también a fin de

(1) Juan Iglesias. "El Derecho Romano y nuestro tiempo". Publicado en "Estudios" - 1968 - Pág. 44.

evitar - como sagazmente atisba BONFANTE - la especulación sobre la condición del "filius". Pues bien, la jurisprudencia, con amplia libertad, compaginaba los principios del "ius civile" con la "ratio" y la "equitas". Y así, concedía todos los efectos que no contradecían la "ratio" del principio de Derecho Civil; es decir, todos, menos el derecho de exigir coactivamente el pago, de generar una obligación provista de acción.

He aquí cómo los juristas romanos entendieron, en su profundidad y alcance extremos, el sentido de la Ley, del Derecho en fín. "La Ley es una necesidad para la libertad. Pero la Ley, es-casa en Roma en todo caso, debe dejar campo abierto al despliegue de las iniciativas espontáneas. La Ley debe ayudar a poder querer menos de lo máxima-mente autorizado". (1) Con estas palabras atina a expresar el Prof. IGLESIAS lo que en el caso que contemplamos supo realizar la jurisprudencia romana. De tal suerte, la obligación natural se perfila como un producto de ese espíritu de libre interpretación vivificadora por el que un principio de puro Derecho Civil es reducido a los límites de su ratio". Es la concluyente muestra de la fuerza y virtualidad de una Jurisprudencia siempre atenta a la exacta misión de arrancar a la "natura" los contenidos

(1) Juan Iglesias. "Estudios". "Orden jurídico y orden extrajurídico". Pág. 95.

de verdad moral que convienen a lo que es bueno y justo - "bonum et aequum" - (1)

En definitiva, concluimos con BONFANTE, la obligación natural es, por consiguiente, en su origen algo fundado en la "equitas". Y la "equitas" no es sino el Derecho en su esencia y finalidad, el espíritu que mueve a la legislación y la adapta a la vida. Sus efectos son eventuales; pero también lo son los de la parentela (alimentos, sucesiones) y el único que no producen es el de la obligación de cumplirlos. El acreedor puede amenazar con la infamia, con reprochar la falta de probidad, etc.; pero no puede utilizar el medio simple de la acción.

No existen propiamente los términos de deudor y acreedor; y no hay tampoco derecho y obligación. La obligación natural, como derecho, no existe. Es una obligación social, no jurídica. Tiene como base, antes quedó reflejado ampliamente, la antítesis entre los principios positivos de Derecho natural y los de mero Derecho Civil, antítesis que no se produce en el Derecho justiniano. En él las obligaciones naturales no tienen una razón común. Destruída la base general - antítesis citada - se destruye el concepto orgánico de la obligación natural y cada modalidad de las mismas tiene

(1) Juan Iglesias. Obra citada. "Derecho Romano y Esencia del Derecho", Pág. 39 .

una particular justificación en una especial razón de equidad. En el Derecho clásico la "ratio" general hacía que tuviesen toda la fuerza de expansión y la virtud orgánica de los principios normales de Derecho común. En el Derecho justiniano, en cambio, cada una de las obligaciones naturales están reducidas a la condición de principios de menor derecho singular.

Sin embargo BONFANTE duda de estas conclusiones formuladas en 1893 por él mismo. En la época de la publicación de los "Scritti giuridici varii" (1926) afirmó que Justiniano amplió los casos del esclavo y del "filius familias", que existían en el Derecho clásico, reconociéndoles todos los efectos menos el de la acción, generalizándolos y destacándolos de las figuras concretas, para referirlos en abstracto a la obligación natural.

La construcción debe hacerse con unidad de concepto, a base de los débitos naturales sancionados por la "pietas" y el "officium" (obligaciones sociales) a los que se niega la "condictio indebiti". Tal, el caso antes aludido de la mujer que constituye dote creyendo estar obligada jurídicamente. O el del liberto que presta sus servicios al patrono sin que medie "promissio iurata". Pues bien, en estos y semejantes casos lo que ocurre es que se da valor

jurídico a relaciones meramente morales convirtiéndolas en relaciones jurídicas y haciendo que justificasen una "solutio" al igual que una relación obligatoria.

¿Cual es el límite entre estas relaciones con otras relaciones sociales de cualquier especie? La diferencia estriba en ser las obligaciones naturales relaciones concernientes al patrimonio, que tienen un contenido patrimonial. Pues aunque el patrimonio integre la esfera jurídica, frecuentemente está regulado por normas sociales. Así, por ejemplo, la obligación del salvado o del beneficiado hacia su salvador o bienhechor es una obligación moral, de gratitud, pero no patrimonial aunque fuese valorable en dinero; aquel sentimiento puede llevarle a realizar actos equivalentes, pero el bienhechor puede considerarse socialmente ofendido si se pretende corresponderle con una suma de dinero; protestará afirmando que no lo ha hecho por interés.

Sin embargo, los débitos naturales que tienen por efecto excluir la "condictio indebiti" son obligaciones sociales, más de carácter patrimonial. Como el caso del liberto, porque la costumbre admite que deba exteriorizar su gratitud hacia el patrono mediante la prestación de trabajo.

A continuación examinaremos, siquiera brevemente, algunos de los supuestos de obligaciones naturales que hemos ido mencionando.

El supuesto de las obligaciones contraídas por los "filii familias" entre sí o bien entre alguno de ellos y el "pater", se presentó cada vez con menos frecuencia a medida que en el Derecho post-clásico se fué desarrollando la construcción de un verdadero patrimonio del "filius familias". La aparición de diversas modalidades de peculio motivó el progresivo olvido de esta especie de obligación natural.

Las obligaciones contraídas por los pupilos sin la "auctoritas tutoris" presentan no pocas dificultades de configuración dado que los textos en que aparecen recogidas son abiertamente contradictorios. ARIAS RAMOS afirma que "quizá el Derecho clásico sólo dispuso que quien hubiera recibido un pago de tales obligaciones respondiese, si no de la íntegra restitución, al menos en la medida de su enriquecimiento. En tal caso -añade el citado Prof. ARIAS-, excluía la "solūti retentio" y, acaso también, la compensación, se hubiera estado fuera del marco de las obligaciones naturales.

La obligación contractual en que el esclavo

resulte deudor no deja nunca de ser obligación natural aún en el supuesto en que el esclavo deje de serlo, careciendo, por tanto, el acreedor de acción. Unicamente se producen los efectos de la compensación, la posibilidad de una garantía personal - fianza-o real -prenda- o hipoteca - y la "soluti retentio". Volvemos aquí a advertir cómo el desarrollo de la institución del peculio dió especial fisonomía a estas relaciones. Ello porque a la obligación meramente natural del esclavo se adosaba la posibilidad de reclamar contra el dueño por la acción de peculio en la medida de la cuantía de éste. (1)

En el caso de las obligaciones contraídas por la persona afectada por una "capitis diminutio", el Pretor, cuando se trataba de una "minima capitis diminutio", la consideraba como no acaecida a los efectos de extinción civil de tales obligaciones; y concedía la correspondiente acción contra el capiti diminuído.

No a todas las obligaciones, la reclamación de cuyo cumplimiento podía paralizarse utilizando la "exceptio senatusconsulti macedoniani", se concedió el "non repetit" cuando no se hubiera hecho uso de la "exceptio". Sólomente a aquellas en las que la "exceptio" se entendía otorgada, más que como protección al demandado, como castigo a la conducta

(1) (Véase ARIAS. "Derecho Romano"; Tomo II - Págs. 539 y sigtes.)

del demandante, es decir, "in odium creditoris",
"in poenam creditoris".

Muchos comentaristas no aceptan la especie de obligación natural procedente de simple pacto, o sea, de un acuerdo de voluntades desprovisto de formalidades que no alcanza la categoría de contrato. "Los textos se refieren -escribe ARIAS - (loc. cit.) concretamente al pacto de pagar intereses y aún cuando de tales convenciones no surgía acción se admitía que los intereses "ex pacti conventione datae repeti non possunt". (1)

Parece llegado el momento de finalizar el examen de las obligaciones naturales a la luz de los textos romanos y de la labor de los romanistas. Cabe estimar como destacablemente válidas las siguientes conclusiones :

I) La obligación natural en Derecho clásico significaba una obligación provista, sí, de acción, pero fundada en el "Ius Gentium", no en el "Ius Civile". Lo que ocurre es que los clásicos identifican el "Ius Gentium" con el "Ius Naturale".

II) En la época justiniana el término que se

(1) BURDESE. "La nozione classica di naturalis obligatio". Torino 1955. Citado por ARIAS RAMOS op. cit.

usó en la clásica -"debitum"- (o "natura debitum"), es sustituido por el de "obligatio naturalis". Expresión ésta bajo la cual se amparan dos supuestos muy distintos: a) obligaciones perfectas, provistas de acción, pero fundadas en el "ius naturale", así como las obligaciones imperfectas, desprovistas de acción, que podían basarse tanto en el "ius civile" como en el "ius Gentium" o "naturale"; b) se incluyen también las llamadas obligaciones naturales impropias que se caracterizan por la carencia de acción y la "soluti retentio". Supuestos en los que, realizado un pago, no tiene quien lo hizo la "condictio indebiti".

III) De este agrupamiento que, forzada e inexactamente, se efectúa, se deduce la existencia de obligaciones naturales propias, con "soluti retentio" y susceptibles de compensación, novación, etc. y de obligaciones naturales imperfectas cuyo único efecto es la "soluti retentio". En definitiva, el Derecho justiniano nos lega un perfil de obligaciones naturales confuso por demás y contradictorio. Un concepto que, por desgracia, se conserva a lo largo del tiempo; y aún más: que es muchas veces manipulado, reelaborado y situado en zonas de total confusión. Un concepto, causante de vacilaciones y oscuridades casi insolubles.

IV) Las líneas maestras de la tesis de BONFANTE - que hemos expuesto y aceptamos con reparos - presentan la quiebra de que nunca la eficacia de estas obligaciones naturales igualaría a las jurídicas "strictu sensu". Porque admitiendo su proge-
nie natural, resulta obvio que cuando el "Ius Civile" preordenó todo el sistema de relaciones privadas, acorraló, por así decir, la vigencia y ejecutoriedad del "Ius Naturale", siquiera lo conectase en su dimensión del "Ius Gentium", identificación y conexión correctas en la etapa del Derecho clásico, como ya quedó manifiesto. (1)

(1) Cfr. FUENMAYOR : "El cumplimiento "post mortem" de las obligaciones naturales". AAMN, Tomo X, Madrid, 1959, y MARTINEZ G. CALCERRADA : "Problemática de las obligaciones naturales" RGLJ, Marzo, 1964.

LAS OBLIGACIONES NATURALES EN DERECHO COMPARADO

El Derecho moderno no desconoce la categoría de las obligaciones naturales. Es más; diríase que las admite hasta con cierta generosidad, en general. Por descontado, hay legislaciones que no se ocupan del instituto; sin embargo, aún entre ellas se hace preciso distinguir aquellos ordenamientos que no las mencionan "nominatim" más sí dan cobijo a ciertos posibles supuestos de las mismas, de aquellos otros que parecen omitir rigurosamente la especie.

Por lo demás, es necesario puntualizar que los ordenamientos de ascendencia germánica - Código alemán, austríaco y suizo-, sin mencionar las obligaciones naturales, admiten, en determinadas hipótesis soluciones coincidentes con el efecto fundamental de la obligación natural (la irrepetibilidad del pago). Los Derechos de tronco e influencia romanista padecieron en buena medida - y como resulta

ba lógico - la misma inseguridad de configuración que caracterizó al Derecho Romano respecto de esta peculiar categoría obligacional. Códigos como el de nuestro país que, sin desconocer la obligación natural (y en su momento trataremos de probarlo), omiten absolutamente cualquier referencia expresa a la "naturalis obligatio". Otros como el francés, en cambio, acogen expresamente la institución. Y sobre todo, en el Código italiano, aún más que en el francés napoleónico; se formula una construcción perfectamente aplicable al vínculo natural, consagrándose de esta suerte el acceso a la subsunción positiva de la vieja "naturalis obligatio" romana bien que convenientemente remozada. Revelador es, dato elocuente, que un Código Civil de tan irreprochable técnica como el italiano, no dude en conceder su reconocimiento formal a las obligaciones naturales, identificándolas con los deberes sociales de contenido patrimonial.

En fín, la panorámica que ofrece en la materia el Derecho Comparado es amplia. A su vista parece oportuno recorrerla en sus más destacados enclaves.

1) DERECHO FRANCES

El Código napoleónico da entrada a la obligación natural, o dicho más exactamente, a las obligaciones naturales, en su artículo 1235. En él se lee: "Todo pago presupone una deuda. Lo que se haya pagado sin ser debido es repetible. La repetición no es admitida en las obligaciones naturales que se hayan satisfecho voluntariamente".

El precepto es inequívoco y de él, en principio, cabe extraer dos consecuencias. Primera, por supuesto, la admisión incondicionada de la existencia de cierto tipo de obligaciones que viven, digamos, al margen del Derecho formal. Segunda, la exposición del principal efecto de las mismas: el de la irrepetibilidad del pago. ¿Cual es el antecedente doctrinal de la norma? Se define la obligación natural como "aquellas que, en el fuero del honor y de la conciencia, obliga a aquel que la ha contratado al cumplimiento de lo que en ella se halla contenido" (1). Antes se ha partido de una clasificación trimembre de las obligaciones realizada desde el punto de vista de la naturaleza del lazo que producen: obligaciones naturales y civiles a la vez, obligaciones sólo civiles y obligaciones sólo naturales. Estas últimas, "en el fuero del honor y de la conciencia, obligan a aquel que las ha contratado a llenarlas: más la ley civil rehúsa la acción a aquel que las

(1) R. J. Pothier "Tratado de las obligaciones" (Trad. española).

ha contratado, para perseguir en justicia la ejecución."

Más adelante se va a perfilar la idea al señalarse que tales obligaciones no lo son sino de una manera impropia puesto que no han sido formadas por un lazo de Derecho. Y hay preocupación en subrayar que el Derecho francés corre en la materia por diversos derroteros que lo hace el Romano. Porque "estas obligaciones naturales de Derecho Romano son, en 'nuestro Derecho, verdaderas obligaciones civiles". Prosigue advirtiéndole que las "puramente naturales son :

1º). Aquellas a las cuales la Ley niega la acción, por relación al perjuicio de la causa de donde proceden. Tal es la deuda debida a un figonero por gastos hechos por uno de sus domiciliados.(1)

2º). Las que nacen de contratos de personas que, teniendo un juicio y un discernimiento suficientes para contratar son, empero, declaradas por la ley civil como inhábiles para poder hacerlo. Tal es la obligación de una mujer, bajo la potestad marital, que contrata sin su autorización."

(1) Costumbres de París, Artº 128.

El texto del Art. 1235 (con el precedente clave que acaba de citarse) planteó modernamente dos cuestiones :

1a.- Cuales son los casos en que se producen obligaciones naturales (problema de enumeración y de exclusión); y

2a.- Cuando se constituían éstas (problema de nacimiento.

No se olvide que el Art. 1235 es el único del texto legal en que se mencionan las obligaciones naturales. Pues bien, con ánimo de sistematizar las corrientes doctrinales sobre el tema, creemos poder destacar cuatro.

A) Tesis positivista.

B) Tesis iusnaturalista.

C) Tesis mayoritaria (o de RIPERT), y

D) Tesis crítica (o de BONNECASSE).

A) TESIS POSITIVISTA.

Se afirma que la mención del Art. 1235 es un mero vestigio histórico, una reminiscencia sin

contenido real actual, sin mayor alcance. En efecto - se afirma - hoy resulta imposible aplicar, por obvias razones los supuestos sobre los que el Derecho Romano perfiló y creó las obligaciones naturales. Una rigurosa visión positivista del Derecho determina que se excluya del ámbito jurídico todo aquello que no venga amparado por la correspondiente acción.

Lógicamente la visión positivista tuvo escasa resonancia.

B) TESIS IUSNATURALISTA.

Para AUBRY y RAU las obligaciones naturales son obligaciones civiles degeneradas. A estas últimas no ha juzgado conveniente el legislador reconocerlas como obligaciones civiles. O, después de haberlas reconocido, como tales, las retira, "por motivos de utilidad social, el derecho de acción". La postura de AUBRY y RAU confirma la tesis mantenida por FENET, MARCADE, HUC y LAURENT. Línea de pensamiento que se ha calificado como clásica en la interpretación del texto napoleónico. En cierta medida viene, efectivamente, a continuar la tradición romanista. Tal enfoque sistemático se basa - como expone el Prof. ESPIN (1) "en la distinción entre la obligación natural y el mero deber moral, perte-

(1) "Apuntes sobre la obligación natural en nuestro Código Civil", Murcia, 1953.

neciendo la primera a la esfera del Derecho y el segundo a la de la Moral. La obligación natural, todavía en el campo del Derecho, al verse privada de la posibilidad de su exigibilidad coactiva, queda reducida, según frase expresiva de la doctrina francesa, bien a obligaciones civiles abortadas, bien a obligaciones civiles degeneradas. La obligación natural - concluye ESPIN - es, pues, según esta teoría, una obligación civil imperfecta.

Más al utilizarse la expresión "obligaciones civiles degeneradas", se está intentando resaltar el carácter jurídico de la obligación natural, identificándola de alguna manera - por lo menos en sus orígenes - con la civil.

Empero ha de quedar constancia de un dato y de sus repercusiones. El dato de la formación iusnaturalista de quienes primero comentan el Código francés. Lo que propicia se acepte sin vacilaciones que la obligación natural es la impuesta por el Derecho Natural, con lo que se la identifica con la obligación moral. La obligación natural romana, por el contrario, con el "numeros clausus" propio de esta figura queda olvidada del todo. Hay, por lo tanto, una nueva generación de obligaciones naturales que poco o nada tienen que ver con las romanas. Las obligaciones naturales "nueva manera" son aquellas

impuestas por la moral o por las leyes de la conciencia. Su "numerus apertus" y su inconcreción suponen entregar al juez el cometido de apreciar si, verdaderamente, tienen dicho carácter de obligaciones naturales. Tarea no demasiado dificultosa guiándose por su conciencia y sentido de la equidad. Con igual certidumbre se afirma que las obligaciones naturales pueden servir de causa jurídica suficiente para una promesa o contrato.

El problema que va a constituir el punto de máxima discusión por los comentaristas es el de si la obligatoriedad jurídica de las obligaciones naturales se produce por vía de confirmación, de ratificación o por medio de la novación de la obligación natural en obligación civil.

C) TESIS MAYORITARIA

Para SAVATIER (1) en Derecho Positivo todo deber moral está, en principio sancionado por una obligación civil. En este sistema la obligación natural, lejos de ser un deber moral que tuviese el beneficio de una protección del Derecho, es un deber que "souffre specialement de son inimitié".

Pero se ha señalado con acierto (ROCAMORA,

(1) "Des effets et de la sanction du devoir moral en Droit positif contemporain et devant la jurisprudence", Poitiers, 1926.

ob. cit.) que, aunque el principio sentado por SAVATIER en cuanto a la identidad del deber moral y de la obligación civil o natural podría parecer inspirado por la doctrina que tiende a asimilar el deber moral y la obligación natural, parece más bien que aquel principio se aproxima a la concepción mantenida a este respecto por AUBRY y RAU.

En la opinión de SAVATIER, la ley civil niega a algunas obligaciones la cualificación jurídica a que aquellas tendrían derecho. Las obligaciones naturales son así obligaciones civiles imperfectas, de la misma naturaleza que las civiles aunque privadas de ciertas prerrogativas que el legislador concede a obligaciones de superior categoría; es decir, el derecho de exigibilidad.

Todo esto resulta cierto. Más, como apunta RIPERT, no se aclara una cuestión esencial: la de explicar porqué la Ley niega una vida plena a las obligaciones naturales y porqué la jurisprudencia admite en ciertos casos que la nulidad del contrato deje subsistir la obligación natural y no la admita siempre.

¿Qué significa, a juicio de RIPERT, la obligación natural? Un deber de conciencia, elevado a un plano exterior -el plano de lo jurídico- por obra

del Juez. Textualmente escribe RIPERT : "el deber se esfuerza en convertirse en obligación. Nos encontramos en una región inferior del Derecho, donde la noche concluye y el día no ha llegado aún. Cuando uno de estos deberes llega al día se transforma en obligación civil". (1)

Aparte la fuerza de la imagen, queda fuera de duda el rigor científico de la construcción. Aún podemos abordar, en este terreno, nuevas perspectivas. En el esquema de RIPERT se parte, como sabemos, de la identificación deber de conciencia = obligación natural. Pero si las obligaciones naturales son deberes morales capaces de producir determinados efectos jurídicos, ¿quien desencadena tales efectos y de qué forma?

A la primera de las preguntas cabe responder que es el Juez quien determina en cada caso la producción de efectos jurídicos. Es decir, que la juridificación de la obligación natural es obra exclusiva del Juez. No podía ser de otra manera. Lo cual nos está acuciando para plantearnos el tema de la causa. Pues resulta manifiesta la obligación del Juez, a fin de apreciar el mérito de las acciones y el valor de los actos, sopesar el deber y la motivación moral de los mismos. Y en cuanto a la segunda cuestión - la relativa a la forma de introducir por

(1) "La regle moral dans les obligations civiles", Paris, 4a. edic. 1949, pág. 364.

el Juez el deber natural en el medio jurídico - ha de responderse que ello se lleva a cabo en el momento en que el Juez reconoce expresamente la existencia de éste y lo califica precisamente de "obligación natural".

Entonces se nos presenta claramente a la obligación natural como una ficción, un simple expediente para situar los deberes morales en el terreno del Derecho. Pues bien, coherente y riguroso con su punto de partida, RIPERT afirma que "si la obligación natural se confunde por su naturaleza con el deber moral, debemos extraer esta consecuencia : la de que no hay una teoría general de la obligación natural, sino más bien obligaciones naturales susceptibles de producir diferentes efectos".

Así, quien realiza un acto jurídico está inspirado por la idea de que no hace sino cumplir con su deber. En principio nadie se mueve por el solo imperativo, frío y aséptico, de la Ley. La persona que "cumple" trata simplemente de ejecutar aquello que "debe". Ahora bien, el problema, desde una perspectiva técnica, estriba en determinar en qué medida esta intención, esta idea, puede modificar el carácter normal y la calificación jurídica del acto realizado. La consideración de la intención, de los motivos, es preponderante. El Juez investiga cual

es la causa que ha movido a las partes para actuar y no puede por menos de estimar que alguien ha obrado a instancias de un imperativo íntimo de conciencia. Fuera, desde luego, de un mandato de la Ley.

Sin embargo, se objeta : el Juez es sólo Juez; no un moralista. Ciertamente. La obligación natural no existe en tanto que el deudor no ha afirmado su existencia mediante el cumplimiento o pago de la misma. Nace, pues, del reconocimiento por el deudor del deber moral que sobre él gravita. Cuando los Tribunales reconocen la existencia del deber moral -de un concreto y específico deber moral, no del deber moral en abstracto- deciden, por ejemplo, que allí existe técnicamente un pago y no una donación; o que el pago no está sujeto a repetición. No manifiestan otra cosa. Mediante una sistematización de esta serie de decisiones llégase a proclamar que existe "la obligación natural", como categoría independiente.

Y es justamente aquí donde el razonamiento teórico falla a nuestro entender. Porque no parece prudente ni correcto desde el punto de vista técnico alcanzar a construir quiméricas categorías a partir de distintas, muy distintas, realidades prácticas. Dicho de otra forma: se parte de supuestos que nada en común o muy poco tienen, para, mediante un proceso de

abstracción, llegar a establecer la existencia de peculiarísimas obligaciones.

En suma, volviendo a la tesis de RIPERT, necesitados de hacer sitio a los deberes de conciencia, los juristas los han llamado "obligaciones"(1)

La jurisprudencia francesa había ya trazado las líneas maestras o directrices de esta postura. Para ella -como exponen COLIN y CAPITANT- (2) "existe obligación natural siempre que una persona se obliga respecto de otra o le entrega una cantidad de dinero, no por impulso de una intención de liberalidad, sino con el fin de cumplir un deber imperioso de conciencia y de honor". El carácter moral que se atribuye a las obligaciones naturales ha posibilitado la inclusión dentro de esta categoría de aquellas obligaciones que derivan de los lazos de familia y parentesco. La jurisprudencia francesa ha seguido un rumbo claramente espiritualista; tan es así que, en contra de lo preceptuado por los Arts. 334 y 340 del "Code Civile" e inspirándose en principios de equidad, absolutamente concordes por lo demás con la actual corriente socializadora, ha admitido que un padre está obligado naturalmente al sostenimiento de sus hijos naturales no reconocidos.

De otra parte, también se admitió la existen-

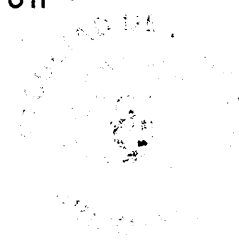
(1) Cfr. RIPERT, ob. cit.

(2) "Curso elemental de Derecho Civil", trad. española III, 3a. edic. pág. 120.

cia de una obligación natural en el deber de asistencia prestado entre hermanos y hermanas legítimos, entre hermanos y hermanas naturales y entre los unos y los otros.

"Ello no quiere decir - escribe ROCAMORA (ob. cit.) - que en esta especie de obligaciones se agotaría el número de las de carácter natural. Por el contrario, al lado de ellas, tienen también esa naturaleza -dentro de la jurisprudencia francesa- las que tienen por origen un defecto de capacidad, las nulas civilmente que dejan subsistente una obligación natural, las obligaciones naturales originadas por razón de un daño o de un enriquecimiento injusto, las que tienen por finalidad remunerar un servicio prestado y no retribuido, y, por último, las llamadas obligaciones civiles degeneradas (entendiendo por éstas, aquellas que, habiendo nacido con carácter de deudas civiles, por virtud de una presunción legal dejan al acreedor desprovisto de todo medio coercitivo contra el deudor. Tal es el caso de las obligaciones naturales cuya fuente es la prescripción, la autoridad de la cosa juzgada, el juramento decisorio y el perdón de la deuda)."

Con relación a la obra, inteligente y hábil de la jurisprudencia francesa al respecto, se ha dicho certeramente que demuestra cómo la acción



innovadora de la práctica judicial no es solamente un remedio afortunado a un estado, por así decir, patológico del Derecho consagrado, sino que constituye en realidad para el legislador una colaboración útil e inevitable como resultado de las exigencias de la evolución jurídica en sus relaciones con la evolución social". (1)

La crítica a esta teoría se basa - como hace notar el Prof ESPIN - (2) en que tiene que explicar cual es la naturaleza del acto de espontáneo cumplimiento de la obligación natural. Porque, si no existe verdadera obligación jurídica, no cabe hablar tampoco de un verdadero pago, por lo que se ha formulado la pregunta de si dicho acto constituirá una donación. Los partidarios de esta postura contestan negativamente. Precisamente la jurisprudencia francesa ha dado validez a través de la teoría que nos ocupa a obligaciones y a pagos que, de otra suerte, podrían ser impugnados. Se ha dicho que "en la mayor parte de los casos en que ha sido llamada a decidir, la cuestión litigiosa era la de saber si obligaciones contraídas de palabra o en documento privado, debían o no ser anuladas por constituir liberalidades hechas sin observar las formas solemnes prescritas por el Art. 931 del Código Civil. La jurisprudencia ha dado validez a estas obligaciones siempre que ha visto en ellas el cumplimiento de un deber de conciencia". (3)

(1) Cruet : "La vie du droit", Pág. 50.

(2) Ob. Cit. Pág. 10

(3) COLIN y CAPITANT, Ob. Cit. Pág. 122, ed. esp.

"Por tanto -señala el Prof. ESPIN - (1) para la teoría del deber moral el punto de contacto de éste con el Derecho es el del espontáneo cumplimiento de dicho deber, a partir del cual empieza la irrepetibilidad a sancionar jurídicamente el deber moral; pero el cumplimiento del deber moral no puede configurarse como pago, porque, según esta teoría, no existe vínculo jurídico anterior. De ahí las dificultades de la teoría para explicar el acto de espontáneo cumplimiento".

D) TESIS CRITICA

La más fuerte censura que el pensamiento anterior recibe es la de quienes le achacan nada menos que constituir la negación del Derecho como ciencia autónoma. BONNECASSE escribe "en la historia de las teorías jurídicas contemporáneas, G. Ripert habrá de ser considerado como el responsable doctrinal de la negación del Derecho como ciencia autónoma, puesto que es a él a quien hay que atribuir la tesis, esencialmente romántica, de considerar al Derecho como existente sólo por la Moral" (2) Parte BONNECASSE de una premisa fundamental : la de concebir la obligación natural como una noción técnica de puro valor jurídico. Para él "la obligación natural es una obligación civil bajo condición potestativa. Su existencia,

(1) ESPIN (ob. cit. Págs. 10 y 11).

(2) BONNECASSE "Supplement au traité de Baudry Lacantinerie et ses collaborateurs". Tomo V, Pág. 270.

en cuanto tal obligación civil, depende de un acto del deudor".

El legislador ha jerarquizado las obligaciones civiles. De un lado, la categoría superior de las mismas se integra por las llamadas obligaciones civiles perfectas -o, simplemente, obligaciones civiles-; de otro, se encuentran, en el peldaño inferior, las obligaciones naturales que no son, en verdad, otra cosa que "obligaciones civiles virtuales o potenciales".

Hay que advertir que el reproche y la crítica de BONNECASSE se basan en un afán sistematizador de la ciencia jurídica en relación con otras fuentes de conocimiento y aplicación (Cfr. MARTINEZ G. CALCERRADA). Teme BONNECASSE que, bajo la doctrina de las obligaciones naturales, se introduzcan en la ciencia jurídica elementos ajenos a la misma, especialmente elementos provenientes del campo moral. Piensa, con razón, desde luego, que ningún sistema positivo habla de deberes morales ni de escrúpulos de conciencia. Unos y otros son irrelevantes en Derecho. Y, es más, son elementos perturbadores que no hacen sino enmascarar realidades jurídicas o encubrir simplemente la nada.

En términos aún más precisos y vigorosos se ha dicho -además de que la obligación natural se emplea "perturbando el orden jurídico positivo"- que, a través

de ella, se deforman ciertas instituciones del mismo. Tal como escribe J. FLOUR (1) no basta para afirmar la existencia de una obligación que una persona se crea constreñida al cumplimiento de un deber de conciencia y ciña su conducta a su cumplimiento. Es preciso más : que el Juez esté de acuerdo con el intersado, que admita igualmente que existe tal deber y que alguien está legitimado para su exigencia. En suma : conjunción de una creencia subjetiva y de una verificación objetiva.

Líneas atrás se ha apuntado cómo la obligación natural puede considerarse -según este punto de vista crítico- como perturbadora del orden jurídico positivo. Ampliando y concretando al tiempo el aserto quede constancia de que varias instituciones sufren deformación por su presencia; así, la novación, la donación, y la causa.

La postura crítica obedece, pues, como ya se anticipó, a motivaciones sistemáticas de una estricta autonomía científico jurídica. Con ella no se rebate, sin embargo, "la específica motivación de la obligación natural en su dimensión ético jurídica" (2)

No quedaría completa la panorámica de la doctrina francesa sobre obligaciones naturales si no expusiéramos la tesis sustentada por la doctora

(1) Prólogo a la obra de M. GOBERT "Essai sur le role de l' obligation naturelle".

(2) MARTINEZ G. CALCERRADA, ob. cit. Pág. 31.

MICHELLE GOBERT en un interesantísimo trabajo titulado "Essai sur le role de l'obligation naturelle", publicado en 1957 y al que se ha hecho mención ya poco antes. GOBERT ha pretendido, fundamentalmente, dar respuesta a esta cuestión: ¿cual es el papel que realmente desempeñan las obligaciones naturales en el Derecho francés? A tal objeto, parte de una minuciosa exposición de todos los que pudiéramos llamar supuestos clásicos de obligación natural. Luego de un exhaustivo análisis, concluye afirmando que en ellos la obligación natural cumple una tan solo aparente misión, que es figura inútil y de injustificada existencia. Bastaría, para caer en la cuenta de su inutilidad, con aplicar a tales supuestos "clásicos" las normas del pago indebido.

En cambio, hay otros casos en que la figura resulta de efectiva utilidad: todos aquellos en que el Juez "tropieza dentro del Derecho positivo con normas que impiden ciertas soluciones moralmente justas".

Es entonces cuando el recurso de la obligación natural resulta no solo aceptable, sino necesario. Caso, por ejemplo, de la promesa de alimentos al hijo adulterino no reconocido. De acuerdo con la normativa del Código, mal podría el Juez condenar al padre a pasarle a ese hijo una pensión alimenticia, pues no se admite el reconocimiento; pero declarando

que esa promesa es el cumplimiento de una obligación natural, se rodea el obstáculo para obtener un resultado moralmente satisfactorio e indudablemente justo (1).

En definitiva, se trata -mediante la obligación natural- de resolver un capital problema jurídico y real: el de dar justa solución a los conflictos de intereses mediante una flexible y extensiva aplicación de principios latentes en el ordenamiento. Y, en especial, el principio de la equidad en su más estricto significado.

Como corolario del tema en Derecho francés podemos hacer nuestras las palabras de MOISSET DE ESPAÑES (ob. cit): "sobre la base de una sola mención a las obligaciones naturales, doctrina y jurisprudencia han construido toda una teoría de esta institución, asimilada primero a la concepción clásica del Derecho Romano; luego, se han colado de rondón los "deberes morales", confundidos -casi diríamos disfrazados- bajo la misma denominación, y como si se tratase de aplicar la misma norma, pero con un efecto totalmente diferente: ser la causa de un compromiso válido y exigible. Hoy, coexisten ambas instituciones."

(1) Cfr. MOISSET DE ESPAÑES, "Obligaciones naturales y deberes morales", RGLJ, Abril, 1969.

II) DERECHO ITALIANO

Es muy sugestivo el panorama que ofrecen Derecho positivo y doctrina italiana en torno al tema de las obligaciones naturales.

El antiguo Código Civil de 1865 no definía la obligación natural, y únicamente, se limitaba a sancionarla en el párrafo 2º del Art. 1237 : "la repetición no procede en las obligaciones naturales que se hayan satisfecho voluntariamente".

Tal disposición suscitó contrapuestas posturas en la doctrina. Brevemente haremos indicación de las más sobresalientes.

POLACCO y PACCHIONI (1) sostenían la tesis de la identidad de obligaciones civiles y naturales con el solo rasgo diferenciador respecto a estas últimas de la carencia de acción. Partiendo de tal premisa, llegaban a afirmar la posibilidad de novar y compensar las obligaciones naturales. Incluso podían ser aseguradas mediante garantías pignoraticias o hipotecarias.

En la tesis mantenida por BARASSI (2) -apoyado en la caracterización de POTHIER- se ha sostenido que la obligación natural no consiste en la sim-

(1) POLACCO "Le obbligazioni nel Dir. Civ. italiano" 2a. ediz. Roma, 1914. Págs. 93 y sigts.
PACCHIONI "Delle obbligazione in genere" 2a. ediz. Padova, 1935. Págs. 153 y sigts.

(2) BARASSI "Obbligazioni naturali", Nuovo Digesto Italiano, vol.

ple manifestación de un puro hecho, sino que estriba en una obligación moral y social de contenido patrimonial. Se perfila la postura señalando, además, que el cumplimiento de la obligación natural -faltando el "animus donandi"- no constituye donación, sino estrictamente pago.

Mencionemos ahora la tesis de BONFANTE, que supone un criterio favorable en cierto modo al de PLANIOL, y representa un hito de capital importancia en la dogmática del tema (1).

Señala BONFANTE cómo en ningún otro precepto del Código se nos dice por el legislador qué es la obligación natural. La única guía que tenemos para intuir el pensamiento del legislador es la misma palabra "natural". No existe actualmente aquella antítesis, que oportunamente quedó reflejada, entre los principios de Derecho Natural y de Derecho Civil con predominio de unos u otros, según los casos. Consecuentemente, una obligación que reúna todos los elementos para ser jurídica, pero que es anulada en virtud de un solo principio -sea el que fuere, referente a la forma, capacidad, etc.- será siempre nula. Podrá ser, si se quiere, una obligación perfecta teóricamente; más desde el punto y hora en que el Derecho le niega toda eficacia, será imperfecta; y no como el hombre que nace ciego o sordomudo, sino como una

(1) Entre otras varias obras de BONFANTE consagradas a las obligaciones naturales, destaca la publicada dentro de los "Scritti giuridici varii", Vol. III, págs. 30 y Sigtes.

criatura abortiva, como un no nacido.

Sin embargo, una obligación que nada es para el Derecho, puede representar una obligación moral o social, y como tal, viene a unirse a las demás obligaciones sociales de carácter patrimonial. Y cuando el Código no dice cual sea la obligación natural, ni está permitido a la Jurisprudencia el crearla -como ocurría en el Derecho Romano-, se debe entender por tal "toda obligación social de carácter patrimonial". En suma, la obligación natural viene determinada por la norma social establecida por la conciencia de la comunidad.

Enormemente atrayente resulta el punto de vista de CARNELUTTI. A su juicio, la obligación natural no constituye una relación jurídica -"noción insípida", según sus palabras, pero sí un "fenómeno jurídico".

La obligación natural es un género de obligación, una obligación imperfecta ("es un feto", dice textualmente). "Lo que podría llamarse la tragedia de la obligación natural consiste en algo que constituye el tormento de los juristas : ese feto, la mayor parte de las veces, muere en el preciso momento en que abre sus ojos a la luz. Por eso, la obligación natural se parece a un meteoro: no existe antes,

no existe después, existe y pasa un solo instante. Siempre que el cumplimiento es instantáneo -lo que de ordinario ocurre- el cumplimiento hace nacer, y a la vez, hace morir la obligación natural. (1)

En un trabajo posterior, el ilustre maestro italiano pone de relieve que "la relación jurídica natural, si de un lado es menos que la relación jurídica civil, de otro es algo más porque nace en aquella región donde están las raíces divinas del Derecho". (2)

Señalamos asimismo que no han faltado en la doctrina quienes nieguen la existencia de obligaciones naturales en el "Código". (3)

Por lo que toca al Código vigente de 1942, su artículo 2034, bajo la rúbrica "obligaciones naturales", dispone . "No es admitida la repetición de aquello que ha sido espontáneamente prestado en ejecución de deberes morales o sociales, salvo que la prestación haya sido hecha por un incapaz. Los deberes indicados en el párrafo anterior y cualquier otro para el que la Ley no otorgue acción, pero excluye la

(1) CARNELUTTI - "Obbligo del debitore e diritto del creditore", Riv. di Diritto Commerciale, XV, 1927. I, Págs. 316 y Sigtes.

(2) "Rapporto giurídico naturale"; Riv. di Diritto Commerciale, 1936, II, Pág. 172.

(3) Al respecto, vide GIORGI, "Teoría delle obbligazioni, 7a. ediz., Firenze, 1907, Vol. I, Pág. 37.

repetición de lo que se haya pagado espontáneamente, no producen otros efectos".

Observemos, en primer término, que según el texto legal transcrito las "obligaciones naturales" (expresión que se toma del Código precedente) se identifican ahora como "deberes morales o sociales".

Parece que el precepto acoge la prevalente tesis del deber moral con contenido patrimonial. Empero, se ha observado que al deber moral se añade el deber social. ¿Es una simple yuxtaposición? No, probablemente. Más que adicionar un nuevo concepto lo que se ha conseguido es calificar ese deber moral como social. O sea, referirse a la moral que la sociedad acoja en un determinado momento, estableciendo un criterio, una guía de interpretación y aplicación del mandato legal que, lógicamente, habrá de excluir al deber moral no social.

Opinión aceptable, plausible, incluso, aunque -como apunta MARTINEZ G. CALCERRADA (1)- quepa aclarar que asimismo quizá haya deberes morales personales que impelan a cumplir y, al hacerlo voluntariamente, vinculen por irrepetibilidad a la manera de la "naturalis obligatio".

La consecuencia jurídica de estos deberes

(1) Ob. Cit. Pág. 33

morales o sociales es la irrepetibilidad de lo satisfecho voluntaria o espontáneamente. Ahora bien : ¿ es ésta la consecuencia única de las obligaciones naturales?

No ha de ocultarse que así piensa una buena parte de la doctrina italiana que cuenta, además, con el apoyo de la Casación. No obstante, con excelente argumentación se ha objetado este punto de vista.

La doctrina del débito y la responsabilidad se ha considerado útil -como más adelante mostraremos- para explicar la peculiaridad de las obligaciones naturales. Se dice, en efecto, que el esquema normal de la obligación -débito más responsabilidad- sufre una mutilación en el sentido de que de los dos ingredientes, sólo permanece el débito y falta la responsabilidad.

PACCHIONI -artífice de la idea- distingue en el vínculo obligacional, un vínculo espiritual y otro material. Al primero se le puede equiparar con el "debitum" o deuda del deudor y tiene su fundamento en una norma estatal o en un principio general del Derecho de índole moral. El segundo, que atrae la responsabilidad y la exigencia de la deuda, tiene su base en una norma estatal o positiva. De esta suerte, las obligaciones naturales únicamente tendrían vínculo

espiritual, serían "como media obligación civil" y, por lo tanto, no supondrían una auténtica obligación. (1)

¿ Qué es ésto? ¿ Se resuelve así la cuestión? No, ciertamente. Se ha descrito, simplemente; y de una forma que, en virtud de la premisa -"obligación igual a débito más responsabilidad"- deja abierto el problema y sin respuesta la pregunta sobre si -y cómo- la obligación natural sea una obligación jurídica.

Hay, por parte de la doctrina común, un desenfoque motivado por el ideal y por el método positivista. No se ha sabido advertir la presencia de lo jurídico fuera de lo coercible con lo cual se ha precluído la explicación más obvia e inmediata del fenómeno. Para BARBERO (2) el fenómeno resulta tan simple que "para simplificar correspondientemente también su denominación, eliminando la duda o el equívoco de una antítesis cualquiera entre Derecho y naturaleza, nos parece oportuno expresarlo de nuevo en términos más coherentes e inmediatamente significativos, de "obligación no coercible" en lugar de "natural".

Y añade el Profesor de Milán : "Para quien ha vencido el equívoco -jurídico igual a coercible-, la obligación llamada natural no es precisamente otra cosa que una "obligación no coercible", en la cual

(1) PACCHIONI. "Trattato delle obbligazioni", Págs. 130 y Sigtes.

(2) "Sistema del Derecho Privado" Tomo III.

nada se pierde de la "real juridicidad" y de la necesidad íntima del "vinculum iuris" como raíz del débito; falta sólo la "coercibilidad".

Creemos necesario aquí, antes de proseguir el bosquejo del panorama doctrinal italiano, mostrar nuestra plena identificación con el parecer del Profesor BARBERO cuya coherencia y rigor -en este como en tantos problemas- es admirable.

Preciso es referirnos, seguidamente, a la tesis sustentada por S. ROMANO y por OPPO (1). Para estos autores, la llamada obligación natural no es una "relación" jurídica, sino un "hecho" jurídico y hasta, mejor aún, el primer elemento de una "hipótesis" más compleja que, sobrevenida la prestación espontánea (otro elemento de la hipótesis), adquiere la relevancia de hacer firme e irrepetible, sin ser donación y ni siquiera liberalidad, lo que se haya dado. A juicio de OPPO, hay que delimitar claramente dos conceptos: el de obligación natural y el de ejecución de la obligación natural. La primera es en sí y por sí un hecho social jurídicamente relevante; es decir, un hecho jurídico en sentido estricto, el cual constituye el presupuesto y elemento esencial para la existencia de un tipo contractual autónomo, que sería la ejecución de la obligación natural. El deber moral y social que preside la atribución, puede configurarse como causa jurídica de la atribución misma,

(1) S. ROMANO "Notte sulle obbligazioni naturali", Firenze, 1945.

OPPO "Adempimento e liberalité", Milano, 1947.

causa consistente en la actuación del contenido de cualquier relación; esto es, en el cumplimiento del deber no jurídico. Pero no es suficiente para la validez de la ejecución de la obligación natural la simple voluntad del acto (esto es, la ejecución material de la prestación -carácter objetivo-), sino que es necesario, además, la voluntad del efecto atributivo; o sea, la voluntad de ejecutar la prestación en observancia de un deber moral o social (carácter subjetivo). La ejecución de la obligación natural tiene naturaleza contractual porque es necesaria la adhesión del "accipiens", que se configura como aceptación de la atribución. O sea, como aceptación de la voluntad de atribución, deducida del contenido concluyente del deudor.

En realidad, un efecto patrimonial no puede producirse en la esfera jurídica ajena sin el concurso de la voluntad del interesado.

Contra la tesis contractual se pronuncia CARRESI (1). Entiende que la obligación natural debe considerarse como un deber moral y social que no es susceptible de cumplimiento y que, además, consiste en una prestación de carácter patrimonial, de contenido determinado. Escoge para su fundamentación una relación jurídica negocial producida, ya por la imposibilidad de su normal eficacia (cumplimiento de un débito residuo procedente de una concordia o desconocido por la sen-

(1) "L'obbligazioni naturale nella piu recente letteratura giur. ital."
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1948, Pág. 546.

tencia injusta o ya prescrita), ya por falta de un presupuesto intrínseco (cumplimiento de un débito para con el profesional que obligatoriamente debía estar inscrito en su colegio), ya por ineficacia susceptible de adquirir plena relevancia jurídica (fiducia testamentaria), ya por inactividad del derecho que nace de la relación (juego y promesa).

Amplíemos la cuestión que páginas atrás quedó esbozada: ¿es la irrepetibilidad de lo satisfecho voluntaria o espontáneamente la única consecuencia de las obligaciones naturales? Conviene, como primer paso, solventar el alcance de la expresión "espontáneamente prestado" que utiliza el texto legal. Se trata de un pago efectuado, no solo sin constricción jurídica (que no se concede), sino también sin una constricción moral que, en algún caso, puede tener el sentido y la relevancia de un hecho de violencia.

Profundizando más cabe percibir que queda una obligación jurídica. Pues bien, la casi unánime trayectoria de la casación italiana es la de negar a tal obligación la posibilidad de ser novada. Ciertamente es que, fuera de la "soluti retentio", la obligación natural no produce otros efectos. Pero esto, creemos con BARBERO, "no quiere decir que no sea capaz de novación ya que esta no es un efecto de la obligación natural sino un hecho -negocio- existente por sí y co-

mo la parte puede cumplir espontáneamente, no se ve la razón por la cual no podría, en vez de cumplir, estipular la novación (que respecto del "pagar" tiene razón de un "minus") (1).

Por su parte OPPO (2) habla de un cumplimiento indirecto. Irónicamente escribe BARBERO: "es sintomático que se abra de ese modo la ventana a lo que se querría tan rigurosamente arrojar por la puerta. Entonces todo el problema viene a ser un hecho de astucia, o, aún tal vez de ... ¡palabras! (3).

Por lo demás y en base a la misma razón que apoya la posibilidad de novación, mientras que no se pueda reconocer a la obligación natural susceptible de compensación judicial o legal, debe conceptuarse susceptible de compensación convencional, que también es un modo de cumplimiento espontáneo.

Otra de las cuestiones que se plantean en torno a la norma del Art. 2034 es la de restringir y precisar los términos de aplicación del párrafo 1º. Al referirse a los deberes morales y sociales como equivalentes de la obligación natural, se corre el riesgo, como advierte el Prof. ESPIN CANOVAS (4) de ampliar excesivamente la noción de ésta y aún de que resulten excesivamente desdibujados los lindes entre la misma y

(1) BARBERO, Ob. cit. Pág. 11 de la trad. española.

(2) Ob. cit.

(3) BARBERO, loc. cit. nota.

(4) Ob. cit.

otras instituciones distintas.

La amplitud del concepto resulta manifiesta y puede inducir a comprender en él innumerables casos. A este respecto la tarea interpretativa debe orientarse preferentemente a establecer qué deber ético y social surge como obligación natural y cual no pasa de ser una pura obligación de conciencia.

En opinión de OPPO (1) no hay contraposición entre deberes morales o sociales; trátase, por el contrario, de los deberes de la moral social que se distinguen de otros deberes sociales como los de la cortesía, corrección, decoro, etc.; es decir, que los deberes a que alude el Art. 2034 no son, por tanto, cualquier clase de deberes morales o sociales sino precisamente los de la moral social, quedando, en consecuencia, excluidos no solo los restantes deberes sociales mencionados, sino también los deberes de la moral individual -aquellos que se refieren al individuo aislado- e incluso los de la moral interindividual, cuando se refieren a relaciones entre individuos que no estén justificadas por relaciones particulares entre sujetos determinados.

Según esto, han de excluirse del concepto de obligación natural las obligaciones de conciencia (como el precepto genérico de amar al prójimo, socorrer al indigente, etc.). Estas prestaciones realizadas por

(1) "Adempimento e liberalità", Milano, 1947.

afecto, piedad, etc., constituyen donación y no cumplimiento de obligación natural.

Para que válidamente pueda hablarse de esta se exige que el deber moral se refiera a una determinada relación entre dos personas (como el deber de prestar alimentos a un pariente necesitado que no tenga derecho a ello, según la ley, el de sostener a un viejo servidor, etc.).

Sin embargo CARRESSI (1) afirma que la obligación natural debe considerarse sólomente aquel deber moral y social que no sea susceptible de ejecución más que por una prestación de carácter patrimonial de contenido determinado, viniendo así a excluir aquellos deberes morales y sociales que serían susceptibles de ejecución por vía distinta de la que se sigue para la ejecución de una prestación patrimonial. En esta línea de pensamiento, CARRESSI sostiene que el deber moral de prestar alimentos a un pariente próximo necesitado pero que no tiene derecho a ellos por ley, es un supuesto de donación y no de cumplimiento de una obligación natural. Por el contrario, el deber moral de prestar alimentos al hijo natural no reconocido -el cual, con arreglo al Art. 279, carece del derecho a ellos- ha de encuadrarse como verdadera y propia obligación jurídica provista de su correspondiente sanción puesto que la

(1) Ob. Cit. Pág. 546.

obligación del padre de dar alimentos se extiende al hijo natural no reconocido o no reconocible, derivándose tal obligación, no del hecho del reconocimiento, sino del hecho natural de la procreación.

Un supuesto extremadamente interesante para nosotros -por lo que significó la S.T.S. español de 17 de Octubre de 1932, de la que en su momento nos ocuparemos- es el del deber moral de recibir asistencia entre los concubinos. La Jurisprudencia italiana, a través de una varia casuística, lo consideró como obligación -asumida sin forma solemne- de corresponder mediante un pago a la concubina o a la estuprada. (1)

Consideró también que una declaración de débito sin especificación alguna de causa, que no esté sujeta a la efectividad de un "animus donandi", ni pueda perfilarse bajo los efectos de una "vis compulsiva" por sustraerse a persecución o amenaza por parte del ex amante, no puede interpretarse sino como realización de una obligación de conciencia por el hombre a causa de haber truncado la relación amorosa. Tal obligación entra en la esfera de las relaciones reguladas por la moral, relaciones que la ley reconoce jurídicamente sólo cuando son voluntariamente satisfechas. (2)

(1) Corte de Casación 15-5-38, 5-3-29, 27-1-41.

(2) Corte de Apelación, Milano, 12-6-47.

En fín, citaremos dos posturas doctrinales extremas : la de FADDA y la de BRUNETTI, partidario el uno de excluir todo tipo de obligaciones naturales y el otro defensor a ultranza de las mismas. FADDA (citado por M. G. CALCERRADA) expone que la alusión positiva de las mismas es una simple reminiscencia histórica; en la actualidad todo derecho subjetivo lleva consigo el mecanismo correspondiente para su eficaz actuación, es decir, para su exigibilidad. Por ello no puede hablarse de un derecho de crédito si el acreedor no puede exigir su cumplimiento.

BRUNETTI afirma la existencia de un Derecho Natural tan vigente como el Derecho Positivo y que funciona a su lado, considerando a las obligaciones naturales como expresión de ese Derecho Natural. Por cuya razón, al igual que otros autores, se aprovecha de este concepto utilizándolo como resorte en el que apoyar la eficacia del Derecho Natural.

III) DERECHO ALEMAN

En este apartado se examinará, no sólo el Derecho alemán, sino que se hará referencia a algunos ordenamientos de inspiración germánica.

El parágrafo 814 del BGB dispone: "La prestación efectuada con el fin de ejecutar una obligación no puede ser reclamada si el autor de la prestación ha sabido que no estaba obligado a la prestación o si ella correspondía a un deber moral o a una consideración de decoro". En algunas otras traducciones se sustituye la expresión "consideración de decoro" por la de "motivo de conveniencia".

Ya se mencionó el hecho de que los ordenamientos jurídicos de raíz germánica (Códigos alemán, suizo y austríaco), sin aludir expresamente a las obligaciones naturales, admitían en determinadas hipótesis soluciones coincidentes con el efecto fundamental de la obligación natural (la irrepetibilidad del pago). Inequívoca prueba de este aserto es el texto legal que acabamos de transcribir.

La primera reflexión que, a su vista, cabe formular es la de que en él se apela a la idea de deber moral para sobre ella fundar la irrepetibilidad. Es decir, para el legislador alemán las obligaciones natu-

rales encuentran apoyo, no en motivos o razones de conciencia, sino estrictamente en deberes jurídicos. No es que se ignoren las motivaciones de conciencia; ocurre, simplemente, que caen fuera de la zona de lo jurídicamente coercible. Tal es el caso, recogido por VON TUHR (1) de los deberes de asistencia entre próximos parientes a que no alcance el régimen de alimentos de la ley. Cita igualmente VON TUHR otro supuesto que nos parece verdaderamente destacable y esclarecedor: el de la retribución de servicios importantes prestados gratuitamente. En ciertos casos, sobre todo cuando haya una diferencia considerable de situación patrimonial entre ambas partes, existe un deber moral de resarcir los daños causados sin culpa por una persona con discernimiento. En cambio no se reconoce la obligación moral de cumplir un contrato nulo por defecto de forma o un deseo del causante no expresado con sujeción a las formas decretadas para los actos de última voluntad.

Afirma VON TUHR que "la coerción de los deberes morales escapa de suyo a los resortes de poder de que dispone el Estado, razón por la cual parece que quedan totalmente al margen del Derecho". Sin embargo, no siempre ocurre así. Efectivamente, quien cumple un deber moral en la creencia de que cumple un deber jurídico queda imposibilitado de pedir la restitución de lo entregado. Y, por otra parte, se ha esta-

(1) VON TUHR "Tratado de las obligaciones", traducción española, tomo I, pág. 24.

blecido que el cumplimiento de un deber moral no tiene carácter de donación. De donde se infiere que los deberes morales, en cuanto el Derecho los considera susceptibles de cumplimiento, constituyen obligaciones imperfectas.

Más ha de subrayarse que ni siquiera es menester que el "deber moral" o la "consideración de decoro" se tomen como deberes jurídicos para, en vista de ello, excluir la repetición. Basta, simplemente, con afirmar que el deber moral constituye una "causa adquirendi" suficiente.

En efecto, explica KRUCKMANN (1) : "hasta ahora, por la fuerza sugestiva del Derecho Romano, hemos considerado el problema desde un punto de vista falso : considerábamos una presunta obligación de parte de quien da, mientras debemos considerar la facultad autónoma de adquirir en el "accipiens". Es decir, que deben arrumbarse en absoluto las ideas de obligación y de prestación : la justificación jurídica estriba en una especial facultad autónoma de adquirir. Por consiguiente, nos encontramos aquí con una "causa adquirendi" y no con una "causa dandi" ".

Innegablemente la explicación de KRUCKMANN resulta, cuando menos, muy hábil e ingeniosa. Y al propio tiempo, como escribe FUENMAYOR (2), es sen-

(1) KRUCKMANN, Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts, LVII, 2, 1910, págs. 16 y sigtes.: "Nachlese zur unmöglichkeitslehre".

(2) FUENMAYOR, Ob. cit., pág. 22

cilla. La "soluti retentio" no es el cumplimiento de una imperfecta obligación civil. Es un sistema en que la ley considera la existencia de la obligación natural como una causa suficiente y lícita de la atribución patrimonial que se ha operado a consecuencia de la entrega plenamente voluntaria que realiza el "tradens".

Pues bien, el postulado de que los deberes morales son "causa adquirendi" suficiente, parece, en definitiva, significar lisa y llanamente que a los tales deberes se conceden efectos jurídicos muy distintos a los de las obligaciones naturales. Porque ya no se trata simplemente de la "soluti retentio". Hay algo notablemente más decisivo: que ellos constituyen causa suficiente para generar obligaciones civiles perfectamente exigibles.

Por tanto, un criterio prevalente en la doctrina alemana: el de considerar a las obligaciones naturales (denominación desconocida por el BGB) de análoga naturaleza que las civiles. Y el de denominarlas imperfectas por carecer de ciertas prerrogativas reservadas por el legislador a la categoría superior; en concreto, son imperfectas por no ser coercibles. (1)

Junto al párrafo 814 del BGB, es preciso destacar el 534 del mismo cuerpo legal. Según él,

(1) Vide VON TUHR, ob. cit., pág 23, y ENNECCERUS (L.) y LEHMANN (H.), "Tratado de Derecho Civil", Derecho de obligaciones, tomo II, vol. I, trad. española.

se considera que existe donación, cuando la atribución patrimonial es ejecutada en cumplimiento de un deber moral o por consideración al decoro, exigiéndose en este caso el acuerdo sobre la gratuidad, requerido por el parágrafo 516 para la donación en general (1).

Por este motivo, la prestación es repetible si el donante cree estar jurídicamente obligado a prestar; mientras que, conforme al 814, la misma prestación es irrepetible también en ausencia del acuerdo sobre la gratuidad y cuando fué efectuada en la creencia de ser jurídicamente obligado.

He aquí, por lo tanto, un irreductible contraste entre estos dos preceptos. Más, ello aparte, es digno de destacar que para que el cumplimiento de un deber moral o de decoro sea donación -como exige el 534- será necesario, habida cuenta de lo establecido en el 516, se considere como requisito esencial el acuerdo sobre la gratuidad y no aplicar el 814, que excluye la necesidad de tal acuerdo.

O bien se deberá afirmar que al cumplimiento

- (1) Establece el parágrafo 516: "Donación es la disposición por la que una persona enriquece a otra en su patrimonio, si ambas partes están de acuerdo en que la transferencia tenga lugar a título gratuito. Si la disposición ha tenido lugar sin la voluntad del donatario, puede el donante requerirle para que en el plazo que señale decida sobre la aceptación. Transcurrido el plazo, se tiene por aceptada la donación, si el donatario no la ha rehusado con anterioridad. En caso de negar la aceptación puede ser exigida la restitución de lo entregado conforme a las normas sobre restitución que rigen para el enriquecimiento injusto".

de un deber moral no es esencial la conciencia de la gratuidad -como quiere el 814- y, entonces, no es de aplicación el 534, que define el cumplimiento mismo como donación.

Frente a estas dos soluciones, tal vez lo más correcto sea preferir la segunda. Ello por estimar más idóneo pasar sobre una definición legislativa que no sobre una disposición inequívocamente preceptiva, cual es la contenida en el 814.

¿ Cómo podría sintetizarse la postura de la dogmática alemana sobre las obligaciones naturales?

Por una parte -se dice- trátase de obligaciones imperfectas. No basta, empero, con ésto; porque, ciertamente, de alguna de ellas puede derivarse una excepción. Pero, en otros supuestos, lo que de ellas se origina es la base de otra relación jurídica, como el reconocimiento de deuda, la fianza o un derecho pignoraticio. Es decir, que algunos tipos o casos de obligaciones naturales tienen una eficacia o trascendencia distintas que otros. En ocasiones su consecuencia se adscribe al derecho adjetivo -nacimiento de una excepción procesal-; otras veces producen consecuencias de derecho sustantivo - los citados ejemplos de reconocimiento de deuda, de la garantía pignoraticia o de la personal.

Una puntualización muy exacta es la que formula el Prof. KARL LARENZ (1) al decir que "no siempre que el ordenamiento jurídico toma en consideración un deber moral o una consideración de decoro se reconocen éstos como deberes jurídicos". La expresión "obligación natural" se utiliza en la bibliografía unas veces para designar las prestaciones no accionables, otras para aludir a los deberes sociales o convencionales (deudas del juego o de la apuesta) que constituyen el fundamento jurídico de la prestación, o indistintamente para uno y otro caso". Y termina afirmando con indiscutible lógica: "A consecuencia de esa falta de claridad en el léxico es recomendable que ese término no se utilice".

En efecto, como hemos visto, en el BGB no se utiliza. Lo que se emplea es, unas veces, la expresión "deber jurídico imperfecto" ("unvollkommenen rechtsphlichten"); otras, la de "deber natural" ("natural verphlichtungen").

Por su parte LEHMANN (2) afirma que no es inexacto pero que tampoco caracteriza de manera suficiente a la obligación natural la afirmación de que es una deuda sin responsabilidad (Ein Schuld ohne Haftung) pues no sólo está excluída la posibilidad de que el acreedor se dirija contra el patrimonio del deudor,

(1) KARL LARENZ "Derecho de obligaciones", tomo I, pág. 31 de la trad. española.

(2) LEHMANN "Recht der Schuldverhältnisse", Tubinga, 1958, correspondiente a la última edición del Tratado de ENNECCERUS. Pág. 15, nota 3.

sino, incluso, la acción declarativa.

No quedaría completo este breve examen de las obligaciones naturales en el Derecho alemán sin que se citaran algunos ejemplos de las mismas.

Así ha de mencionarse, en primer término, como supuesto más importante, el que surge del párrafo 814; según el cual, como ya sabemos, se considera válido el pago efectuado en virtud de un deber moral aunque hubiese mediado error por parte de quien efectuó la prestación y haya realizado el pago creyendo estar civilmente obligado.

Suelen considerarse también como obligaciones naturales o imperfectas las correspondientes al pago del saldo de deuda remitido por un concordato.

En cambio, el caso de deudas prescritas es harto más discutible. Como advierte ENNECCERUS (1) podría dudarse de que se trate de una obligación natural, tanto antes como después de la declaración de prescripción. Porque, a su juicio, el crédito es accionable ya que si el deudor no opusiese la excepción, el juez le condenaría a pagar.

Las hipótesis, algunas veces citadas, de pago de deudas de juego, apuestas o loterías prohibidas

(1) ENNECCERUS, Ob. cit., nº 3, pág. 14, párr. a).

por el Estado y de los créditos correspondientes a corretajes matrimoniales, no corresponden, creemos, a obligaciones naturales. El fundamento en ellas de la irrepetibilidad reside en la ilicitud misma del acto.

Concluído el examen del Derecho alemán, se estima oportuno aludir a otro ordenamiento germánico, de alta perfección técnica, como es el Derecho suizo.

IV) DERECHO SUIZO

Sobre el tema de las obligaciones naturales el Derecho Suizo contiene directrices semejantes a las del BGB.

En primer lugar, el Art. 63 dispone, bajo el epígrafe "pago de lo indebido", lo siguiente: "el que haya pagado voluntariamente lo que no debía, no puede repetirlo si no prueba que lo pagó creyendo, por error, que debía lo que pagaba.

Lo que ha sido pagado para satisfacer una deuda prescrita o para cumplir un deber moral no puede ser repetido".

Dos hipótesis se contienen en el precepto transcrito: la primera, el pago de la deuda prescrita, caso típico de obligación natural. La segunda, el pago en ejecución de deberes morales.

La deuda prescrita subsiste, a tenor del precepto, como obligación imperfecta. En efecto, en tal situación el acreedor no puede obtener por la fuerza la prestación y una excepción perentoria amenaza a su pretensión. Pero cuando una deuda está sometida a una excepción perentoria, prácticamente está considerada como inexistente ("als Nichtschuld"). El Art.

63, párrafo segundo, dice que el pago, efectuado por error, de una deuda prescrita no puede repetirse y considera el pago de una deuda que uno sabe que está prescrita, no como una donación, sino como una ejecución. Es por ello por lo que decimos que la deuda prescrita subsiste, si bien sea como obligación imperfecta. El hecho de que esté desprovista de acción reposa sobre una excepción que debe suscitarse por el deudor y a la cual puede renunciar después de la expiración del plazo de prescripción.

La excepción de prescripción -como dice VON TUHR- no es obstáculo sino para el ejercicio del crédito, más no para el derecho de prenda que garantiza el crédito -Art. 140- ni para la excepción que deriva del crédito.

El apartado segundo del Art. 63 excluye la repetición en caso de ejecución de una obligación prescrita o de un deber moral. No hay lugar a restitución, aún cuando el que se haya enriquecido ignorara que podía oponer la excepción o si considerara por error el deber moral como una obligación sujeta a ejecución forzada. La ley admite, pues, que si las deudas prescritas y los deberes morales no pueden dar lugar a una acción judicial, pueden, al menos, cumplirse válidamente.

Así pues, para la doctrina suiza (vide ROSSEL)

suponen las obligaciones naturales vínculos jurídicos que, sin conferir al acreedor el derecho de recurrir a las vías legales de ejecución, engendran al menos una excepción en su provecho en cuanto a que no dan lugar a repetición alguna cuando el deudor ha pagado. Nuestra Ley, afirma el citado ROSSEL, menciona como obligaciones naturales las deudas prescritas y no todas las otras obligaciones naturales sino aquellas que suponen el cumplimiento de un deber moral.

En suma, la mención del deber moral sirve para que doctrina y jurisprudencia helvéticas concedan a tales deberes morales virtud generadora de obligaciones civiles.

Para terminar, ha de citarse el precepto contenido en el Art. 66 bajo el epígrafe "Reclamación denegada": "no ha lugar a reclamación por lo que se hubiere dado para lograr un objeto ilícito o contrario a la moral".

Como ha señalado la doctrina suiza, han de incluirse en este precepto las deudas derivadas de juegos prohibidos puesto que se trata de cumplimiento de obligaciones con causa ilícita y no de obligaciones naturales o deberes morales. (1)

(1) Vide AUBERT (Maurice) : "La repetition des prestations illicites ou immorales". Lausanne, 1954.

Dejemos constancia de que los preceptos del Código suizo que se han citado (Arts. 63 y 66) se reproducen literalmente en los Arts. 62 y 65 del Código Civil de Turquía.

El Código Civil portugués, publicado el 25 de Noviembre de 1966, de inspiración germánica, en general, sigue por lo que toca a las obligaciones naturales la línea del Código Italiano, es decir, la de confusión entre obligaciones naturales y deberes morales. El libro II del texto legal, bajo la rúbrica "obligaciones naturales", dedica al tema los artículos 402 a 404. En el primero se dice. "La obligación se llama natural cuando se funda en un mero deber de orden moral o social, cuyo cumplimiento no es judicialmente exigible, pero corresponde a un deber de justicia".

En el artículo 404 se dispone que las naturales estarán sujetas al régimen de las obligaciones civiles, salvo la posibilidad de exigir coactivamente el cumplimiento de la prestación. Como indica MOISSET (ob. cit.) "puede disponerse, pues que, además de pagarlas, podrá novárselas, afianzarlas, asegurarlas con prenda o hipoteca, etc."

Por lo que hace a la voluntariedad en el pago de las obligaciones naturales, el artículo 403 es-

tablece que se entenderá por tal el que haya sido
realizado espontáneamente y sin ninguna coacción.

V) DERECHO ANGLOSAJON

No va a resultar extenso este apartado. La razón es palmaria. Construído el Common Law sobre la base de los precedentes y bajo el principio del "judge made law", al escasear especies litigiosas que aludan directamente -o, al menos, tangencialmente- a la problemática que nos ocupa, por fuerza la síntesis de los principios jurídicos en el tema será reducida.

No obstante, es hacedero destacar las líneas maestras del sistema.

Una primera nota: hay en el Derecho inglés -y también en el norteamericano- casos de obligaciones no previstas de acción cuyo pago voluntario es válido y que pueden servir de base a una promesa voluntaria de pago que equivale, en cierta medida, a una novación.

En efecto, tal ocurre en los casos de la deuda prescrita y en aquellos otros de la parte de deuda remitida mediante convenio en supuestos de quiebra; ambos tienen como consecuencia sustantiva la "soluti retentio" (1). Pero, además, admiten la posibilidad de transformación de estas obligaciones -desprovistas, en principio, de acción- en obligaciones civiles perfectamente exigibles por vía judicial.

(1) Vide POLLOCK, "Contracts", pág. 144 y WILLISTON "Contracts" nº 138 y siguientes).

¿Cuál es el medio utilizado para producir la "perfección" de la obligación inicialmente incompleta? El Juez acude para ello al artificio de la promesa de pago.

Promesa de pago que necesariamente ha de constar por escrito. Ello se debe, sin duda, a que el juzgador considera que el documento escrito presta suficiente apoyo para dotar de eficacia a lo que "ab origine" era judicialmente intrascendente. Se considera que la promesa escrita de pago -pese a tener una "past consideration"- tiene virtud vinculante. Y se razona en el supuesto de la deuda prescrita aduciendo que la prescripción sólo extingue la acción pero no el derecho; y que el deudor puede siempre renunciar a la prescripción -que no pertenece al Derecho sustantivo sino al procesal o adjetivo-. Razonamiento irreprochable y solución legal que impone en Inglaterra la "Limitation Act" de 1939.

Otro aspecto del problema es el de la función que en el sistema anglosajón corresponde a los deberes morales. Se ha escrito que "el Derecho puede hacer tres cosas con el deber moral: convertirlo en obligación jurídica, no reconocerlo ninguna eficacia, o bien atribuirle ciertos efectos" (1). Pues bien, frente a estas tres posibilidades, se escoge, en general, salvo dos excepciones que señalaremos, la segunda, es decir, la

(1) PUIG BRUTAU, "Fundamentos de Derecho Civil" Tomo I, vol. II, "Derecho General de las Obligaciones", pág. 103.

consistente en no reconocer al deber moral ninguna eficacia.

En Derecho inglés el problema se plantea agudamente en materia contractual. Para delimitarlo descriptivamente hemos de referirnos a algunas peculiaridades del sistema. Sabido es que los requisitos para el válido nacimiento de una relación contractual son los siguientes :

- 1º) Oferta - "offer"-
- 2º) Aceptación - "acceptance"-
- 3º) Causa - "consideration"-
- 4º) Propósito de establecer una relación jurídica - "intention to create legal relationship"-

Al objeto que aquí nos importa hemos de detenernos en el requisito de la "consideration" que, en cierta medida, equivale a lo que en el sistema continental llámase causa.

"Consideration" significa en el Derecho contractual inglés el respaldo exigido para el ejercicio de toda acción. Toda promesa debe tener como contrapartida una "consideration" que supone una venta-

ja patrimonial venida a compensar de aquel sacrificio y de la misma naturaleza que entraña toda promesa (1). Y además, desde el punto de vista de la transferencia, sirve la "consideration" para distinguir dos tipos distintos de contrato: uno llamado "deed" -que es una especie de acto formal abstracto en el que, prescindiendo de la causa, se puede basar una transmisión de propiedad- y otro denominado "debt", que viene a ser como una especie de contrato real que supone, como indispensable condición, el hecho de que el deudor recibió efectivamente la cosa.

Es doctrina aceptada universalmente en el Common Law la que sienta la Cámara de los Lores al establecer que todos los contratos, orales o escritos, tienen que basarse en una "consideration", a no ser que se trate de contratos recogidos en escritura pública.

Insistiendo en estas nociones, citemos lo que al respecto de la "consideration" afirma CHESHIRE: (2) "la "consideration" es el precio de la promesa". Y por su parte ANSON (3) señala que "consideration" es algo hecho, sufrido o prometido de hacer sufrir por el promitente respecto a la promesa de la otra parte. Es totalmente necesario que sea "en consideración a esta otra promesa" pues la "consideration" es la que da

(1) Cfr. BELTRAN DE HEREDIA, "El cumplimiento de las obligaciones" Págs. 186 y sigtes.

(2) CHESHIRE, "Law of contracts", Londres, 1945. Pág. 41.

(3) ANSON, "Principles of the English Law of Contracts", Oxford, 1940. Pág. 82.

fuerza vinculante a la promesa.

En definitiva, por consiguiente, retengamos que la "consideration" supone una circunstancia externa de carácter objetivo "en consideración a la que" se hace la promesa.

Pues bien, decíamos que, en cierta medida, "consideration" equivale a causa. Ahora bien, no son, en absoluto, nociones completamente asimilables. Y es precisamente en las diferencias que encontramos entre una y otra donde se va a fundar la falta de aplicación de los deberes morales en el sistema anglo-americano.

Para que haya verdaderamente "consideration" deben llenarse las siguientes condiciones :

1.) "Real but not adequate".

Es decir, que debe haber una "consideration" real aunque no haya equivalencia entre las prestaciones. Por pequeña que sea la "consideration", en relación a la prestación que brinda la otra parte, será, sin embargo, válida.

2.) "Not immoral".

No se acepta como "consideration" la pres-

tación de un hecho ilícito, prohibido o inmoral.

- 3.) "Owes more than was promised".
Condición que se traduce en el hecho de que la equivalencia no debe ser fijada por un tercero.
- 4.) "Moral considerations are not sufficient".
Es decir, que la simple atención a deberes morales no sirve de "consideration".
- 5.) "Present or future".
No se acepta como 'consideration' una prestación ya pasada -o "past consideration".

Retengamos estas dos últimas características que son las que presentan interés para el problema que estudiamos. Cabe observar que se ha negado valor a la "moral consideration" en las siguientes hipótesis :

- a) Promesa hecha después de la cesación del concubinato, aunque hubiese existido seducción.
- b) Promesa de alimentos a un pariente necesi-

tado.

- c) Promesa de cumplir las intenciones del difunto no expresadas formalmente en el testamento.
- d) Promesa de resarcir daños a los que no estaba obligado jurídicamente.

¿ En qué se apoya el juzgador británico para rechazar la "moral consideration"? Uno de los argumentos para ello radica en que, si la aceptara, se podría convertir cualquier promesa -carente de toda "consideration" en un deber jurídico, pues bastaría formularla dos veces para que fuera exigible. En efecto: la primera promesa crearía un deber moral de cumplirla; la segunda, tendría como "consideration" ese deber moral. Y ya sería civilmente exigible.

Respecto a la "past consideration", la regla general es, como hemos indicado, su no admisibilidad. No se admite, por ejemplo, en el supuesto de que en atención a servicios ya prestados, se formule luego una promesa de remunerarlos y que esa promesa sea vinculante.

Las excepciones a esta regla son las ya men-

cionadas del supuesto de deudas prescritas o aquel otro de promesas efectuadas por el quebrado o fallido de pagar el saldo.

Ahora bien, se hace preciso puntualizar que en tales casos se acepta la "past consideration" porque no es una simple "moral consideration", sino que con anterioridad existía una verdadera obligación jurídica en la que sólomente se había extinguido la acción para exigir su cumplimiento.

Como un supuesto en el que la "moral consideration" no se tomó en cuenta citaremos el de (1) Mills contra Wyman, caso en el que el hijo, mayor de edad, de A, enfermó mientras se encontraba indigente y entre desconocidos, siendo cuidado por B; A no tenía ninguna responsabilidad legal por los servicios prestados a su hijo mayor de edad. Posteriormente A prometió a B compensarle por los servicios realizados. El Tribunal falló que la reclamación de B no podía prosperar ya que no había cuidado al hijo de A como consecuencia de promesa de éste. En casos de este tipo concurre toda clase de razones morales por las que A debería compensar a B por los servicios prestados, pero no existe base legal de reclamación.

MOISSET DE ESPAÑES (ob. cit.) recoge el caso de "Eastwood contra Kenyon"; en él, el Juez Lord

(1) 3 Pick. N^o caso 207.

Dennan decía : "aunque haya un deseo explicable de reconocer a todas las obligaciones fundadas en la conciencia ("conscientious engagements"), podría ello dar lugar a consecuencias dañosas para la sociedad; una de las cuales sería la de que frecuentemente se otorgaría preferencia a tales prestaciones espontaneas sobre las pretensiones nacidas de deudas civiles. De ello resultaría una multiplicación de pleitos y tales prestaciones voluntarias de servicios se multiplicarían en perjuicio de los verdaderos acreedores."

Otro caso de interés es el presentado y resuelto por el "Supreme Court of Indiana" en 1861 - caso de Schnell contra Nell- Al fallecer Teresa Schnell dejó en testamento mandas de dinero a tres legatarios a razón de 200 dólares por individuo. Más el testamento era nulo porque en el momento de morir esta señora no poseía individualmente ningún bien, y por tanto, todos los bienes muebles e inmuebles correspondían a su esposo, Zacarías Schnell.

El viudo, a fin de dar satisfacción a los deseos de su esposa, extiende un documento en el que hace constar que, en atención a que su mujer había sido siempre una esposa cariñosa y le había ayudado eficazmente a adquirir su patrimonio mobiliario e inmobiliario, se comprometía a entregar a los beneficiarios las sumas legadas en testamento nulo.

Reclamado el cumplimiento de la promesa por los beneficiarios, la Corte resuelve que allí había una "moral consideration", insuficiente para fundar una promesa jurídicamente vinculante.

En análogo sentido el caso de Dusenbury contra Hoyt (1), que trata del siguiente supuesto : Cuando una persona con una obligación legal de pagar una cantidad se encuentra liberada de esta obligación por legislación vigente, como en el caso de A, deudor de B que presenta un estado de quiebra y queda liberado de su obligación como consecuencia de tal situación, si posteriormente promete a B pagar la cantidad en cuestión B podrá recuperarla. Sin embargo no es la obligación moral de pagar una deuda, en que se incurre por actos lícitos, lo que constituye la "consideration", sino la teoría de que la liberación por motivo de quiebra es tan solo una defensa que la legislación ha concedido al deudor y que éste puede utilizar o no a su antojo. Por consiguiente, si acuerda no hacer uso de tal derecho, renuncia a él y al efectuar tal renuncia no puede alegar la liberación como defensa.

En definitiva: al contrario de lo que sucede en el Derecho continental, no se admite generalmente el deber moral o de conciencia como "consideration" de una promesa obligatoria.

(1) 53 New York - 521.

El explicar el razonamiento de esta toma de postura llevaría lejos. Baste con indicar que, tal vez, la justicia anglosajona, con criterio pragmático y, por supuesto, discutible, ha preferido la seguridad jurídica a la adecuación o coincidencia exacta entre moral y Derecho (1).

(1) Cfr. ROSCOE POUND : "Law and Morals", Chapel Hill, 1926, Págs. 109 a 115.

VI) DERECHO DE PAISES HISPANOAMERICANOS Y DE FILIPINAS.

1. A R G E N T I N A

De las obligaciones naturales se ocupa el Código Civil argentino en el Libro Segundo, Sección 1a, Título 2º y luego de tratar en el primero "de la naturaleza y origen de las obligaciones". Cuatro artículos forman el citado título segundo: los que van del 515 al 518.

DALMACIO VELEZ SARSFIELD, alma del primer cuerpo legal de la República Argentina, "creyendo justa la observación de DURANTON sobre la falta que advierte en los Códigos respecto de las obligaciones naturales", declara paladinamente que "tomamos lo dispuesto en el de Chile, el único en que se encuentran leyes positivas sobre dichas obligaciones". (1) Y, en efecto, así procede con ligeras variantes.

Principia el texto legal por establecer que obligaciones naturales "son las que, fundadas sólo en el Derecho Natural y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas por el deudor autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas".

(1) Notas al Código Civil de la República Argentina, por D. VELEZ SARSFIELD.

De la definición legal se deducen tres caracteres distintivos :

- 1º.- Se fundan en el Derecho natural o en la equidad.
- 2º.- No confieren acción para exigir su cumplimiento.
- 3º.- Cumplidas por el deudor autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas.

El primero de estos caracteres no es sino un aspecto de la falta de acción. El tercero se relaciona más bien con los efectos de las obligaciones naturales (arg. art. 516). El segundo, por el contrario, constituye el carácter esencial de las obligaciones naturales (1).

El cumplimiento de las obligaciones naturales queda "librado al honor y la voluntad del deudor". Es por ello por lo que el Código establece que se fundan "sólo en el Derecho Natural y en la equidad".

La doctrina argentina (DE TEZANOS PINTO, SALVAT, LAFAILLE), se pregunta si las obligaciones naturales merecen verdaderamente el nombre de obligaciones. ¿No hay una contradicción flagrante en hablar de

(1) Vide SALVAT: "Tratado de Derecho Civil Argentino"; "Obligaciones en general", I).

obligaciones cuyo cumplimiento no es obligatorio para el deudor o, en términos más breves, de obligaciones no obligatorias?

Es evidente, empero, que producen una serie de efectos importantes: no puede repetirse lo pagado; pueden ser novadas, garantizadas, etc. Aunque sea debilitado, el vínculo jurídico existe y como dice MAYNZ (citado por SALVAT, ob. cit.), "la obligación natural es útil al acreedor todas las veces que pueda hacerla valer sin recurrir a una persecución judicial".

Se ha escrito que "el principal de sus efectos, pero no el único, es el vinculado con la validez del pago que se efectúa en cumplimiento de una obligación natural y la imposibilidad de repetirlo". (1)

Por si no fuera suficiente con lo establecido en el Art. 515 el Código insiste en el 516: "el efecto de las obligaciones naturales es que no puede reclamarse lo pagado cuando el pago de ellas se ha hecho voluntariamente por el que tenía capacidad legal para hacerlo". Aclara al respecto VELEZ SARSFIELD en nota a este artículo que en la expresión "lo pagado" se comprende, no sólo la dación o entrega de cualesquiera cosas, sino también la ejecución de un hecho, la fianza de una obligación, la suscripción de un docu-

(1) L. MOISSET DE ESPAÑES: "Las obligaciones naturales en el Derecho Civil argentino", Temas de un curso, Córdoba, 1967.

mento, el abandono de un derecho, el perdón de una deuda. La significación jurídica de pago en toda su extensión, se advierte en el título que trata de los pagos.

El alcance del adverbio "voluntariamente" , (término empleado por el legislador en el Art. 516 que hemos transcrito), se ha creído referido a que el pago de una obligación natural, para ser válido e irrepetible, debe ser hecho con pleno conocimiento de causa, es decir, sabiendo que no se estaba obligado a verificarlo (1).

Sin embargo, parece interpretación más ajustada la que estima basta con que el pago haya sido "espontáneo", o sea, que no haya mediado coacción.

Con independencia de la validez e irrepetibilidad del pago, producen las obligaciones naturales otros efectos. Uno de los cuales es la posibilidad de su novación, posibilidad unánimemente aceptada por la doctrina. Si bien es cierto que en otros ordenamientos jurídicos puede discutirse esta solución -porque la doctrina no encuentra normas expresas que resuelvan el problema- en el Código argentino, en cambio, no hay lugar a dudas merced a lo que dispone el Art. 802. La novación supone esencialmente, como es sabido, la existencia de una obligación anterior que se extingue

(1) Cfr. SALVAT : "Tratado de Derecho Civil Argentino", "Obligaciones en general", I).

y, al mismo tiempo, genera una obligación nueva. Por ello se establece en el Art. 802 que "si la obligación anterior fuese nula o se hallaba ya extinguida el día que la posterior fué contraída, no habrá novación".

No ha de olvidarse que en el Código argentino la obligación natural, aunque desprovista de acción, es una verdadera obligación jurídica y puede, por lo mismo, servir de base suficiente para la novación. Y como anota certeramente MOISSET "aún en el caso de las obligaciones extinguidas por la prescripción no estamos verdaderamente frente a una obligación extinguida, ya que lo que se ha extinguido es la acción, mientras que la obligación subsiste como natural". (1)

Hay otro argumento irreprochable en favor de la posibilidad de novación de las obligaciones naturales: si una natural se puede pagar, que es la extinción perfecta, ¿por qué se negaría la posibilidad de novarla, es decir, de extinguirla por su transformación en otra obligación civil válida? VELEZ SANSFIELD, en nota al Art. 516, declara categóricamente: "la obligación natural puede así ser causa legítima de obligaciones civiles que se contraigan por la novación de ella ..."

(1) MOISSET - Ob. Cit. Pág. 9.

Y, por último, el argumento "a contrario" que se extrae del Art. 2057. Según este precepto, "la deuda de juego o apuesta no puede compensarse ni ser convertida por novación en una obligación civilmente eficaz". Si en este caso es necesario establecer una excepción a la posibilidad de novar las obligaciones naturales, ello se debe a que en las de más hipótesis la novación es perfectamente válida. Y la causa de prohibir la novación en este supuesto reside, precisamente, en el carácter y naturaleza de las deudas de juego que, como más adelante se verá, más que obligaciones naturales son obligaciones ilícitas.

Quede, por lo tanto, como conclusión que el segundo de los efectos de las obligaciones naturales en Derecho Civil argentino es el consistente en la posibilidad de su novación.

Abordemos ahora, siquiera brevemente, la cuestión de si las obligaciones naturales pueden ser confirmadas. Se ha respondido afirmativamente. Más parece necesario puntualizar que no todo tipo de obligaciones naturales pueden ser objeto de confirmación. En el supuesto - hoy derogado - del n° 1° del Art. 515 (inhabilidad o incapacidad del obligado) la confirmación sería hacedera por tratarse de una nulidad relativa. No lo sería, por el contrario, en el caso

de obligaciones reprobadas por el Derecho Civil, como las deudas de juego. Entonces, la confirmación del acto jurídico -contrato de juego- no sería posible por tratarse de una nulidad absoluta.

En el supuesto de que exista ya la declaración de nulidad del acto y que se trate de una obligación natural, ¿procede la confirmación de ella? La solución negativa se impone en base a las razones siguientes: 1a., la confirmación supone la existencia de un acto jurídico sujeto a una acción de nulidad (Art. 1059 del Código Civil argentino); en el caso que nos ocupa, o bien la nulidad ya habría sido declarada, o bien no existiría cuestión de nulidad; y tanto en una como en otra hipótesis no puede hablarse de confirmación. 2a., además, la confirmación supone un acto jurídico existente; en el caso de una obligación natural, esta condición falta. Lo único que sería posible es transformarla en una obligación civil por medio de la novación. (1)

En cambio la posibilidad de que la obligación natural se garantice mediante fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituídas por terceros, se admite expresamente en el Art. 518, según el cual "las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituídas por terceros para seguridad de las obligaciones naturales son válidas pudiendo pedirse el cum-

(1) Cfr. SALVAT, ob. cit., págs. 295 a 297.

plimiento de estas obligaciones accesorias".

Lo establecido en este precepto se explica perfectamente habida cuenta de que en las obligaciones naturales lo único debilitado es la acción del acreedor para exigir el pago de ellas; fuera de esto, constituyen obligaciones plenamente eficaces susceptibles de dar lugar a todos aquellos efectos que no dependan necesariamente de la acción del acreedor y, por consiguiente, de servir de base como obligaciones principales a una obligación de garantía (1). No obstante esta opinión -que parece correcta- no es compartida unánimemente por la dogmática argentina; FORNIELLES, por ejemplo, no niega la posibilidad de que la obligación natural pueda ser garantizada con hipoteca, pero es contrario a su aceptación (2).

Los efectos normales de la interdependencia -según los cuales lo accesorio sigue la condición de lo principal- no se producen en este caso. La obligación principal no resulta exigible y lo es, en cambio, la obligación o las seguridades accesorias.

Interesa puntualizar, asimismo, que para la debida eficacia de la garantía es necesario que, al otorgarse, bien sea la seguridad personal, bien sea la real, la obligación asegurada sea ya natural (la

(1) SALVAT - Ob. Cit.

(2) FORNIELLES, "Caracteres de la hipoteca"; Jur. Arg. 1945, doct. pág. 7.

deuda haya prescrito, el crédito haya sido desconocido en sentencia firme). Es en estas circunstancias cuando el fiador o quien constituye hipoteca o prenda tiene conciencia de que asegura el cumplimiento de una obligación que no es exigible al verdadero deudor.

Pasando a otra cuestión en relación con los efectos de la obligación natural, cabe preguntarse si, entre ellos, figura el de su posible compensación. Unánimemente se rechaza que las obligaciones naturales puedan ser compensadas. Sabido es que para la compensación se requiere: 1º, que las deudas sean subsistentes civilmente; y 2º, que sean exigibles. Y al estar las naturales fundadas sólo en el Derecho Natural y en la equidad, no existen civilmente, ni, por esencia, son exigibles. Ello aparte de que el pago de las naturales debe ser voluntario, en tanto que en el caso de la compensación el pago es forzoso.

Examinada ya la problemática de los efectos de las obligaciones naturales en el Derecho argentino, nos ocuparemos de los supuestos legales de esta especie obligacional, supuestos que cita el Art. 515.

El primero de ellos, referente a la falta de capacidad ("las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo,

incapaces por derecho para obligarse, como son la mujer casada, en los casos en que necesita la autorización del marido, y los menores adultos" -apartado 1º del Art. 515) ha sido derogado por ley 17.711. Por tal motivo huelga cualquier observación al respecto.

El caso incluído en el apartado 3º del Art. 515 alude a las obligaciones que proceden de actos jurídicos a los cuales faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como es la obligación de pagar un legado dejado en un testamento al cual faltan formas sustanciales.

Como primera nota a destacar, la de que las obligaciones de esta hipótesis son naturales desde su origen. La falta de las solemnidades legalmente exigidas impide que el acto nazca como tal y engendre obligaciones civiles. En cambio, si la falta o defecto se refiriese sólo a una forma establecida "ad probationem", el acreedor contaría con otros medios para exigir el cumplimiento de esas formas y, de tal manera, lograría indirectamente exigir el cumplimiento de las obligaciones emanadas del acto. Aquí, por tanto, se habría engendrado una obligación civil.

Junto con el ejemplo mencionado por el legislador, puede citarse el caso de una donación a la que faltasen las formas impuestas por el Código en los

artículos 1810 y 1812. Pese a la nulidad que afecta a esta donación, si el donante o sus sucesores quieren cumplirla voluntariamente, no hay nada que se oponga y podrá considerarse que cumplen una obligación natural (1).

El inciso 5º del Art. 515 señala como obligaciones naturales a "las que se derivan de una convención que reúne las condiciones generales requeridas en materia de contratos, pero a las cuales la ley, por razones de utilidad social, las ha denegado toda acción; tales son las deudas de juego.

Debe considerarse que el texto legal se refiere únicamente a las obligaciones que surgen de los juegos prohibidos. Ello porque las obligaciones nacidas de los permitidos (ejercicios de fuerza, destreza de armas, corridas) son perfectamente exigibles y, en consecuencia, entran en la categoría de las obligaciones civiles.

Vieja polémica la de la inclusión o exclusión de las deudas de juego entre las obligaciones naturales. El legislador argentino -al contrario que el chileno- opta por la inclusión. Argumentos de peso, sin embargo, existen contra ella. Se dice que no hay en este caso un deber moral o de conciencia; que falta, igualmente un fundamento de equidad o de derecho natural.

(1) Cfr. MOISSET, Ob. Cit. Pág. 32.

Se trata de verdaderas obligaciones ilícitas que la ley ha reprobado y, como sanción, las ha privado de acción; lo único que tienen en común con las obligaciones naturales es la irrepetibilidad del pago y la falta de acción (1). Y ésto no es suficiente para encuadrarlas como naturales.

Por otra parte, las deudas así nacidas no pueden ser novadas (Art. 2057) ni puede asegurarse su cumplimiento por garantías reales (Art. 3129) o personales.

La ausencia de estos efectos -afirma MOISSET- demuestra que el codificador, a pesar de haber incluido las deudas de juego en la enumeración del Art. 515, las somete a un régimen jurídico totalmente distinto y ello se debe, sin duda, al carácter ilícito del acto que originó la obligación (2).

A continuación nos ocuparemos de los supuestos contenidos en los apartados 2º y 4º del Art. 515. Ambos se refieren a obligaciones que comienzan siendo civiles y luego se transforman en naturales.

El apartado 2º alude a aquellas obligaciones civiles en principio y que se hallan extinguidas por la prescripción. ¿En qué momento esta obligación -que nació civil- pasa a ser natural? ¿Basta el solo trans-

(1) Cfr. LAFAILLE, "Derecho Civil", "Tratado de Obligaciones", Nº 861, Pág. 14.

(2) MOISSET, Ob. Cit., Pág. 39.

curso del plazo fijado por la ley para que se opere la prescripción? O, por el contrario, ¿es preciso que el Juez declare la existencia de la prescripción? Los autores argentinos se inclinaron, en su mayoría, por lo segundo. Empero, la solución contraria gana terreno últimamente, no sólo en la doctrina, sino en la jurisprudencia en base a sólidos razonamientos. Quede, pues, como conclusión la de que la prescripción transforma la obligación en natural en el momento mismo de cumplirse el plazo fijado por la Ley, sin que sea necesaria una declaración judicial (Arts. 4017, 3963, 2022, etc.)

El apartado 4º del 515 alude a las obligaciones que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba o cuando el pleito se ha perdido por error o malicia del juez. Esta última expresión o agregado ("por error o malicia del juez") ha sido considerado ocioso por su casi total imposibilidad de aplicación práctica. En efecto, para demostrar tal error o malicia del juez sería necesario, precisamente, entrar a discutir una sentencia que posee autoridad de cosa juzgada. Ahora bien, no se trata de discutir judicialmente la existencia del error o la malicia del juez, sino de comprobar que el deudor, pese a haber ganado el pleito, paga la deuda; en tal caso, el pago será válido como cumplimiento de una obligación natural.

Por otro lado, la norma ejemplifica los casos que pueden haber conducido a una sentencia en contradicción con la realidad, sin que esa enumeración de supuestos sea completa, ya que podría darse también el caso de que el litigio se hubiera perdido a causa del error o malicia en que incurrió el apoderado o el abogado.

Realizado el pago por el deudor, si éste pretendiese luego repetir, no tendría el acreedor que probar el error judicial ni que el juicio se perdió por falta de prueba. Le bastaría demostrar que ese pago fué espontáneo para que de ello se indujese que el deudor reconoció la subsistencia de la deuda como obligación natural.

Examinados ya los apartados que el legislador dedica a enumerar -con carácter ejemplificativo- distintas hipótesis de obligaciones naturales, resta sólo por añadir que tanto la doctrina como la jurisprudencia, se han esforzado por ampliar el catálogo del texto legal. Así se han reconocido como obligaciones naturales los casos del deudor concordatario, del concursado rehabilitado, de los servicios prestados por un corredor de comercio no matriculado, etc., etc.

El supuesto de un concordato o convenio judicial resulta muy interesante; la ley de quiebras es-

tablece que, en virtud del concordato, queda extinguida toda acción de los acreedores contra su deudor por la parte de crédito que haya sido remitida, salvo estipulación expresa en contrario. Como se ve, se extingue sólo la acción, y, por consiguiente, queda subsistente una obligación natural. Si más tarde el fallido la paga, este acto importará un verdadero pago, no sujeto a repetición y no una simple liberalidad. Lo mismo puede decirse en el caso de remisión voluntaria, total o parcial, de una obligación: si el deudor paga más tarde la parte remitida, existirá un verdadero pago, no un acto de liberalidad; pero el acreedor carecería de acción para exigir su cumplimiento.

A señalar, finalmente, que respecto al problema de los deberes morales o de conciencia, tanto la doctrina como la jurisprudencia argentinas se han mostrado reacias a admitirlos con el alcance de obligaciones civilmente exigibles. Sin embargo, en los últimos tiempos varios casos de deberes morales han irrumpido en el campo jurisprudencial.

Las obligaciones naturales se distinguen de los simples deberes morales en un doble sentido: 1º, en las obligaciones naturales existe vínculo jurídico; en los deberes morales, por el contrario, no lo hay; el cumplimiento de una obligación natural, aunque se en-

cuenta librado a la voluntad del deudor, constituye un verdadero pago, no un acto de liberalidad; no está sometido, por consiguiente, a las solemnidades que la ley establece para las donaciones. El cumplimiento de un deber moral, por el contrario, es simplemente un acto de beneficio (1).

La hipótesis más sobresaliente en relación con los deberes morales es la que alude a la obligación alimentaria del padre de un hijo adulterino o incestuoso, antes de reconocerlo. En ella, a pesar de hablarse de una "obligación natural", se conceden los efectos propios de una obligación civil surgida de un deber moral o de conciencia. Realmente en este caso los efectos son muy distintos a los propios de una obligación natural; se admite la acción del hijo y se condena al padre a seguir prestando alimentos, es decir, se reconoce que el deber moral o de conciencia engendra una verdadera obligación civil provista de acción para exigir su cumplimiento.

(1) Cfr. DE TEZANOS PINTO y SALVAT, Obs. cñts.

2. C H I L E

Constituye, sin duda, el Código Civil chileno una de las obras legislativas más perfectas de cuantas ha producido la América hispana. Es Código de larga gestación. Su gran inspirador, el sabio venezolano Andrés Bello -que hizo de Chile su segunda patria- empleó, junto con sus colaboradores, casi un cuarto de siglo en la tarea de componerlo; concretamente se iniciaron los trabajos en 1831 y concluyeron en 1855. El Código chileno "fué recibido con alborozo no solo en Chile, sino en los demás países americanos de lengua española.

"Su larga y estudiada gestación, el equilibrio de sus preceptos, el eclecticismo que presidió la consulta de las fuentes, la redacción sobria y clara que había sabido darle BELLO, los avances prudentes que acogía, tan a tono con la época, todo hizo que él alcanzara en el continente americano un prestigio análogo al que tuvo en Europa en Código Francés" (1).

Luego de más de un siglo de duración ha sufrido algunas reformas, pero mantiene, no obstante, su estructura y la enumeración primitiva.

Su influencia en el continente y fuera de él ha sido enorme, hasta el punto de que algunos países

(1) P. LIRA URQUIEIA: "Estudio preliminar" a la edición del Código Civil chileno, publicada por el Instituto de Cultura Hispánica. Madrid, 1961.

- Colombia y Ecuador - lo adoptaran íntegramente, al menos durante algún tiempo.

Pues bien, centrándonos ya en la materia que nos ocupa, es preciso señalar que precisamente la temática de las obligaciones es objeto de regulación en el extenso libro IV, libro que, él solo, abarca casi la mitad del articulado del Código. Las especies de obligaciones están estudiadas en diversos títulos y en todos ellos se mantiene la tradición romana. En punto a la distinción entre obligaciones civiles y naturales es particularmente notorio el retorno a la doctrina romanista. El título III del citado libro IV, Arts. 1470 a 1472, lleva como epígrafe "De las obligaciones civiles y de las meramente naturales". Comienza el Art. 1470 por establecer la división obligaciones civiles y naturales, las primeras caracterizadas por la exigibilidad de su cumplimiento; las segundas, "que no confieren derecho para exigir su cumplimiento pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas ...".

Por su parte, la jurisprudencia chilena ha estimado como naturales aquellas obligaciones que "el legislador luego de haberlas restado la eficacia ordinaria por hallarse bajo una presunción de inexistencia o de invalidez, llega a sancionarlas después porque el

libre cumplimiento de ellas, una novación voluntaria o cualquier acto del que resulte la confesión de la efectividad de la deuda, prueban al legislador que su presunción faltaba en este caso".

El principal efecto de las obligaciones naturales -pero no el único- consiste en el hecho de que su pago es válido y no puede repetirse. El Art. 1470 en su párrafo último exige, para que el pago de la obligación natural sea válido, la concurrencia de los requisitos: 1º, que sea "voluntario"; 2º, que el deudor, al efectuar el pago, tenga la libre administración de sus bienes, es decir, que sea una persona plenamente capaz.

El término "voluntario" ha de interpretarse -creemos- como referido a la libertad o espontaneidad del pago. Interpretación que corrobora el Art. 2296 -ubicado en la sección 2 del título XXXIV, "de los cuasicontratos", que regula el pago de lo no debido- al negar la posibilidad de repetir "lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el Art. 1470".

Más hay otro efecto importante y característico de las obligaciones naturales y es el de que pueden ser novadas. Así, en efecto, lo autoriza el Art. 1630: "para que sea válida la novación es necesario

que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos, a lo menos naturalmente".

Se cita como tercer efecto de la obligación natural el que, rechazada por sentencia judicial, la acción intentada contra el obligado naturalmente, ello no extingue la obligación natural. Es decir, la relación obligatoria permanecerá viva en su carácter de obligación natural. (Cfr. Art. 1471: "la sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural").

Norma ésta del Art. 1471 que -según indica PRIETO RAVEST - ha encontrado aplicación en una vieja sentencia según la cual el acreedor tiene derecho a retener lo que se hubiera dado en pago de una obligación natural, aún en el caso de que una sentencia judicial la hubiera rechazado. (1)

Por último, el Art. 1472 dispone la validez de las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por terceros para seguridad de las obligaciones naturales.

Tales garantías habrán de ser otorgadas para afianzar una obligación que ya es natural, porque si se dan para afianzar una obligación civil -cuya acción

(1) PRIETO RAVEST- "Teoría general de las obligaciones", Santiago de Chile, 1959.

extingue posteriormente- se extinguirán también todas las cauciones que se había dado, en virtud del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

Pasamos a ocuparnos de las distintas hipótesis de obligaciones naturales que se configuran en el Código Civil de Chile. Se citan (Art. 1470) :

- "1º. - Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como la mujer casada en los casos en que le es necesaria la autorización del marido, y los menores adultos.
- 2º. - Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción.
- 3º. - Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan los efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida.
- 4º. - Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba".

La primera cuestión a resolver es la de determinar si esta enumeración que formula el Art. 1470 es un "numeros clausus" o por el contrario, el legislador ha citado estas hipótesis "ad exemplum" dejando abierta la posibilidad de catalogar como obligaciones naturales otros supuestos.

Si se acepta esta segunda vía, lo procedente es buscar fuera del Art. 1470 otros casos de obligación natural. En este sentido se han citado por la doctrina chilena los siguientes casos:

A) Los esponsales. Tales promesas de matrimonio no producen ningún efecto jurídico; su ruptura no da lugar a indemnización ni reclamación alguna, ni siquiera en el caso de que se hubiese estipulado una multa; pero el Art. 99 establece que "si se hubiere pagado la multa, no podrá pedirse su devolución".

B) Si el deudor no ha estipulado el pago de intereses y, sin embargo, los paga, dispone el Art. 2208 que no puede repetir lo pagado ni tampoco imputar esa suma al capital.

Más no parece acertado calificar estos dos casos como ejemplos de obligaciones naturales; en especial el segundo -falta de estipulación de intereses-, toda vez que no hay objeto determinado ni puede decirse

que sea de la esencia del contrato de préstamo el pago de intereses. El primer caso, sin ser, desde luego, una obligación natural, se acerca a ella pues están perfectamente determinados los sujetos -acreedor y deudor-, el objeto -monto de la multa- y la causa -incumplimiento de la promesa-.

Ambos supuestos tienen de común con la obligación natural la imposibilidad de repetir lo que se pagó. Pero, fuera de éste, no se dá ningún otro de los efectos propios de las obligaciones naturales.

Por lo demás, en uno y otro caso serán de aplicación las reglas del pago de lo debido y el pago será irrepetible porque no ha mediado la condición de error (Art. 2295) y no porque tenga como fundamento una obligación natural.

C) Otro presunto caso de obligación natural es el de la persona que acepta una herencia a beneficio de inventario y luego paga todas las deudas de su causante a pesar de que excedan del total del acervo hereditario. Tampoco estamos aquí en presencia de una obligación natural; trátase, simplemente, (según PRIETO RAVEST) de un caso de renuncia tácita a la separación de patrimonios lograda mediante la aceptación beneficiaria.

D) Se ha calificado como obligación natural el supuesto regulado en el Art. 1468 según el cual, "no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas".

E) El Art. 2260 se refiere al caso del pago de deudas contraídas en juegos prohibidos. "El juego y la apuesta -establece el precepto citado- no producen acción sino solamente excepción. El que gana no puede exigir el pago. Pero si el que pierde, paga, no puede repetir lo pagado, a menos que se haya ganado con dolo".

Pues bien, tanto en esta hipótesis como en la anterior, creemos que la imposibilidad de repetir el pago se funda en la aplicación del principio "nemo auditur ..." que impide accionar basándose en una causa torpe. Porque así como el acreedor no podía reclamar el pago de la deuda, el deudor tampoco será escuchado por el Juez si quiere pedir la devolución de lo que entregó y ello como sanción por la ilicitud del objeto perseguido.

A la vista de lo que antecede, la conclusión parece clara: el legislador, al establecer como obligaciones naturales las que cita en el Art. 1470, ha fijado una enumeración taxativa, un "numerus clausus" inequívoco. Tal opina PRIETO RAVEST con irrepro-

chable argumentación. (1)

Ello, sin embargo, no obsta para que deba, al menos, formularse una observación: la de que una enumeración taxativa de las obligaciones naturales atenta contra la vida misma del instituto porque impide una prudente evolución. Evolución que mantendría un contacto con las necesidades cotidianas y vitalizaría la categoría obligacional de que tratamos.

Admitida, pues, la solución de que en el Código Civil chileno tan solo existen como obligaciones naturales los cuatro supuestos formulados en el Art. 1470, parece oportuno ahora establecer una clasificación de los mismos.

De acuerdo con lo indicado por MOISSET (2) podemos fijar dos grupos: el primero, comprensivo de aquellas obligaciones que nacen como obligaciones naturales; y el segundo integrado por las que comenzaron siendo civiles pero posteriormente han perdido la acción, transformándose en obligaciones naturales.

En el grupo 1º se incluyen los apartados 1º y 3º. En el segundo, los apartados 2º y 4º.

Las obligaciones naturales "ab origine" están

(1) PRIETO RAVEST, Ob. cit., págs. 23 y 24.

(2) MOISSET, Ob. cit.

constituídas por los supuestos de incapacidad legal -que no natural- y de vicios de forma. Ambos supuestos con una característica común: el acto que los produce está afectado por un vicio determinante de su nulidad. El apartado 1º del 1470 ha de concordarse con lo establecido en el 1447, según el cual: "son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución ..."

Se estima lógica la solución porque las personas absolutamente incapaces carecen totalmente de discernimiento y por ello sus actos se reputan como faltos de voluntariedad. (1)

Por lo demás, la enumeración realizada por el texto legal de las personas incapaces de obligarse según las leyes pero dotadas de "suficiente juicio y discernimiento", parece no es exhaustiva. Pueden, en efecto, encontrarse casos semejantes tal como sería el de los pródigos (Art. 1447, párr. 3º). Anotemos también que la expresión empleada en el inciso 1º del Art. 1470 -"personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento"- se presta, quizá, a interpretaciones varias e indudablemente peca de falta de rigor técnico.

(1) Cfr. MOISSET, Ob. cit.

En punto al supuesto de los vicios de forma, el problema más destacable es el de la extensión que debe darse a la palabra "apto". De manera casi unánime entiende la doctrina que debe reducirse a los actos unilaterales excluyéndose, pues los bilaterales -o "contratos", según MOISSET- (1). La razón de esta interpretación es de tipo práctico: el contrato de compraventa de bienes muebles exige la formalidad de la escritura pública, pero la costumbre impone que, con mucha frecuencia, se otorguen instrumentos privados, que no pueden inscribirse en los Registros de la Propiedad y que constituyen en realidad una promesa de extender la escritura pública correspondiente. Si se considera que de este caso nace una obligación natural, por falta de formalidades, no habría ninguna acción para compeler al vendedor a otorgar la escritura pública, acción que, sin embargo, conceden las leyes procesales chilenas, que autorizan al Juez, en caso de negativa del vendedor, a extender él mismo la escritura subrogándolo.

Por otra parte, la palabra "acto" es usada en las Leyes de Partida y en el Proyecto de García Goyena -que han sido fuentes en el Código Chileno- con el significado de acto jurídico unilateral.

El grupo 2º se integra -como sabemos- por los apartados 2º y 4º del 1470. El 2º, referido a la hi-

(1) MOISSET, Ob. cit.

pótesis -clásica en tema de obligaciones naturales- de las obligaciones civiles extinguidas por prescripción.

La prescripción extingue la acción para exigir el cumplimiento de la deuda pero deja subsistente e intacto el crédito, como una obligación natural que puede ser pagada válidamente. ¿Cual es el momento en que la obligación civil deviene natural? Parece que cuando ha transcurrido el plazo de prescripción que fija la Ley, no cuando el Juez ha declarado operada la prescripción.

El cuarto hace relación a aquellas obligaciones que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Hipótesis clásica también en la materia.

Señalemos, por último, que la doctrina chilena (PRIETO RAVEST, entre otros) ha cuidado de delimitar perfectamente las obligaciones civiles de las naturales y de los deberes morales o de conciencia. Las obligaciones civiles -o, simplemente, las obligaciones- suponen una relación caracterizada por la precisa determinación de los sujetos, activo y pasivo (acreedor y deudor) y de la prestación a cumplir; en caso de incumplimiento, el acreedor dispone del medio jurídico adecuado - la acción - para compeler al deudor.

En cambio, en las obligaciones naturales, que

constituyen una verdadera relación jurídica, con idénticas determinantes que la obligación civil, falta al acreedor el medio legal para obligar al deudor a ejecutar la prestación. Constituyen un verdadero vínculo jurídico que no solamente autoriza al acreedor a retener lo que ha recibido en virtud de ellas sino que produce otros varios efectos, entre ellos el de poder asegurarlas con garantías personales o reales o proceder a su novación.

Y, en fin, se señala la presencia de los deberes morales o de conciencia, deberes que no son de ninguna manera exigibles y en los cuales no están determinados ni los sujetos ni la prestación a efectuar pero que son motivo de atribuciones patrimoniales válidas "en pro de la armonía de vida".

3. F I L I P I N A S

El Código Civil filipino dedica a la materia de las obligaciones naturales ocho artículos -1423 a 1430-, que integran el título 3º del libro IV ("obligaciones y contratos").

En el primero se reconoce por el legislador la existencia de las obligaciones naturales -así mencionadas explícitamente- afirmándose como características de las mismas las siguientes:

- 1a.- No están fundadas en el Derecho positivo sino en la equidad y en el Derecho Natural.
- 2a.- No conceden acción para exigir su cumplimiento.
- 3a.- Producen como único efecto el de la "soluti retentio".

Según se ha dicho (1) no basta afirmar que las obligaciones naturales son las que carecen de acción y que sólo producen el efecto de la retención de lo pagado porque con ello no se resuelven todos los problemas que brotan de su reconocimiento. En efecto, se pregunta PUIG BRUTAU: ¿Qué deducción obtendrá el juzgador a base del criterio legal cuando

(1) Vide PUIG BRUTAU, Tomo I, Vol. II, Ob. Cit.

el sujeto afectado por una obligación natural, en lugar de realizar la efectiva prestación que significa su cumplimiento se limita a reconocerla y promete pagarla? ¿Se habrá convertido la obligación natural en obligación civil?

Preguntas éstas cuya respuesta entraña cierta gravedad porque existe el peligro de que se desvirtúe la eficacia de los preceptos que imponen una formalidad para proteger a quien se obliga a título gratuito. La cuestión -que no resuelve la proclamación de que existe una obligación natural- es, por tanto la siguiente: la promesa de algo en cumplimiento de una obligación natural, ¿es un acto a título oneroso?

Tal es el planteamiento que en torno al precepto del Código filipino hace PUIG BRUTAU. Creemos que su postura es exagerada pues del tenor literal del artículo no debe extraerse sino una toma de postura teórica por el legislador que en los preceptos siguientes va a tener un desarrollo normativo práctico y concreto, como se verá seguidamente.

Por lo demás, en el último inciso del Art. 1423 se indica que "algunas de las obligaciones naturales están expresadas en los artículos siguientes". Claramente se quiere significar que la enumeración de hipótesis efectuada por el Código es meramente

ejemplificadora. Con ello no solamente se adopta una línea correcta sino que se facilita la interpretación judicial y la doctrinal.

Los dos artículos siguientes -1424 y 1425- se ocupan de la regulación de los efectos del pago de un crédito prescrito. Ambos preceptos vienen a señalar que la prescripción sólo extingue la acción para exigir el cumplimiento. La obligación subsiste como natural. En concreto, el 1424 afirma que el pago voluntario es eficaz y no permite recuperar el objeto de la prestación. "Seguramente -escribe PUIG BRUTAU- procedería la misma solución a base del Art. 1112 del mismo Código (Art. 1935 del C.C. español), por estimarse que el pago voluntario hace suponer el abandono del derecho adquirido por prescripción". El Art. 1425 sigue la misma línea en el supuesto -interesante, por cierto- del pago hecho por un tercero. La restitución voluntaria del objeto de la prestación por parte del deudor a este tercero es, igualmente, firme.

Los artículos 1426 y 1427 se ocupan del caso de contratos celebrados por un menor de 21 años y mayor de 18, sin el consentimiento o asistencia de su padre o tutor. El contrato es ineficaz y la otra parte contratante sólo tiene derecho a la restitución de lo entregado en cuanto con ello se haya enrique-

cido o beneficiado el menor. Pero el Art. 1426 dispone que, incluso sin producirse tal efecto favorable al menor, si éste devuelve lo recibido, la devolución queda firme. Podría pensarse, considerando aisladamente el precepto, que el legislador filipino ha optado por la solución de que la obligación natural de los menores nace inmediatamente después de anulado el acto. Tal conclusión, sin embargo, sería errónea porque el cumplimiento voluntario -aunque no haya mediado anulación- también es válido como cumplimiento de una obligación natural (Art. 1427). Lo verdaderamente interesante -destaca MOISSET (1)- es que en ambas hipótesis el menor -que es un incapaz- puede efectuar un pago válido, a condición de que tenga más de 18 años.

El artículo 1427 está redactado en los siguientes términos: "Cuando un menor cuya edad esté comprendida entre los 18 y los 21 años ha celebrado un contrato sin el consentimiento de su padre o tutor y paga voluntariamente una suma de dinero o entrega una cosa fungible en cumplimiento de la obligación, no podrá pedir su restitución del acreedor que la haya gastado o consumido de buena fé".

La razón del casuismo empleado por el legislador filipino estriba -posiblemente- en la influencia ejercida por el sistema angloamericano en el archi-

(1) MOISSET, Ob. cit.

piélago. Cuando el legislador se decide a dictar normas que deben enfrentarse con los precedentes, ha de redactar leyes sumamente profusas y contemplar todos los detalles posibles para evitar que los jueces las desvirtúen en su aplicación práctica.

Según el artículo 1428, "cuando después de haber fracasado el ejercicio de una acción dirigida al cumplimiento de una obligación civil, el demandado la cumple voluntariamente, no puede pedir la restitución de lo que ha entregado, o el pago del valor del servicio que ha prestado". En opinión de PUIG BRUTAU, esta norma resulta especialmente adecuada para demostrar que "no se trata de sostener que los tribunales han de juzgar directamente de los deberes -morales- que pueden afectar a un sujeto de derecho, sino que su juicio ha de recaer sobre los actos realizados obedeciendo su impulso. El hecho de que un demandado pague lo que se le reclamaba después de haber obtenido sentencia favorable, sin duda es bastante extraordinario para que se considere que el pagador ha cumplido un deber moral del que el Derecho no ha de permitir que se arrepienta".

Finalmente, los artículos 1429 y 1430 se refieren al pago de las deudas del causante por el heredero, pago que es válido aunque exceda del valor de los bienes que ha recibido; y al testamento nulo por

defecto en las formalidades exigidas por la Ley, pero uno de los herederos intestados, después de pagar las deudas del causante, paga un legado ajustándose a una cláusula del testamento defectuoso, el pago es eficaz e irrevocable".

Sucede aquí algo muy parecido a lo que ocurre con el Art. 1428. Es también una hipótesis infrecuente, extraordinaria realmente, para que se considere que el heredero "ab intestato" ha cumplido un deber moral "del que el Derecho no ha de permitir que se arrepienta" (1).

En cambio, el supuesto del 1429 es más dudoso en el sentido de que no revela tan poderosamente la eficacia de un deber moral. Evidentemente es más fácil que obre por error el heredero que paga una deuda del causante que excede del valor de los bienes heredados, que el deudor que paga la deuda después de haber obtenido sentencia que le libraba de hacerlo.

(1) Cfr. PUIG BRUTAU, Ob. cit.

4. M E J I C O

En Méjico el Código Civil vigente data del año 1928. Antes estuvieron en vigor otros dos textos legales. El primero -de corta vida- se publicó en 1870; el segundo, en 1884.

El texto vigente hállase influído -entre otros- por el Código suizo de las obligaciones. Concretamente, por lo que hace al tema de las obligaciones naturales, el Art. 1894 dispone: "el que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral, no tiene derecho a repetir".

Recuérdese que el Art. 63 del Código helvético en su párrafo 2º dice: "lo que ha sido pagado para satisfacer una deuda prescrita o para cumplir un deber moral no puede ser repetido".

Obvio parece señalar cómo la semejanza de ambos preceptos es total. Por otra parte, el mismo artículo 1894 del Código mejicano considera a la obligación natural como obligación imperfecta, fundada, por regla general, en un deber moral.

En relación con el supuesto de la obligación contraída por un incapaz, el Art. 2812 del texto vigente viene a reproducir prácticamente lo que al res-

pecto habían previsto los códigos anteriores. El Art. 1818 del Código del 70 consideraba nula la fianza recayente sobre una obligación que no fuere civilmente válida. Y el artículo siguiente exceptuaba de lo dispuesto en el precepto anterior "el caso en que la nulidad proceda de incapacidad personal del deudor; con tal de que el fiador haya tenido conocimiento de la incapacidad al tiempo de obligarse y de que la obligación principal sea válida a lo menos naturalmente". Se ha estimado que esta obligación será natural cuando el que la haya contraído tenga un juicio y un discernimiento suficientes para contratar, aunque por la ley civil sea inhábil. (1)

Para completar el dispositivo legal, el Art. 1820 establecía que "la fianza subsistirá, aún cuando el deudor principal haga rescindir su obligación". Precepto que se explica diciendo que subsiste la obligación con el carácter de natural.

Parece indudable, a la vista de lo anterior, que el Art. 2812 reconoce, lo mismo que su antecesor, que la obligación contraída por un incapaz es una obligación natural.

Cosa distinta sucede en el supuesto de las deudas provenientes del juego. El Código vigente considera el juego, cuando es prohibido, como acto

(1) Cfr. BORJA SORIANO: "Teoría general de las obligaciones", Tomo II, 2a. edición.

ilícito; y cuando no está prohibido, como productor de una obligación civil de pagar dentro de cierto límite (Arts. 2764 y 2767). No hay, en tal supuesto, obligación natural.

5. V E N E Z U E L A

El Código Civil venezolano data de 1942. En materia de obligaciones naturales parece haber seguido el sistema francés. En efecto, el artículo 1178 dispone:

"Todo pago supone una deuda; lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición.

La repetición no se admite respecto de las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente".

Respecto de su modelo francés, se ha sustituido el adverbio "voluntariamente" por el más adecuado, "espontáneamente". Se cree más adecuado el término en base al siguiente razonamiento: un acto, para ser voluntario, no debe estar viciado por el error; y la mayor parte de la doctrina francesa, al estudiar el requisito de la voluntariedad del pago, ha sostenido que,

cuando se cumple una obligación natural, ese pago debe haberse efectuado con pleno conocimiento de que la obligación no era exigible para que se cumpla el requisito de la voluntariedad y sea, en consecuencia, irrepetible. Por el contrario, si el deudor desconocía que la obligación era natural y paga por error, entiende esta doctrina que no estamos frente a un cumplimiento voluntario y que puede repetirse lo pagado.

Se ha objetado que en esta hipótesis la voluntariedad consistiría en la ausencia de los otros vicios del consentimiento; y, en especial, que el pago no haya sido "forzado" sino espontáneo, porque quien paga una obligación natural no incurre en error esencial, en razón de que está cumpliendo la prestación exigida por un vínculo jurídico existente y real.

Cabe estimar correcta la solución. Además es la que prevalece en el sistema iberoamericano, que no considera como error esencial el pago de una obligación natural, desconociendo la falta de exigibilidad.

Para solventar estas cuestiones, los Códigos más modernos colocan, como el venezolano, el adverbio "espontáneamente" donde antes se decía "voluntariamente".

6. U R U G U A Y

A través de ocho artículos de su Código Civil regula la problemática de las obligaciones naturales. Los artículos 1441 a 1446 (capítulo IV, título II del libro III) se ocupan de "las obligaciones con relación a sus efectos". Antes ha aludido a la obligación natural en el artículo 1365 al disponer que "la cláusula penal es válida aún cuando se agrega a obligación cuyo cumplimiento no puede exigirse judicialmente pero que no es reprobada por Derecho".

Posteriormente, el Art. 2015 afirma que la fianza no puede existir sin que acceda a una obligación civil o natural.

Los preceptos integrantes del mencionado capítulo IV, título II del Libro III, intentan perfilar los rasgos esenciales de la obligación natural. Se comienza por señalar - párrafo 2º del Art. 1441 - que las obligaciones naturales son las que, producidas por la sola equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento; pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Así pues, para el legislador uruguayo las obligaciones naturales tienen su asiento en la equidad; y sus rasgos fundamentales son dos: la no exigibilidad en juicio y la "soluti retentio". Ninguna novedad, como se puede

comprobar.

Luego, al establecer un catálogo de supuestos de esta especie obligacional, incluye entre los mismos, bien que en último lugar, el de las obligaciones procedentes de deudas de juego. Inclusión que acertadamente se ha tildado de improcedente puesto que (como es notorio) "no se trata verdaderamente de una hipótesis de obligación natural sino de obligación ilícita". (1)

El artículo 1443 señala: "la sentencia que rechaza la demanda intentada contra el naturalmente obligado, no extingue la obligación natural". Es precepto tomado literalmente del Código chileno -Art. 1471-. El artículo siguiente -1444- dispone que "la ejecución parcial de una obligación natural no le da el carácter de obligación civil". Norma esta tomada, en cambio, del Código argentino (Art. 517).

El 1445, al disponer que el efecto de las obligaciones naturales es que, cuando el pago de ellas se ha hecho voluntariamente por el que tenía capacidad para hacerlo, no puede reclamar lo pagado, constituye precepto que viene a confirmar lo establecido en el 1441 con respecto a la "soluti retentio" como rasgo peculiar de las obligaciones naturales.

(1) MOISSET, Ob. cit.

Finalmente, en el 1446 se consagra la validez de fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por terceros para seguridad de las obligaciones naturales.

LAS OBLIGACIONES NATURALES EN EL DERECHO ESPAÑOL

I.- ANTECEDENTES HISTORICOS . -

Obvio parece resaltar cómo la categoría de las obligaciones naturales supone una técnica muy depurada que de todo punto es imposible imaginar en textos legales primitivos como nuestros Fueros Generales y Municipales. Para el modo de expresarse es tas leyes resultaban, en efecto, las naturales de un tecnicismo inalcanzable. Y aún diríamos más: entrañaban previsiones que la realidad ofrecía como inútiles. No puede, por tanto, sorprender el hecho de que las obligaciones naturales no se mencionen tan siquiera en nuestra primitiva legislación.

Por el contrario, sí hay regulación -y extensa- ciertamente, en Las Partidas. Cinco son los textos que, de un modo u otro, aluden al instituto de las obligaciones naturales. A su examen vamos a dedicar las siguientes líneas.

En primer término figura la disposición que, al fin de la Ley XVI, título XI de la tercera Partida reza en los términos que a continuación se transcriben :

" DE MANERA QUE AQUEL QUE ES DEBDOR DE OTRI VERDADERAMENTE, MAGUER SEA ENDE QUITO POR SENTENCIA, SIEMPRE FINCA, SE - GUN DERECHO NATURAL, DEBDOR DE LO QUE DEUIA".

Trátase del supuesto de injusta absolución. Por encima del formalismo legal contenido en la decisión del juzgador, existe una instancia superior: la del Derecho Natural -y cuanto ésta comporta-, en definitiva, la Justicia misma por cuya virtud el vínculo obligatorio subsiste naturalmente.

Un segundo texto es el contenido en la quinta Partida, título XII, ley V. Aquel que, en parte, han reproducido muchos de nuestros Tratados y Manuales de Derecho Civil. En él se definen las especies obligatorias: civil y natural, de una parte, y simplemente natural, de otra. El legislador va a proporcionar -a propósito de la fianza- una preciosa caracterización de ambas especies. Señala que "son dos mane

ras de obligaciones en que puede ser fecha fiadura". La civil y natural -o simplemente civil- entraña la posibilidad de apremiar al obligado que no la quiera cumplir. Supone "ligamiento que es fecho según ley e según natura". Observemos que se establece como una doble vinculación: legal y natural.

Vinculación coactiva que, respecto de la obligación civil, lleva consigo el trasladar la norma que la impone desde el estadio del puro Derecho Natural, desde el imperativo político o desde el simple proyecto, hasta la realidad social fáctica que es la regla jurídica. (1)

Y seguidamente se añade:

"LA SEGUNDA MANERA DE OBLIGACION ES NATURAL TAN SOLAMENTE. E ESTA ES DE TAL NATURA, QUE EL OME QUE LA FACE, ES TENUDO DE LA CUMPLIR NATURALMENTE; COMO QUIER QUE NON LE PUEDEN APREMIAR EN JUICIO QUE LA CUMPLA".

He aquí lo que para el legislador de Las Partidas significan las obligaciones naturales. Estamos frente a una definición de las mismas, acorde -según

(1) Cfr. F. DE CASTRO: "Derecho Civil de España", Parte general, tomo I, pág 57, 3a. edición.

pone de relieve LA CRUZ (ob. cit.)- con las ideas de su tiempo. Pero, a nuestro entender, hay más: hay una traducción modernizada, una actualización, de irreprochable técnica, de la construcción romana, influída notoriamente por las ideas canónicas (Bartolo y Baldo, especialmente). Este es el gran mérito del texto.

Una nueva disposición alude a las naturales: la contenida en la Ley XXXIII, título XIV de la misma Partida V ("Como aquel que faze la paga, por razón de juycio, que es dado contra él, non la puede después demandar"). El planteamiento técnico del supuesto de hecho es claro; trátase del error judicial:

"CA MAGUER ACAESCIESSE, QUE EL JUDGADOR DIESSE LA SENTENCIA CONTRA VERDAD, POR CULPA DE LOS RAZONADORES, QUE NON PUSSIEN SUS RAZONES COMO DEUIAN, O POR NECEDAD DEL JUDGADOR, PUES QUE DADA ES, GUARDADA DEUE SER, SI NON SE ALCA DELLA."

Y más adelante:

"CA, MAGUER QUE LOS JUDGADORES QUITAN A LAS VEGADAS DE LAS DEMANDAS A ALGUNOS A QUIEN NON DEUIAN QUI-

TAR, E DESPUES QUE LAS QUITAN, SEGUN SOTILEZA DE DERECHO, NON LOS PUEDE APREMIAR QUE PAGUEN; CA CON TODO ESSO NATURALMENTE FINCAN OBLIGADOS A AQUELLOS POR QUIEN ES DADA LA SENTENCIA: E POR ENDE, PAGANDO O FAZIENDO LO QUE LES DEMANDAN, NON LO PUEDEN DESPUES DEMANDAR".

No hay lugar a la duda: el juzgador puede errar; o puede, dolosa o negligentemente, dictar sentencia que injustamente absuelva al deudor de su obligación de pagar. Así, la obligación civil ha perecido. Más subsiste con idéntico vigor la natural.

La Ley XXX del mismo título y Partida se ocupa del caso del error padecido por el "solvens":

"COMO AQUEL QUE PAGA A SABIENDAS LO QUE NON DEUE, NON LO PUEDE DESPUES DEMANDAR".

"PAGANDO ALGUN OME A SABIENDAS DEB DA QUE NON DEUISSE, QUE ESTE ATAL NON LA PUEDE DESPUES DEMANDAR: POR QUE AQUEL QUE PAGO LO QUE SABIA QUE NON DEUIA, ENTENDIESE QUE LO

FAZE CON ENTENCION DE LO DAR, E
 PORENDE NON PUEDE FAZER DEMANDA
 QUE GELO TORNE".

Cabe preguntarse : ¿no estaremos ante un pre
 cedente remoto de lo dispuesto en el 1901 del C.C.?
 ("a título de liberalidad o por otra justa causa").

En fín, la Ley XXXI del mismo título XIV
 trata de "como las mandas que son puestas en testa-
 mento imperfecto, si fueren pagadas, non se pueden
 reuocar. Se dispone que:

"ACABADAMENTE A LAS VEGADAS NON
 FAZEN LOS OMES SUS TESTAMENTOS
 PERO DEXAN MANDAS EN ELLOS. E
 COMO QUIER QUE SEGUN SOTILEZA DE
 DERECHO NON PODRIAN APREMIAR POR
 JUYZIO, A AQUEL EN CUYA MANO
 FUESSE TAL TESTAMENTO COMO ESTE,
 QUE PAGASSE LAS MANDAS QUE FUE-
 SSEN FECHAS EN EL; CON TODO ESSO,
 SI EL O LOS HEREDEROS, DE SU VOLUNU
 TAD LAS PAGASSEN, NON PUEDEN DESU
 PUES DEMANDAR QUE GE LAS TORNA -
 SSEN; MAGUER DIXESSEN, QUE SE PU-
 DIERAN AMPARAR POR DERECHO, DE NON
 PAGAR TALES MANDAS PORQUE ERAN DE-
 XADAS EN TESTAMENTO, QUE NON FUE
 FECHO COMO DEUIA ..."

Tanto esta norma como la anterior constituyen supuestos de la irrepetibilidad de ciertos pagos indebidos. La diferencia radica en la distinta hipótesis de una y otra regla.

Se ha dicho -y con harta razón- que los comentarios de Gregorio López son pobrísimos y que nada añade la doctrina posterior. (I)

El concepto de obligación natural se va a restringir como consecuencia de la variación radical del sistema de contratación. Antes de la promulgación del Ordenamiento de Alcalá la fuente más copiosa de obligaciones naturales era la integrada por las imperfecciones formales de ciertos actos. Promulgado el ordenamiento, aunque persisten obligaciones naturales de tal origen (el caso regulado en la ya mencionada Ley XXXI, título XIV, Partida V), el núcleo más numeroso de las mismas proviene de las obligaciones contraídas por personas con defecto de capacidad. Así los convenios o prestaciones hechos por la mujer casada, el hijo de familia, el pupilo o menor (a no ser que este último contratara por sí solo careciendo de curador -Ley V, título XI, Partida V-) el pródigo, el incapacitado mentalmente, etc., sin intervención de las personas que suplen su incapacidad.

(I) LACRUZ BERDEJO, Ob. cit.

También es fuente de obligaciones naturales en nuestro Derecho histórico la prohibición de la Ley. En efecto, ciertas obligaciones ven negada legalmente su eficacia civil por espíritu de defensa de algunas personas y por razones de moralidad. Tal ocurría con la fianza otorgada por la mujer; o con los préstamos hechos a los hijos de familia sin anuencia de sus padres; cuyos supuestos -tomados, como es sabido, de los Senadoconsultos Velejano y Macedoniano- son reproducidos en nuestras Partidas (Ley III, título XII, Partida V y Ley IV, título I, Partida V).

Por otro lado, destaca igualmente como fuente de obligaciones naturales la imposibilidad en que se encuentra, en algunos casos, el Poder Público para coaccionar el cumplimiento de ciertas obligaciones. Así sucede en el contrato de esponsales. Se estipula en él el futuro matrimonio; y sin embargo, si uno de los contratantes se niega al cumplimiento de esta obligación, el Poder Público carece de medios suficientes para hacerla cumplir. Entonces la obligación que, primera y fundamentalmente, surge de semejante contrato -la de contraer matrimonio- tiene que quedar reducida en la categoría de obligación natural.

Asimismo, se ha reputado como fuente de obligaciones naturales la falta de la forma legalmente impuesta para la validez de ciertos contratos. Cabe en

tal sentido observar que este sistema, exagerándolo en pro de la forma escrita, se desenvuelve en todo su rigor por el Código de Comercio de 1829, especialmente por sus artículos 235, 236, 237 y 238. Ya muy atenuado y modificado se mantiene en parte la tendencia en el Código vigente de 1885; en efecto, se establece en su artículo 52 que los contratos que, con arreglo al Código o a las leyes especiales, deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades determinadas para su eficacia, si no llenan las circunstancias referidas "no producirán obligación ni acción en juicio".

Finalmente, constituye origen de obligaciones naturales, en cierto modo, el defecto de prueba que coloca, por ejemplo, en la imposibilidad legal de exigir el cumplimiento de un contrato, por falta de medios probatorios de su existencia, cuando ésta se niega por el deudor.

II.- OBLIGACIONES NATURALES EN EL CODIGO CIVIL . -

1. PROYECTO DE 1851

El antecedente inmediato y legalmente reconocido de nuestro Código Civil no menciona el término obligación natural. ¿Quiere ello decir que desconoció la categoría? Evidentemente no, y de ello hay constancia en la capital obra de GARCIA GOYENA "Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español". En efecto, la Comisión -LUZURIAGA, BRAVO MURILLO y SANCHEZ PUY, además de GARCIA GOYENA- encargó a este último un proyecto de regulación de las obligaciones naturales para el futuro código. El jurista aragonés cumplió el cometido que le confiaron. Más, discutido el proyecto en el seno de la Comisión, se estimó por ella que no era necesario nombrar precisamente a la obligación natural. Porque con las normas dedicadas a la nulidad de los contratos, con lo dispuesto en el Art. 1755 (equivalente al actual 1842) (1) y mediante las disposiciones de la sección dedicada al pago de lo indebido, quedaban previstos todos los casos de obligación natural sin que fuere preciso nombrarla.

"Pero así vino, en mi concepto -dice GAR-

(1) Se establecía en el párr. 1º del 1755 del Proyecto que "si el fiador ha pagado sin ponerlo en noticia del deudor, y éste, ignorando el pago, lo repite por su parte, no queda al primero recurso alguno contra el segundo pero sí contra el acreedor".

CIA GOYENA-, a caerse en la misma dislocación del Derecho Romano y patrio, en el lenguaje vago, y casi vergonzante, del Art. 2012 del Código francés: no se proveyó el caso de compensación ni de cláusula penal respecto de un tercero y se dejó alguna contra-dicción, al menos aparente, entre el Art. 1139 y el 1187, por más que se haya salvado: no se verán, pues, usadas nunca en este Código las palabras obligación natural, ni se sabrán nunca sus causas o fuentes, ni sus efectos o consecuencias".

Puestos a aventurar otras razones, además de las expuestas, por las que la Comisión Codificadora negase la entrada nominativa de las obligaciones naturales en el texto del Proyecto, cabría apuntar el hecho de que el progresismo que inspira la obra toda y su afán modernizador e innovador fuesen, tal vez, motivos decisorios. Sin perder de vista que la fidelidad al texto napoleónico pesaría, sin lugar a dudas, en el instante último.

2. POSIBLES SUPUESTOS EN EL CODIGO

Nuestro Código, fiel en este punto -como en tantos otros- al proyecto de 1851, no alude a las obligaciones naturales. Es esta una expresión nominativamente desconocida en su articulado. Ahora

bien, el hecho de no mencionarlas, ¿significa que las ignore? Mediante un atento examen de aquellos preceptos que, directa o indirectamente, puedan mostrar cómo el legislador español tuvo presente esta categoría, cabrá deducir si es lícito y en qué medida hablar de obligaciones naturales en Derecho Positivo español.

Vaya por delante una afirmación: entendere-mos la obligación natural como una categoría parifi-cable a la obligación jurídica. Puesto que, como afirma GIORGIANI (1) "de igual modo que la exis-tencia de una obligación jurídica justifica la atribu-ción patrimonial que, con el pago, hace el deudor al acreedor, la existencia de una obligación natural jus-tifica la atribución patrimonial entre el que cumple el deber no jurídico y el destinatario de la atribución patrimonial".

Nos colocamos deliberadamente en una pers-pectiva que pretende ser rigurosamente técnica. Pers-pectiva que se adopta por estimarla como la única que encaja en la normativa vigente y que, además, responde a criterios de utilidad y de validez social. Porque, según ha escrito B. BLONDI, "hoy, el mun-do tiene sed, no de sistemas o de construcciones dog-máticas, sino de justicia. ¿De qué valen ahora suti-les disquisiciones y sistematizaciones perfectas, dado

(1) GIORGIANI, "L' obbligazione", Milano, 1951. Pág, 121.

que ello sea posible, si no determinan un avance, no en la dialéctica, sino en la satisfacción de una necesidad social o la consecución de aquello que es misión esencial del jurista, o sea, acomodar el Derecho a la justicia?". (1)

El método que va a seguirse consistirá en examinar con alguna minuciosidad preceptos del Código en los que se ha creído vislumbrar obligaciones naturales.

a) Art. 1208. Dispone lo siguiente:

"LA NOVACION ES NULA SI LO FUERE
TAMBIEN LA OBLIGACION PRIMITIVA,
SALVO QUE LA CAUSA DE NULIDAD
SOLO PUEDA SER INVOCADA POR EL
DEUDOR, O QUE LA RATIFICACION
CONVALIDE LOS ACTOS NULOS EN SU
ORIGEN."

El precepto contempla supuestos de obligaciones nulas o anulables, tan solo. Para nada se alude a obligaciones válidas ni siquiera, remotamente, naturales. El pensar que aquí hay indicios -indicios únicamente- de obligación natural es de todo punto ilusorio. La obligación natural, igual que la civil,

(1) "Aspetti universali e perenni del pensiero giurídico romano". "Jus". (Rivista di science giuridiche). Milán, Junio 1956.

requiere, indispensablemente, la perfecta, la plena validez y sanidad que, desde luego, faltan en el caso referido del Art. 1208.

b) Art. 1756 :

"EL PRESTATARIO QUE HA PAGADO INTERESES SIN ESTAR ESTIPULADOS, NO PUEDE RECLAMARLOS NI IMPUTARLOS AL CAPITAL".

Trátase de la consagración legal de un precepto común, como ha habido ocasión de comprobar, a muchas legislaciones: el de la irrepetibilidad del pago de los intereses no pactados.

El problema que aquí se plantea, entendemos, es el de encontrar el fundamento jurídico suficiente al acto de pago de intereses no pactados. Quien actúa en tal sentido puede hacerlo movido por la gratitud. Y, al propio tiempo, con un propósito de liberalidad: recompensar a quien, por ejemplo, le favoreció prestándole ayuda económica en coyuntura difícil. O, quizá, paga intereses por error, es decir, creyendo que debiera pagarlos cuando lo cierto es que no le incumbe hacerlo. Ahora bien, como agudamente observa MANRESA, "quien paga lo que no debe, nada debe civil ni naturalmente". (1)

(1) MANRESA, "Comentarios al Código Civil Español", tomo XI, Madrid, 1950, pág. 652.

La observación de MANRESA se hacía con ocasión de un comentario de PONT y otros autores franceses formulaban respecto de disposición semejante existente en el Código Napoleónico. Decían, en efecto, como explicación del precepto que éste era debido a la existencia de una deuda natural y que, por tanto, a quien hiciera pago de una deuda de tal especie no podía admitírsele por ningún concepto reclamación de lo pagado en justicia.

Se ha dicho -en orden a la justificación del mandato legal que nos ocupa- que la raíz del mismo estribaría, seguramente, en razones o escrúpulos morales o de conciencia. Se llega a afirmar que el prestatario, por escrúpulos de conciencia y para no quedar obligado al prestamista, paga esos intereses aún cuando no estén estipulados. Empero MANRESA, citando a LAURENT, hace ver cómo esos motivos de delicadeza son extraños, ajenos por completo, al Derecho. Ellos no pueden ser los inspiradores del precepto legal. Si así fuera, es decir, si se pagaran intereses no debidos, sería menester pensar en una hipótesis de donación. Y, ciertamente, tal hipótesis queda muy lejos del préstamo.

Pero hay más: admitamos que se pagan los intereses a título de donación. ¿No es la irrevocabilidad nota característica de las donaciones?

MANRESA acude a la idea de pacto tácito para explicar el pago de intereses no debidos. Explicación suficientemente satisfactoria? Pensamos que no: ante todo debemos establecer que entre el 1756 y el artículo que le precede existe clara antinomia. El mandato de que "no se deberán intereses sino cuando expresamente se hubiesen pactado", se encuentra efectivamente condicionado por lo dispuesto en el 1756, el cual, en el fondo, viene a decir que los intereses se deben también cuando, aún sin pacto expreso, el deudor los paga. Cómo puede entenderse la cuestión? Es criterio brillantemente sostenido por DIEZ PICAZO que "la única interpretación posible consiste en entender que, según el Art. 1755, el mutuante sólo puede reclamar los intereses con base a un pacto expreso, pero que, en cambio, cuando el mutuuario voluntariamente los ha pagado, la Ley presume la existencia del pacto en cuestión" (1). Añade más adelante el Profesor citado que "el pago espontáneo opera "a posteriori" como una presunción de existencia de dicho pacto. El Art. 1756, en cambio, no puede funcionar si hubiese existido un pacto expreso de gratuidad del préstamo. En este caso, una supuesta obligación natural debería funcionar lo mismo. Y sin embargo, si un prestatario paga intereses existiendo un pacto expreso de gratuidad, el pago es un pago indebido y lo pagado debe ser restituído".

(1) DIEZ PICAZO, "Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial", Pág. 338.

Dentro de la misma línea de negar la existencia de obligaciones naturales en el supuesto del precepto que nos ocupa, está la autorizada opinión de ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU, para quienes "el supuesto debe explicarse por una "facta concludentia", que exterioriza un convenio tácito de pagarlos; la prueba decisiva está en que desde entonces se deben los intereses sucesivos". (1)

No han faltado, empero, autores que creen ver en el 1756 un caso atendible de obligaciones naturales. Se ha dicho que tal norma no contempla la hipótesis de haberse estipulado tácitamente intereses, sino la de que falte todo pacto (expreso o tácito) sobre ellos. Si ello es así, parece claro que, entonces, a tenor de la regla de que no se deben si no se pactaron (Art. 1755) no se está obligado civilmente al pago de los mismos. Más, aún no existiendo obligación civil, se dice que existe obligación natural de pagarlos; razón por la que se explica que cuando "de facto" se pagan, no se puede pedir su devolución ni imputarlos al capital. Tal es la postura del Profesor ALBALADEJO (2), que viene en cierta medida a coincidir con la que mantuvo DE BUEN.

También participa de este criterio -y lo hace apoyado en sólida argumentación- MARTINEZ G.

(1) "Estudios de Derecho Privado". Tomo I, Obligaciones y Contratos, pág. 291.

(2) "Instituciones de Derecho Civil", Tomo I, pág. 645.

CALCERRADA (1) para quien, no habiendo duda del contenido patrimonial, inexigibilidad de irrepetibilidad de lo pagado voluntariamente, queda por demostrar si ese pago de intereses no pactado equivale al convenio tácito de ROCA o a un deber moral cualificado. Niega que exista convenio tácito porque ello obliga a presumir algo que no se puede probar ni deducir por el pago "a posteriori". Si tal cosa fuese factible, dentro de esa tónica y por idénticos motivos el deudor podría intentar aducir que lo tácitamente convenido fué el no pago de intereses. Y si se le objeta que su voluntaria prestación es señal inequívoca de lo contrario, argüiría que, frente al simple valor que refleja su exteriorización para extraer esa consecuencia, está el más sólido dato de que, precisamente si los intereses no se pactaron, fué no ya porque tácitamente los querían excluir sino que expresamente así lo reflejaron al ignorarlos. El prestatario sabe y le consta que el impago de los intereses le reporta un lucro ilícito en perjuicio del prestamista; perjuicio que debe reparar "en conciencia" por no existir un principio de justicia que se lo impida, habiendo, en cambio, un principio de Derecho Natural que le constriñe al pago. Pues bien, por todo ello, concluye MARTINEZ G. CALCERRADA afirmando la presencia de lo que denomina "un deber moral cualificado".

(1) Ob. Cit. pág. 36.

La postura que, por nuestra parte, propugnamos, podría sintetizar en los siguientes puntos :

- 1º. Se sostiene que quien no pacta intereses no tiene un deber moral de prestarlos.
- 2º. La irrepetibilidad, legalmente establecida, de lo pagado obedece, probablemente, en el supuesto del 1756 a la finalidad de no alterar la condición económica del mutuante quien recibe los bienes a título de renta.
- 3º. Si tales bienes -recibidos a título de renta, repetimos- han sido consumidos, es indudable que el restituirlos posteriormente resultaría gravoso.
- 4º. Lo que se perfila, en realidad, es una clara pugna entre dos intereses: por una parte, el del deudor, quien pagó en concepto de interés lo que no debía; por otra el del acreedor que recibió tales sumas.
- 5º. Entre estos dos intereses contrapuestos parece más digno de tutela el del acreedor, quien, al prestar gratuitamente había favorecido de manera innegable al mutuatario.

Este, no se olvide, fué negligente en su propio beneficio.

6º. Por otro lado, si los intereses pagados y no debidos, fueron hechos efectivos por el deudor "animo donandi", el mandato contenido en el 1756 no sería necesario. O, en todo caso, quedaría sistemáticamente fuera de lugar.

c) Artículo 1798 :

"LA LEY NO CONCEDE ACCION PARA RECLAMAR LO QUE SE GANA EN UN JUEGO DE SUERTE, ENVITE O AZAR; PERO EL QUE PIERDE NO PUEDE REPETIR LO QUE HAYA PAGADO VOLUNTARIAMENTE, A NO SER QUE HUBIESE MEDIADO DOLO, O QUE FUERA MENOR O QUE ESTUVIERA INHABILITADO PARA ADMINISTRAR SUS BIENES".

Estamos frente a uno de los supuestos en los que, con mayor ahínco, se ha defendido por la doctrina la existencia de obligación natural. El texto legal transcrito ha de ser completado con el párrafo 1º del Art. 1801, según el cual "el que pierde

en un juego o apuesta de los no prohibidos queda obligado civilmente". Texto este último que, según indicación del Prof. ESPIN (1), interpretado a "sensu contrario", puede significar que el que pierde en un juego o apuesta de los prohibidos queda obligado "naturalmente". Ahora bien, como cautamente advierte el mismo ESPIN, la interpretación contraria del citado artículo 1801, 1º, puede ser también la de que quien pierde en un juego o apuesta de los prohibidos queda obligado penalmente.

Diríase que el legislador español sienta dos principios generales: 1º el recogido en el 1798 y que se refiere a los juegos prohibidos -según se desprende explícitamente del artículo siguiente, 1799,- estableciendo la irrepetibilidad de lo pagado voluntariamente. 2º, el consagrado en el 1801 -extensivo a los casos del 1800- por el que se concede acción civil a quien gana en juego o apuesta de los no prohibidos. Con ello se van a considerar tutelables por el ordenamiento jurídico las obligaciones procedentes de juegos lícitos; o sea, de aquellos no reprobados por la moral.

Se ha observado cómo, supuesto el contenido moral que ha de poseer toda obligación, lógicamente no es admisible ver un caso de obligación natural en la deuda procedente de juego ilícito que regula el Código Civil en el 1798 (2). Precepto que, por otra

(1) Ob. Cit. pág. 14.

(2) Cfr. RODRIGUEZ ARIAS, Ob. cit.

parte hay que contraponer a lo establecido en los artículos 1411, 2º y 1801, referentes al débito de juego lícito. En el segundo párrafo del 1411, 2º se determina que lo perdido y no pagado por alguno de los cónyuges en juego lícito será a cargo de la sociedad de gananciales. Mandato cuya coherencia, dentro del contexto regulador de la misma, no cabe siquiera discutir, toda vez que antes se ha especificado el supuesto de que a la liquidación de la sociedad haya caudal proveniente de las ganancias obtenidas por el marido o la mujer en el juego, o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución; en tal situación, se dispone pertenecerán a la sociedad de gananciales (Art. 1406). Del mismo modo se establece que lo perdido y pagado durante el matrimonio por alguno de los cónyuges en cualquier clase de juego no disminuirá su parte respectiva de los gananciales (Art. 1411, 1º). Con ello se da a entender que, tanto en juegos prohibidos como no prohibidos, lo perdido y pagado grava exclusivamente el patrimonio común, puesto que las ganancias obtenidas de esta suerte vienen a incrementar el patrimonio ganancial de los cónyuges. (1)

Se añade que "quizá lo adecuado hubiese sido disponer que en todo caso las ganancias dimanantes del juego o apuestas, lícito o ilícito, viniera a engro

(1) Cfr. RODRIGUEZ ARIAS, Ob. cit, págs. 54 y 55.

sar el caudal de la sociedad de gananciales, que es lo que ahora se establece; empero por lo que respecta al pago de las deudas de esta naturaleza, se debe ría haber distinguido, más que los dos supuestos que se regulan en el 1411, es decir, si lo perdido ha si do pagado durante el matrimonio o no, atender a si lo perdido y pagado provenía de juego lícito o ilíci to, disponiendo para el primer caso que siempre se ría a cargo de la sociedad de gananciales, con disminución de la parte correspondiente al otro cónyuge; y en el segundo, que vendría a gravar el patrimonio del que, habiendo perdido, fué el que satisfizo la deuda, porque si por cualquier razón pagase el otro cónyuge la deuda, no por esto dejaría de gravar el patrimonio del que perdió" (1).

Admitiendo estas consideraciones, se hace pre ciso, no obstante, advertir que, posiblemente, no esté en ellas la clave de la cuestión que nos ocupa. "Aca- so -se ha dicho autorizadamente- (2) la solución más acertada es no relacionar la irrepetibilidad para nada con la moral y entender que el Estado, a causa de los males sociales que el juego ocasiona, establece una norma general que priva de eficacia a la obligación contraída en juego ilícito, pero a la vez, basándose igualmente en un sentimiento universal, e indepen di ente de toda regla moral, establece la "soluti retentio".

(1) RODRIGUEZ ARIAS, Ob. cit.

(2) LACRUZ, Ob. cit, pág. 172.

Destaquemos más razones en pro de la no presencia de obligaciones naturales en este precepto. La irrepetibilidad es sólo para el juego prohibido. Y ¿para el no prohibido? Para este la plenitud de efectos queda reconocida por el Código. En base a ello, no debe admitirse que la Ley equipare una transgre-sión de sus normas a un deber moral. Ello implicaría, a nuestro criterio, violentar la esencia misma de un mandato jurídico de firme apoyatura ético-moral.

De otro lado, si ponemos la esencia de las obligaciones naturales en el deber moral -y no sólo en la característica de la irrepetibilidad- es incuestionable que en el supuesto del Art. 1756 no existe obligación natural.

¿ Como explicar entonces el precepto? En nuestro sentir, cabe pensar que el Derecho, ante el caso de un negocio inmoral, no puede evidentemente conceder acción para reclamar lo que, como consecuencía de él se debe. Ni tampoco puede concederla para reclamar lo que indebidamente se ha pagado. Así pues, frente al hecho real del juego ilícito y desde la perspectiva de lo civil, el Derecho guarda una postura de neutralidad; simplemente, se abstiene. Con lo cual ocurre que la situación fáctica se mantiene, de manera que si el obligado al pago no cumple, el Derecho no apoya ninguna reclamación. Pero, si paga, tampo-

co apoya ninguna devolución.

Por añadidura, el Tribunal Supremo constantemente ha venido aplicando la regla de que siendo culpables ambos contratantes ninguno de ellos puede reclamar lo que hubiere dado (S. de 28 de Octubre de 1897, 26 de Enero de 1900, 13 de Marzo de 1920, 13 de Mayo de 1927).

El privar de la posibilidad de accionar tiene una base razonable y sólida: la indignidad procesal de quien funda su acción en un acto propio ilícito; es contrario a la alteza de la función judicial el que se le rebaje a distribuir el botín de una banda de explotadores de casas de juego. Y quien dice casas de juego, podría decir de lenocinio, en el supuesto de que unas y otras hubieran sorteado las sanciones de la Ley penal. (1)

En fin, que en el supuesto de las deudas derivadas del juego ilícito es compartible la opinión de ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU. Para quienes el fundamento de la irrepetibilidad se halla "por el juego propio de la "condictio turpis vel iniustam causam", según la cual "in turpi causa melior est causa possidentis". Es decir, que en las causas torpes la ley sanciona la conducta desleal, no admitiendo reclamación alguna al culpable, en forma que re-

(1) Cfr. F. DE CASTRO, "El negocio jurídico", pág. 252.

sulta mantenido el "statu quo" producido por su voluntad ("nemo auditur propriam turpitudinem allegans").

d) Artículo 1824 :

" LA FIANZA NO PUEDE EXISTIR SIN UNA OBLIGACION VALIDA. PUEDE, NO OBS-
TANTE, RECAER SOBRE UNA OBLIGACION
CUYA NULIDAD PUEDA SER RECLAMADA A
VIRTUD DE UNA EXCEPCION PURAMENTE
PERSONAL DEL OBLIGACO, COMO LA DE
LA MENOR EDAD.

EXCEPTUASE DE LA DISPOSICION DEL PARRA
FO ANTERIOR EL CASO DEL PRESTAMO HE -
CHO AL HIJO DE FAMILIA."

Valen aquí, en cierta medida, las considera-
ciones que se hicieron respecto del Art. 1208. Lo
cierto es que una obligación "cuya nulidad puede ser
reclamada ..." es una obligación civilmente válida,
al menos hasta el instante en que se consiga decla-
rarla nula, si tal ocasión llega. Por ésto, poca o
ninguna relación cabe apreciar en el supuesto contem-
plado con las obligaciones naturales. Ahora bien, si
en interpretación -que no dudamos en calificar de
arriesgada- llegamos a la afirmación de que se auto-
riza la fianza de forma que continúe aún después de
anulado el crédito principal, entonces sí que habría

posibilidad de relación con las obligaciones naturales. Pero, de acuerdo con el razonamiento de LACRUZ, "en ese improbable caso (cfr. Art. 1847) habría que notar que la fianza se había otorgado existiendo una obligación válida, aunque ésta hubiera desaparecido, mientras que la obligación natural no existe en ningún momento como obligación civil". (1)

Contrario al punto de vista sustentado por LACRUZ se manifestaba DE BUEN. "En tal caso -escribía refiriéndose al Art. 1824- la fianza garantiza una obligación imperfecta, o sea, en el sentido clásico, una obligación natural". (2)

Sin embargo, como razonan PEREZ GONZALEZ y ALGUER, "es absolutamente improcedente la invocación de este artículo en tema de obligaciones naturales, en primer lugar, porque la obligación del fiador, en el supuesto regulado, no adolece de imperfección alguna que la haga equiparable a la obligación natural, ya que el acreedor no carece de acción contra el fiador y, en segundo lugar, porque la obligación principal en ese caso no es una obligación natural, sino una obligación anulable, concepto que no puede confundirse en modo alguno con el de aquella, puesto que la obligación anulable, mientras no sea impugnada, es obligación perfecta que engendra acción

(1) LACRUZ, Ob. cit. pág. 173.

(2) DE BUEN, "Notas a Colin y Capitant". "Curso elemental de Derecho Civil", III, pág. 176.

y, si es anulada, no se convierte en imperfecta sino que desaparece en absoluto". (1)

e) Artículo 1894:

Dice en su primer apartado:

"CUANDO SIN CONOCIMIENTO DEL OBLIGADO A PRESTAR ALIMENTOS, LOS DIERE UN EXTRAÑO, ESTE TENDRA DERECHO A RECLAMARLOS DE AQUEL, A NO CONSTAR QUE LOS DIO POR OFICIO DE PIEDAD Y SIN ANIMO DE RECLAMARLOS".

La expresión "oficio de piedad" se ha interpretado en el sentido de ver, a su través, una muestra de la especie obligación natural. Así, DE BUEN señala que, si bien el artículo puede explicarse sin ésta, "podrían deducirse de él consecuencias muy interesantes si las palabras "oficio de piedad" se entendiera incluían los deberes de conciencia, con lo cual nuestro Código abriría una ruta hacia el concepto de obligación natural desarrollado por la jurisprudencia francesa". (2)

No obstante, parece de mayor consistencia la opinión contraria, es decir, aquella que niega se den

(1) "Notas al Tratado de Enneccerus", II, 1º, 16.

(2) DE BUEN, "Notas al Curso elemental de Derecho Civil" de Colin y Capitant, III, 175.

aquí las características de las obligaciones naturales. En efecto, cabe preguntarse: ¿no estamos sino ante un supuesto, claro y expresivo por demás, de una donación? El extraño da los alimentos y lo hace "por oficio de piedad". Con lo cual está llevando a término una liberalidad, un "bien fecho que nasce de nobleza e de bondad de corazón". Más aún: el dar los alimentos "sin ánimo de reclamarlos", sólo está significando que su disposición tiene carácter irrevocable, nota ésta específica de la donación. Estamos, pues, como rotundamente afirma LACRUZ, frente a una típica donación. " Por ende -añade el citado Profesor LACRUZ- no puede ponerse en relación con la obligación natural que, por otra parte, difícilmente podría apreciarse, tratándose de alimentos que suministra a una persona un extraño, quien, por consiguiente, en términos generales, no se halla moral ni socialmente obligado a suministrar los susodichos alimentos" (1).

Atendamos al hecho, clave a nuestro juicio, de que quien da los alimentos -en el supuesto legal que nos ocupa- es un extraño. No cabe aquí, por tanto, hablar de la menor sombra o porción obligatoria, ni siquiera en el terreno de lo ético-moral. No es parangonable este caso con otros en los que la jurisprudencia francesa habló de obligaciones naturales por existir lazos de sangre o de parentesco de alguna cla-

(1) LACRUZ, Ob. cit.

se; así en aquellos -a los que ya se hizo alusión oportunamente- de asistencia entre hermanos y hermanas legítimos, entre hermanos y hermanas naturales, y entre los unos y los otros; ni tampoco hay paralelo, remoto siquiera, con el conocidísimo caso del padre que, según los tribunales galos, está obligado "naturalmente" al sostenimiento de sus hijos naturales no reconocidos.

En suma, las hipótesis que contempla el primer apartado del Art. 1894 son -tal como expone agudamente el Prof. ALBALADEJO -las de que alguien por oficio de piedad (puro móvil o motivo) done alimentos a otro (supuesto de que los dé sin ánimo de reclamarlos); en cuyo caso no puede exigirlos después al que tenía la obligación jurídica de darlos, por la razón de que lo hizo "animus donandi" (con ánimo liberal). Aparte de que, cubierta la necesidad del alimentista por la donación que se le hizo, cesó la obligación del alimentante durante aquel período. Por lo que -concluye ALBALADEJO- el alimentante no tiene porqué pagarlos al que los dió, porque tal alimentante no los debía. (1)

3. OTROS CASOS DE OBLIGACIONES NATURALES

Se ha dicho por ROCA SASTRE y PUIG BRU-

(1) M. ALBALADEJO: "Instituciones de Derecho Civil", tomo I, pág. 647.

TAU- que "los dos casos típicos de obligación natural, en sentido moderno, son los derivados de la prescripción y de sentencia injusta no revisable". (1)

¿Es ello cierto? Ocurre que el razonamiento de los autores citados resulta convincente, al menos desde una perspectiva teórico-dogmática. Señalan cómo en los aludidos casos el interés general de seguridad o de estabilidad en las relaciones jurídicas impone la solución, tal vez injusta, en un determinado caso concreto, de privar a un titular de su derecho subjetivo. Con lo que el interés de tal manera protegido es de carácter público. Pero, una vez sentada la regla general tuteladora de este interés, nada impediría a los beneficiados con aquella norma renunciar al beneficio que les proporciona. El dilucidar el porqué de esa renuncia nos llevaría, muy posiblemente, al planteamiento de nuevas cuestiones. Baste con indicar, a los efectos que aquí interesan, que su comportamiento provendrá en ocasiones, tal vez de conveniencias sociales, de razones de "decoro social". Otras, sin embargo, parece indudable que su actitud tendrá un origen o un fondo ético - moral : dar realidad a lo que formalmente ellos estiman un imperativo de conciencia.

En el caso concreto de la prescripción, el Art. 1935 del C.C. admite expresamente la renuncia de la ya consumada ("LAS PERSONAS CON CAPACIDAD PARA

(1) ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU: "Estudios de Derecho Privado", Tomo I, "Obligaciones y Contratos"; "Doctrina de las obligaciones naturales".

ENAJENAR PUEDEN RENUNCIAR A LA PRESCRIPCION GANADA, PERO NO AL DERECHO DE PRESCRIBIR EN LO SUCESIVO"). De este precepto se quiere deducir -por ROCA SASTRE y por PEREZ GONZALEZ ALGUER- la existencia de una obligación natural para el deudor cuando civilmente no puede exigirse el pago de la deuda por haber prescrito. Y ello porque la irrepetibilidad del pago se basaría en el Art. 1901 del Código.

¿Hay en la situación descrita obligación natural, siquiera en estado embrionario? No lo creemos así. La contestación negativa se impone por varios motivos.

1º. Como indica el Prof. MARTIN PEREZ en sus explicaciones de Cátedra, en el supuesto de la obligación prescrita, no estamos frente a una obligación sin acción o sin facultad de exigir para el acreedor ya que éste puede accionar exigiendo su cumplimiento y, luego, el deudor puede oponerle la excepción prescriptoria. Por lo que, en sí, la obligación, aunque prescrita, es civil, perfecta y exigible, a diferencia de la obligación natural.

2º. El Art. 1901 habla de que "se presume que hubo error en el pago cuando se entregó cosa que

nunca se debió ...". Pues bien, conjugando este precepto con el 1935 para deducir la irrepetibilidad del pago, se desprende que aquel siempre opera en supuestos en los cuales nunca se debió la cosa, mientras que la obligación prescrita del Art. 1935, débase o no se deba ahora, alguna vez se debió: precisamente antes de haber prescrito.

¿Cómo interpretar el Art. 1935? Simplemente, se trata de una simple renuncia por parte del deudor del derecho a no pagar la deuda prescrita. No se pierda de vista, además, que la renuncia a la prescripción, según parece deducirse del citado Art. 1935, es una enajenación. Y, como manifestara DE BUEN "esta naturaleza de la renuncia se compagina mal con el criterio de que aquella deja subsistente una obligación natural; pues si ésta existe, la renuncia, más que enajenación, sería simple reconocimiento de un derecho de otro". (1)

4. ESTUDIO DEL SUPUESTO CONTENIDO EN EL ART. 1901. ALCANCE DEL MISMO.

Artículo 1901 :

"SE PRESUME QUE HUBO ERROR EN EL PAGO

(1) DE BUEN: Notas al "Curso" de COLIN y CAPITANT; Ob. cit. III, 77.

CUANDO SE ENTREGO COSA QUE NUNCA SE DEBIO O QUE YA ESTABA PAGADA; PERO AQUEL A QUIEN SE PIDA LA DEVOLUCION PUEDE PROBAR QUE LA ENTREGA SE HIZO A TITULO DE LIBERALIDAD O POR OTRA JUSTA CAUSA".

En este precepto se excluye la repetición del pago que, aún verificado sin ser debido, se hiciera a título de liberalidad "o por otra justa causa". Se ha creído que esta justa causa puede ser, sin duda, un deber de conciencia de idéntica naturaleza al reconocido por el párrafo 814 del Código Civil alemán. (1)

Según DE BUEN, "en esta disposición, las palabras justa causa son un tanto ambiguas. El Código francés se expresa con mucha mayor claridad al decir en su artículo 1.235 que todo pago supone una deuda y lo que se paga sin ser debido está sujeto a repetición, pero la repetición no está admitida con relación a las obligaciones naturales que han sido voluntariamente pagadas. ¿Debe entenderse que al decir justa causa el Código español alude también a las obligaciones naturales? Razones poderosas de justicia inclinan a la afirmativa y también este artículo del Código podría servir de apoyo a una tendencia jurisprudencial como la francesa". (2)

(1) PEREZ y ALGUER en sus comentarios al "Tratado" de ENNECCERUS.

(2) D. DE BUEN: Notas al "Curso" de COLIN y CAPITANT. III, 175.

Por nuestra parte nos inclinamos abiertamente a pensar que, en base a este precepto, puede formularse en Derecho Español la plena admisión de las obligaciones naturales. Si bien, con una orientación radicalmente distinta, por supuesto, de la que tuvieron en otras épocas. Trátase de dotar a ciertas obligaciones morales de la cobertura -o más bien- de un reconocimiento jurídico, que las haga, cuando ello fuere menester, superar la esfera de la estricta subjetividad ética para acceder a la de la objetividad jurídica.

Ahora bien, forzoso resulta admitir que la formulación del Art. 1901, vaga y -quizá por esto flexible, no da, como indica LACRUZ BERDEJO, "sino una idea elemental de los casos en que una atribución puede considerarse justificada por una obligación natural" (1)

No obstante, ello mismo propicia que la idea de obligación natural, y, en definitiva, su utilidad, permita adaptarla a variados supuestos. Con lo que consecuentemente, el Juez puede, merced a su ponderado arbitrio, fijar con precisión los contornos de la "justa causa". Téngase muy en cuenta el concepto aristotélico según el cual el Juez es la "justicia viva", un órgano que resume en sí el espíritu del Derecho vigente y lo expresa en nuevas formulaciones co-

(1) LACRUZ BERDEJO, Ob. cit, pág. 185.

herentes con el sistema mismo pero, a pesar de ésto, tales que lo llevan a ulteriores desenvolvimientos.(1) La actividad del jurista resulta muy compleja porque, "de un lado, el hecho se presenta envuelto entre circunstancias y detalles no siempre jurídicamente importantes o no todos de igual valor, lo que obliga a aislarlo en sus elementos jurídicamente sensibles, y de otro, a cada caso particular no se presenta como aplicable una sola disposición, sino un conjunto de disposiciones combinadas y coordinadas entre sí". (2)

Volvamos al precepto en cuestión. Es evidente -lo apuntó en sus explicaciones de Cátedra el Prof. MARTIN PEREZ y de él lo recogimos- que el 1901 viene en nuestro Derecho a cumplir análoga misión a la que en Derecho francés lleva a cabo el Art. 1235, y en Derecho italiano el 1237. Siendo ésto así, al tratar todos del supuesto de que se pague algo que no se

- (1) Así se expresa DEL VECCHIO en su obra "Crisis del Derecho y crisis del Estado", traducida por CASTAÑO, Madrid, 1925. En otro punto de esta misma producción acierta insuperablemente a expresar la concepción según la cual, si se trata de completar e integrar el sistema jurídico, el Juez necesita ir más allá de la ley, (y también más allá de la costumbre, donde ésta sea admitida), ante todo mediante la analogía, que hace posible cierta extensión de las normas vigentes, extensión que en realidad es una creación de nuevas normas afines a las precedentes. Tal vez, en el punto que nos ocupa fuera lícito incorporar lo que se denomina "conceptions" (por ROSCOE POUND) o conceptos jurídicos, es decir, categorías dotadas de autoridad, en las que pueden ser encajados los casos o situaciones que están en controversia para que de ellos puedan predicarse las consecuencias adscritas a la respectiva categoría.
- (2) Vide F. FERRARA: "Trattato di Diritto Civile Italiano", Vol. I, parte I. Roma 1921, pág. 247.

debe, es preciso equiparar la expresión del legislador español ("pero aquel a quien se pida la devolución pue de probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por otra justa causa") con la francesa y la italiana coincidentes en que "sin embargo se puede retener ese pago en el caso de que exista una obligación natural". Más concretamente: cuando en el Código Español se lee "a título de liberalidad o por otra justa causa", ha de entenderse por tal expresión lo que la de obligación natural supone en los Derechos franceses e italiano.

En relación con lo mismo, señala ROCA SASTRE (1) que por "justa causa" ha de entenderse una causa onerosa. Ello, por contraposición a "título de liberalidad".

No opinamos de la misma forma. La interpretación aludida cabe motejarla de un tanto gratuita y arriesgada, riesgo a veces común en las deducciones "a contrario". Porque si esta justa causa fuese onerosa y jurídica, de las que el Derecho reconoce como bastantes para justificar un pago debido así como para exigirlo, entonces no estaríamos en el caso de este artículo, que está hablando de entregar una cosa que nunca se debió. Si esta justa causa fuera una causa típica, se debería la prestación y el artículo sería inaplicable. No se plantearía entonces la cuestión de

(1) Ob. cit. pág. 292.

si lo prestado y pagado era debido, porque esa causa lo haría tal y exigible. Por todo esto, concluye afirmando el Prof. MARTIN PEREZ, que esa justa causa estará más bien fuera de las causas civiles típicas. Y, en virtud de la teoría del deber moral como sustrato de la obligación natural, puede hablarse de una causa moral que el Derecho positivo, a través de este artículo, acoge, valora y considera suficiente para hacer el pago irrepetible, aunque no para exigirlo. Y, por ende, puede hablarse también de la presencia de una obligación natural.

Por su parte, MARTINEZ G. CALCERRADA, suscribe, asimismo la tesis del Profesor de la Universidad de La Laguna y establece que "el supuesto de hecho al que se refiere el Art. 1901 puede subsumirse en las conocidas notas del deber moral cualificado, que sería esa causa moral equivalente a "justa causa"; contenido patrimonial, valor de la cosa entregada; inesigibilidad del acreedor, ya que no se faculta para reclamarla, e irrepetibilidad por cuanto éste puede retenerla". (1)

Muy clara es también la postura que respecto al Art. 1901 mantiene el Prof. LACRUZ. Para quien "la obligación natural existe en el Derecho español, pero no en esos preceptos particulares (se refiere a los Arts. 1756, 1798, 1824 y 1894, entre otros casos) sino como una categoría general de la que trata el Art.

(1) Ob. cit., pág. 41

1901 y que, acaso, de no existir este precepto podría inducirse de los principios generales del Derecho". Y, más adelante, escribe que "el Art. 1901 supone la traslación al Código Civil de la teoría de la obligación natural contenida en Las Partidas: podrán no ser los mismos ni su estructura ni, acaso, sus efectos (por mi parte estimo que sí son iguales) pero lo indudable es que ha sido transmitida la institución. El C. C. pues, conoce las obligaciones naturales". (1)

Manifiestamente tajante el criterio del Prof. FUENMAYOR. El 1901 "es el único precepto que sirve de base a la figura que examinamos" (2). Y añade: "a la vista del Art. 1901, entendemos que nuestro Código acoge con criterio impecable las obligaciones naturales, tal como son entendidas por la más depurada doctrina moderna, consagrando así el cumplimiento de los deberes morales cuando son cumplidos de manera espontánea" (3).

Según FUENMAYOR, el nudo de la cuestión radica en la expresión "o por otra justa causa". La "condictio" fracasaría por vía de excepción o reconvención en caso de existencia de causa objetiva, porque entonces la causa para pedir es causa para retener; y ésto ocurre en dos supuestos: 1) si el "accipiens" acredita que la cosa entregada le era debida (1900 "in fine") -causa onerosa-; 2) si prueba que la entrega se hizo a

(1) Ob. cit. págs. 173 y 175.

(2) Ob. cit. pág. 25

(3) Ob. cit. pág. 26

título de liberalidad (1901) -causa lucrativa-. Fracasa también por vía de objeción, en caso de existencia de causa subjetiva: no hay causa para pedir pero la hay para retener ("otra justa causa", Art. 1901). (1)

Con sobrada razón pensamos, afirma FUENMAYOR que "entran aquí todos los deberes patrimoniales de orden moral, no sancionados con acción, deberes de justicia conmutativa, según un criterio ético". Seguidamente, por vía de ejemplo, va enumerando dentro de esta categoría:

- 1) El crédito prescrito y las adquisiciones por usucapión de mala fé.
- 2) Las obligaciones "ad pias causas" civilmente informes (testamentos y donaciones).
- 3) Deber moral de restitución derivado de sentencia injusta.
- 4) La fiducia testamentaria en favor de causas pías.
- 5) La reparación del daño moral (estupro, adulterio, etc.) en los casos de no constituir crédito civilmente exigible.

Cabría puntualizar, respecto de la anterior

(1) Cfr. NUÑEZ LAGOS: "Pago de lo indebido sin error", cit. por FUENMAYOR, ob. cit.

relación, lo siguiente :

1º. - Que, con relación al deber moral de restitución derivado de sentencia injusta, el acuerdo doctrinal es, prácticamente, unánime. Incluso ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU (1) llegan a la afirmación de que sólo pueden calificarse como obligación natural los casos de obligación prescrita y de sentencia injusta no revisable.

2º. - Que, en lo que toca a la reparación del daño moral y a partir de la famosa sentencia de 6 de Diciembre de 1912 -que, como es bien sabido, abrió brecha en la materia- la doctrina jurisprudencial es enormemente cuantiosa y puede condensarse diciendo que "la tutela del honor en la vía civil es amplia, debiendo abarcar todas las manifestaciones del sentimiento de estimación de la persona (honor civil, comercial, científico, literario, artístico, profesional, etc.)" (Sentencia de 7 de Febrero de 1962). El ofendido tiene, además de la facultad de exigir resarcimiento por los daños y perjuicios morales y materiales sufridos, acciones para "hacer cesar, si es posible, el acto injurioso y para hacer suprimir el medio con el que el mismo ha sido realizado y pueda ser divulgado" (Sentencia citada de 7 de Febrero de 1962).

Tal como pone de relieve FUENMAYOR, "en

(1) Ob. cit. pág. 290 y sigtes.

todos estos casos existe en el "accipiens" una justa causa para retener. Y en todos ellos se parte de un presupuesto: que se ha realizado por el "tradens" una transferencia, un desplazamiento patrimonial voluntario".

Lo que hay es la entrada en juego, por tiempos medidos, de dos principios generales del Derecho, fundamentales ambos en la dinámica del ordenamiento jurídico español: el principio de seguridad del tráfico y el respeto a la personalidad. En el sentido y con las condiciones que, a continuación, se explican.

Una vez que, de manera voluntaria y espontánea se ha efectuado el desplazamiento patrimonial, el Derecho -que antes tenía vedada su intervención, ahora sí que interviene (ahora puede hacerlo) y lo hace al objeto de tutelar lo que resulta ser una justa causa. Antes de tal desplazamiento impera el principio de seguridad jurídica del tráfico. Impera el orden jurídico para el cual resulta irrelevante todo cuanto no sea más que el puro deber moral. Y de otra parte, luego del desplazamiento patrimonial, ha de imperar también el orden.

En consecuencia, por ser fiel al principio de respeto a la personalidad -que resultaría gravemente violentado si se exigiera mediante coacción el cumpli-

miento de un deber puramente moral - pasa el Derecho de la neutralidad o de la indiferencia a la actividad. Por dos cauces:

- 1º. - El cumplimiento voluntario por parte del deudor moral.
- 2º. - La prueba de la causa por el adquirente. Quien, en fin se queda con lo que "moralmente" (sólo moralmente) era suyo. Que, ahora, ya lo es también jurídicamente.

De esta suerte, el Derecho ha legitimado la adquisición al estimar justa su causa, bien que ésta sea de carácter subjetivo (1).

Teóricamente queda, de este modo, salvada la cuestión. Más en la práctica es fácil se planteen problemas de envergadura. Uno de ellos sería el del choque entre acreedor natural y propietario. Imaginemos que un sujeto, titular según Registro, ha dispuesto de bienes con la finalidad de dar cumplimiento a una obligación natural. Posteriormente el verdadero titular reclama. Su demanda prospera judicialmente. En tal caso, las adquisiciones del "accipiens" -acreedor natural- quedarían sin efecto. Entendemos que esta solución resulta correcta desde el punto de vista

(1) Cfr. FUENMAYOR, Ob. cit.

técnico toda vez que el "accipiens" carece de la condición de adquirente a título oneroso (Art. 34 de la Ley Hipotecaria). Con lo cual se le trata, aunque no lo sea, como un adquirente a título gratuito. O, lo que es lo mismo, si no oneroso es porque "parece" gratuito.

¿Resulta justo que de la pugna propietario-acreedor natural salga triunfante el primero? Indudablemente sí, dado que el acreedor natural carece de título suficiente para retener su adquisición. No se olvide que ésta procede de un acto dispositivo irregular del "tradens"; y, como señala FUENMAYOR, "la moral exige que sea protegido el titular real y el Derecho debe protegerle, por darse en él un doble título -moral y jurídico, a la vez-, sin poderse satisfacer, porque sería contrario a la justicia, el deber natural mediante la disposición de lo ajeno. Y todo esto, no porque el acto de cumplimiento de la obligación natural sea un acto a título gratuito, sino, simplemente, por no ser un acto a título oneroso. En última instancia el acto de cumplimiento se revisa por ser un acto dispositivo ilegítimo, sin que pueda justificar el "accipiens" su adquisición en un título superior al de aquel que le vence en el conflicto"(1).

Otro problema que ofrece, asimismo, interés práctico es el de la responsabilidad del disponente

(1) FUENMAYOR, Ob. cit. pág. 30

por evicción dolosa. Se ha creído, con razón, que el "accipiens" -acreedor natural- puede exigir al disponente tal responsabilidad. En efecto, así parece habida cuenta de que lo demanda la naturaleza del acto de cumplimiento de la obligación natural.

Supuesto que es acto irrepetible, crea en el "accipiens" un interés digno de protección. Y en cuanto al "tradens", le afecta lo dispuesto en el Art. 1102 del C.C. Porque aunque el artículo hable de obligaciones -y en esta expresión, entendemos, no debe incluirse, rigurosamente, la obligación natural, consagra un principio general que también recoge el Art. 1902 para la culpa o negligencia. Procede la responsabilidad por evicción porque el dolo ha sido la causa de "dejar sin efecto" la adquisición originada por un acto dispositivo realizado en perjuicio del "accipiens".

Cuestión de parecidas características a la que acaba de contemplarse es la del saneamiento por vicios ocultos. Problema que, como el anterior, ha sido en España -que nosotros sepamos, al menos- el Prof. FUENMAYOR el único que lo ha tratado (1). El planteamiento cabría formularlo, en forma interrogativa, de la siguiente manera: ¿responde el "tradens" si, conociendo la existencia de vicios ocultos, no los hubiera hecho saber al acreedor natural? FUEN-

(1) Ob. Cit., pág. 31.

MAYOR razona así su respuesta: "por analogía cabe aplicar aquí la norma que, para el comodato, dicta el Art. 1752. Y esto no porque sea un acto gratuito el cumplimiento de la obligación natural, sino por una aplicación analógica, derivada de la "ratio" del precepto: el comodante responde de los daños que hubiera sufrido el comodatario como efecto de no haber le hecho saber aquel los vicios conocidos; en la misma medida y por igual razón debe estimarse procedente la responsabilidad en caso de cumplimiento de obligación natural porque, siendo éste un acto de disposición aceptado libremente por el "accipiens", debió el disponente ilustrarle acerca de tales vicios y hay que achacarle la culpa o negligencia de que habla con carácter general el Art. 1902: por acción, en cuanto dispuso, o, al menos, por omisión en cuanto no facilitó una noticia que, de haber sido conocida, hubiera permitido al "accipiens" no aceptar la disposición. Entendemos, sin embargo, que la acción para exigir la responsabilidad debe quedar incluida, en cuanto a su prescripción, en el nº 2 del artículo 1968."

5.- EL LLAMADO PAGO O CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION NATURAL . -

Al objeto de abordar con el rigor y la cohe-

rencia indispensables el tema del pago o cumplimiento de la obligación natural en Derecho Español común - y, por supuesto, ello en base únicamente al Art. 1901 del C.C.- urge, ante todo establecer que la natural no es una obligación jurídica "strictu sensu". Por consiguiente, para el Derecho su cumplimiento no es tal. En efecto: no hay derecho alguno de crédito en la obligación natural pues el acreedor carece de poder sobre la conducta del deudor; no puede exigirle ningún tipo de comportamiento. Tampoco le es posible tratar de obtener una equivalente satisfacción sobre su patrimonio.

En lo que podría pensarse -arguye DIEZ PICAZO (1)- es "en una relación a la cual se le hubiese amputado uno de sus términos (el derecho de crédito). Se trataría de un deber jurídico de prestación sin un correlativo derecho de crédito".

Pero, ¿ es jurídico este deber? Desde luego parece que no puesto que para ello se precisaría que el ordenamiento exigiera coactivamente que una determinada conducta fuese realizada. Lo cual no ocurre en el caso de las obligaciones naturales. Por tanto, ¿ qué juridicidad cabe atribuirles si nada ocurre cuando son incumplidas? ¿ Qué obligación es aquella ante cuyo incumplimiento el Derecho permanece pasivo o netral?

(1) DIEZ PICAZO: "Fundamentos de Derecho Civil patrimonial", pág. 341.

Si ante un deber jurídico no satisfecho se produce, en alguna manera, reacción por el Ordenamiento, ¿por qué no ante el impago de una obligación natural?

La respuesta, obviamente, no puede ser más que una: porque en las naturales no hay relación obligatoria.

Sucede, como en otra parte del trabajo se indicara, que -según la certera expresión de LACRUZ (1)- "la supuesta obligación mientras no se cumple lleva una existencia metajurídica".

Sin embargo, su concreción y relevancia jurídicas surgen cuando la atribución patrimonial en cumplimiento del deber moral tiene lugar. Ello acaece al realizarse "espontáneamente" la prestación "a título de liberalidad o por otra justa causa". Pues bien, si negamos que la prestación haya sido hecha a título de "pago debido", habrá por fuerza, de admitirse que se ha efectuado gratuitamente, a título de liberalidad, con "animus donandi". Así tal acto se regiría por las prescripciones de la donación. Y, en consecuencia, solo se reputará válido en la medida en que haya sido hecho con las solemnidades que la ley exige para la donación. Más aún, apurando la hipótesis hasta el límite, cabría su revocación por ingratitud o por

(1) Ob. cit. pág. 189.

supervivencia de hijos, podría ser impugnado como constitutivo de fraude de acreedores, debería ser oficioso y su importe computado en el haz hereditario.

Habríamos llegado de esta suerte a una conclusión inadmisible, amén de contrariar manifiestamente la intención de los sujetos. Y, lo que es más grave, contrariamos la "ratio legis".

No; se postula por nuestra parte que, como indica DIEZ PICAZO, "aquello que la ley nos dice es que una determinada atribución patrimonial, realizada con ánimo de cumplir un deber social, moral o de conciencia, es considerada por el Derecho como un acto válido y completamente eficaz.

Cual sea la naturaleza de este acto parece cuestión opinable aunque, de entráda, hayamos descartado, creemos que con argumentos suficientes, que se trate de un pago; evidentemente, no siendo un acto juridicamente debido, sólo -y nada menos que- un acto libre, de ninguna manera cabe siquiera hablar de pago (1).

En este sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo es terminante cuando afirma que el pago de la prestación es la entrega de aquello mismo que se debe y requiere, como indispensable antecedente, la

(1) Cfr. Art. 1156 del C. C.: "las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento ..."

existencia de una obligación; y como estas nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia, hasta que la obligación no esté prestablecida en alguna forma de nacimiento, no existen términos hábiles para aquilatar si determinado pago extingue total o parcialmente la aún no nacida obligación, para la que no existe pacto o de claración eficaz de existencia. (Sentencias de 12 de marzo de 1924 y 16 de diciembre del mismo año).

¿Tal vez estemos frente a una donación? La negativa se impone. Para que fuera posible hablar de donación se exigiría una intención, un ánimo liberal que, de todo punto, falta. "No hay aquí generosidad por parte de quien dispone, porque no da lo pro pio a otro para enriquecerle. No es tampoco un acto oneroso: nada hace aquí el concepto de equivalencia de las prestaciones, no hay aquí contraprestación"(1).

Si se afirma que el cumplimiento o pago de las obligaciones naturales es un acto o negocio jurídico, posiblemente el aserto quede próximo a la verdad. ¿De qué especie? En el criterio que se estima más correcto se mantiene que se trata de un acto o negocio jurídico neutro, al que no cabe aplicar la norma tiva de los onerosos ni de los gratuitos. El "tradens" ha actuado en consideración a una justa causa. Y,

(1) FUENMAYOR, Ob. cit., pág. 29.

como escribe LACRUZ, "no es presupuesto de la irrepetibilidad la mera existencia de una justa causa, sino la actuación del "tradens" precisamente en vista de esa justa causa" (1).

A observar que nos hallamos frente a un acto libre (por tanto, no debido) de disposición: ni gratuito ni oneroso pero, desde luego, irrepetible porque constituye para el "accipiens" una justa causa de adquirir.

Ahora bien: acto o negocio neutro requiere capacidad y voluntad. Voluntad, decimos, no intención concreta pero sí voluntad de cumplimiento de un deber moral. Porque, en opinión de LACRUZ, el error sobre la coercibilidad de la obligación no excluye la determinación causal del agente. Rigurosamente hablando creemos que el error sobre la coercibilidad de la obligación supone nada menos que error sobre la naturaleza misma del acto. Por supuesto que irrelevante en el sentido que apunta LACRUZ. Quién, de otra parte, estima, en cambio, trascendentes el error en la persona, el error en el objeto prestado cuando éste era determinado (vg. en la fiducia testamentaria), etc. Igualmente estima el error cuando la prestación sea desproporcionada al deber mismo. Lo cual en determinados -y hasta, posiblemente, frecuentes- casos resultará de difícil matización.

(1) Ob. cit. pág. 190.

Por lo que respecta a la capacidad, parece clara la necesidad de aplicar el Art. 1160 del C.C. y mediando acuerdo no es imposible la "datio in solutum" en cumplimiento de una obligación natural es pecífica. Lo cual vale también en lo que toca a la imputación de pagos en el caso de coexistencia de varias obligaciones naturales (1).

La doctrina española -FUENMAYOR- ha planteado la interrogante sobre si cabe un cumplimiento indirecto de la obligación natural. Con copia de ar gumentos se ha contestado afirmativamente. Excluyéndose solo aquellos supuestos en que la ley no per mite expresamente que un acto jurídico (inter vivos o mortis causa) engendre una obligación civil cuya prestación coincida con el contenido de la obligación natural que se trata de cumplir de un modo indirecto.

O, dicho en otros términos, el cumplimiento indirecto de una obligación natural es únicamente posible en los casos en que la Ley no prohíbe el nacimiento de una obligación jurídica que tenga por cau sa la que sólo puede legitimar una adquisición patrimonial mediante el cumplimiento directo. Son los ca sos en que la obligación natural debe mantenerse ine xorablemente -por una degradación de la ley civil- como acto libre (no debido) de disposición, aunque irrepetible después del cumplimiento voluntario por

(1) LACRUZ, Ob. cit., pág. 191.

parte del deudor natural. Como ejemplo de esto último se cita la fiducia testamentaria, con instrucciones reservadas (Art. 785, 4º), aunque sea para una causa pía. Es evidente que en tal situación la obligación natural no puede legitimar la obligación civil porque sería causa ilícita ya que es contraria a lo dispuesto en la Ley (Arts. 1275, 670 y 785 nº 4º). Lo cual no quiere, de ninguna manera, decir que con dicha causa se obligue al deudor. Y por eso expresamente priva de la acción al que hubiere resultado acreedor civil o declara nulo de pleno derecho el negocio que nacería de tal acción.

Muy otra es la actitud del legislador en los demás casos. Porque es en ellos la propia ley quien eleva a obligación natural ciertos deberes de justicia que estaban sólo en el campo moral. Elevación que consiste, como indica FUENMAYOR (1), en permitir que se introduzcan en el campo jurídico, por la vía de la cusa: bien a través del cumplimiento voluntario, bien a través de la obligación (asumida voluntariamente) de cumplirlos.

Examinemos, por último, la disciplina del llamado pago o cumplimiento de la obligación natural. Ante todo urge destacar que el acto jurídico que genera la obligación civil constituída para cumplir, en su caso, la obligación natural, es siempre de índole

(1) Ob. cit., pág. 35

causal. Su causa no es otra que el deber moral -obligación natural en consideración a la que se actúa-.

Por ello mismo el cumplimiento de la obligación civil debe estimarse -según antes se anticipa- como un acto "neutro" de disposición, acto al que no cabe aplicar las reglas de los actos onerosos ni tampoco las de los gratuitos.

Supuesto que el acto o negocio jurídico de que hablamos no es una donación -hipótesis ya descartada con anterioridad- no requiere la forma propia de la donación en lo que se observa una notable diferencia con la donación remuneratoria, figura que nada tiene en común con nuestro caso. En consecuencia, la normativa no puede responder a un criterio común pues variará según una extensa tipología. Habrá de estarse en cada situación concreta pendiente de las circunstancias que delimiten y configuren la obligación cuya extinción se pretende.

6.- DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN TORNO A LA FIGURA DE LAS OBLIGACIONES NATURALES. -

En tema de obligaciones naturales habitual-

mente se menciona como contribución jurisprudencial española al mismo la doctrina contenida en la Sentencia de 17 de Octubre de 1932. Además de ésta otras sentencias se han referido a la cuestión de un modo más o menos tangencial. En su momento nos ocuparemos de ellas.

Centremos ahora nuestra atención en el fallo de 1932. Tratábase de los siguientes hechos: una joven de dieciséis años de edad, al quedar huérfana de padre y careciendo de bienes de fortuna, entró a trabajar para atender a su subsistencia y a la de su madre, en una confitería. Allí conoció a un hombre de unos cuarenta años, casado y con hijos, y de profesión doctor en Medicina. Seducida por él tras muchas promesas, contrajo relaciones ilícitas. Fruto de las mismas fueron cuatro hijos a quienes, bajo la protección del médico, cuidó y alimentó la mujer.

Pasado algún tiempo, el Dr. A. M. T. se enamoró de otra mujer abandonando a la muchacha C.V.N.; como quiera que ésta no tuviese medios económicos, escribió en distintas ocasiones a A. M. T. en solicitud de los mismos para atender a sus necesidades y a las de sus hijos. Requerimientos a los que el A. M. T. responde prometiéndole en varias cartas una pensión fija (50 a 60 duros) que fué aceptada por la joven C. V. N. y que estuvo percibiendo durante cinco o seis meses.

Transcurridos los cuales, dejó M. de enviar el dinero. En vista de ello, C. V. realizó diferentes gestiones cerca del individuo. Más, sin resultado alguno, decidióse a reclamar judicialmente lo que creía le era debido.

Alegando en Derecho diferentes preceptos del C. C. suplicó se dictara sentencia condenando al demandado A. M. T. a que abonase a la actora la suma de 300 Ptas. mensuales por haberse obligado a ello voluntariamente. Obligación a cuyo cumplimiento le impulsaban los dictados de conciencia y de sangre. La actora acompañó con el escrito varios documentos, y, entre ellos, cartas y notas dirigidas por el demandado a ella y reconocidas por aquél. En una de las cuales le dice: "mientras yo trabaje y tenga vida tú recibes todos los meses de 50 a 60 duros fijos". Y en otra: "para más adelante, te dije y te repito que no gastarás coche, pero con 60 duros al mes, sin salir de tu casa para nada, decentemente viviendo puedes atender a tu vida y eso, si Dios me dá vida y salud para trabajar, no falta".

A la demanda contestó el A. M. T. negando la exactitud de lo relatado por la actora, siendo, tal vez, lo único exacto, el que mantuvo relaciones carnales con ella. Pero que si él formuló alguna promesa ni ésto tenía valor jurídico alguno ni tal ofrecimien-

to, que pudo hacerlo en evitación de mayor escándalo, podía tener el alcance que trataba de darle la demandante. Y tras negar fueran de aplicación los fundamentos de Derecho invocados de contrario, terminó suplicando se dictara sentencia absolutoria de la demanda de autos y con costas a la parte actora.

La demanda no prosperó. La Audiencia Territorial dictó sentencia confirmatoria de la dictada por el Juez de Primera Instancia, desestimando la admisión del documento presentado con su escrito de conclusiones por la parte demandada y absolvió al demandado A. M. T. de la demanda interpuesta por C. V. N. sin hacer expresa condena de costas en ninguna de las dos instancias.

Contra este fallo se interpuso recurso de casación por infracción de ley fundado en los números 1º y 7º del Art. 1792 de la L. E. C. El Tribunal Supremo casó la sentencia con un doble fundamento: 1º) hay aquí -vino a decir- un contrato por existir objeto cierto, causa determinada y consentimiento libremente prestado. 2º) no es ilícita la causa, como erróneamente se afirmara en la sentencia recurrida. En los considerandos de la sentencia se establece la siguiente doctrina: "Que examinados los términos de las cartas dirigidas por el demandado a la mujer que fué su concubina, constituyen una declaración de vo-

luntad, que asume el compromiso de pagar cierta can ti dad mensual durante la vida del oferente, solicitada y aceptada por la persona a quien se dirigió la promesa formal, por lo que se estableció un vínculo obligatorio, caracterizado por la concurrencia de ob je to cierto, causa determinante y consentimiento libre, sin que sea precisa la prestación correlativa, porque del negocio jurídico unilateral, que cabe dentro de los amplios términos de los artículos 1254 y 1258 del C. C. y de la disposición del Ordenamiento de Alcalá relativa a la forma de obligarse.

Que los amores ilícitos iniciados y mantenidos entre un hombre culto, de edad madura, con pleno sentido de sus responsabilidades conyugales y una joven huérfana de dieciséis años, que ejercía un modesto empleo, abandonado luego para ceder al capricho de la seducción, al desplazar a la mujer del ámbito de una vida honesta para situarla en el rango de concubina, cuya situación se agravó con la maternidad, es indudable que originó, aparte de la pérdida de estimación social, ciertos deberes morales imputables al varón, quien en este caso no pudo menos de reconocerlos y traducirlos en auxilios materiales de índole económica, que por el mero hecho de su prestación durante el transcurso de las relaciones íntimas, se convirtieron en obligaciones naturales y, después de romperse aquellas, por la promesa formal

de la pensión ofrecida, vinieron a transformarse en una obligación civil que el deudor ha de pagar, no "donandi" sino "solvendi animo", porque el promitente quiere cubrir un deber de conciencia, y no simplemente para gratificar, ni por un movimiento de liberalidad en el sentido de Las Partidas.

Que la promesa causal de pensión no se hizo en contemplación a un pacto concubinario, ni como gratificación de éste, sino para cubrir atenciones compensatorias al significarse el abandono y ruptura de las relaciones espúreas; razón por la cual la causa de la obligación no incurre en la sanción del Art. 1275 del C. C. y se eleva al plano normal de la obligación natural reconocida civilmente con carácter compensatorio que es de plena recepción en Derecho justo y normativo". (1)

Quisiéramos, por nuestra parte, subrayar algunas de las afirmaciones hechas en el segundo considerando por estimarlas de subido interés.

A) Todas las circunstancias del caso, tanto en el varón, "un hombre culto, de edad madura, con pleno sentido de sus responsabilidades conyugales", como en la mujer, "una huérfana, de dieciséis años, que a fin de atender a su subsistencia ejercía un modesto empleo, abandonado luego por ceder al capricho de la

(1) "Jurisprudencia Civil", publicada por la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, tomo 205, págs. 631 y 632.

seducción", originaron luego ciertos "deberes morales" imputables al varón.

B) Consciente éste de tales deberes, no pudo por menos de traducirlos en auxilios materiales de índole económica que "por el mero hecho de su prestación durante el transcurso de las relaciones íntimas, se convirtieron en obligaciones naturales". Observe-mos cómo se ha pasado, en escalonamiento gradualmente exacto, de menos a más, del simple deber moral a la obligación natural. Y luego, desde ésta -como inmediatamente se verá- se alcanzará la máxima cota, o sea, "la obligación civil perfectamente coercible".

C) Al romperse las relaciones íntimas "por el desamparo infidente del seductor y reconocidos los -deberes morales- por éste en la promesa formal de la pensión ofrecida, "vinieron a transformarse en una obligación civil, perfectamente coercible".

D) A virtud de dicha obligación civil, "el deudor ha de pagar no "donandi" sino solvendi animo", porque el signatario de los documentos que, mediante promesa, quiere cumplir un deber de conciencia, no lo hace con la intención de gratificar ni por un movimiento de cordial liberalidad, sino "acuciado por las reiteradas instancias de la mujer seducida y abandonada" y estimulado, también, por las "propias

responsabilidades morales".

Más adelante, en el tercer considerando ha llamamos asimismo otras dos afirmaciones de interés:

A) "La promesa formal de pensión no se hizo en contemplación a un pacto concubinario (sic), ni como gratificación de éste, sino para cubrir las atenciones espúreas". Sorprende no poco que en el lenguaje habitualmente preciso y meditado de nuestro más alto Tribunal de Justicia se hable de "pacto concubinario, bien que, en esta oportunidad, se haga figuradamente. La sorpresa se renueva cuando la sentencia se refiere a la "gratificación" de tal pacto. Es como si fuere factible aludir técnicamente a un precio por el servicio que presta la prostituta.

B) Se dice que "la causa de la obligación trasciende la esfera de lo ilícito, sancionada con la nulidad en el artículo 1275 del C. C.". Pensamos que la causa está erróneamente situada en ese precepto. Y se añade que (la causa) "se eleva al plano normal de la obligación natural reconocida civilmente, con carácter de compensatorio, que es de plena recepción en Derecho justo y normativo". ¿Qué quiere significar el juzgador cuando habla de "carácter compensatorio" de la obligación natural reconocida civilmente? ¿Acaso un superior e inefable principio de

equidad? Aventurado resulta conjeturarlo. Y nada digamos del "derecho justo y normativo"; o, ¿es que existe otro?

De la doctrina contenida en esta sentencia extrae FUENMAYOR (1) las siguientes conclusiones:

- 1a. Cabe hablar en nuestro Derecho Civil de obligaciones naturales.
- 2a. La obligación natural puede tener por antecedente ciertos deberes de justicia que impone la Moral.
- 3a. La obligación natural se caracteriza por el cumplimiento voluntario de tales deberes.
- 4a. Cabe asumir una obligación civil que tenga por causa la misma de la obligación natural: "cubrir un deber de conciencia".
- 5a. Quien paga tal obligación civil no lo hace "donandi" sino "solvendi animo". Es tanto como afirmar el carácter neutro del acto por el que se cumple indirectamente la obligación natural; no es gratuito ni tampoco oneroso (la sentencia se cuida de señalar la ausencia de prestación correlativa por parte

(1) Ob. cit. pág. 37.

de la mujer); "solvendi animo" es calificación correcta referida al cumplimiento de la obligación civil, sin que sea incompatible con aquel carácter neutro, porque el pago no es necesariamente acto oneroso o gratuito.

- 6a. La única dificultad para reconocer viabilidad al cumplimiento indirecto de la obligación natural puede venir por la prohibición de una causa ilícita que contiene el Art. 1275 del C. C. En otro caso el cumplimiento indirecto "es de plena recepción en Derecho justo y normativo".

No ha de ocultarse que el fallo, si de extraordinario interés, carece obviamente de una depurada técnica. Como antes intentamos subrayar, las expresiones no son afortunadas. Así, se habla de "transformación" cuando, en realidad, la obligación nace "ex novo", si bien la causa existía ya. Se habla, pues, escribe LACRUZ (1), de "reconocimiento" con relación al deber moral, pero impropiaamente.

Importa ahora destacar que el fallo de 1932 que acabamos de examinar tiene su precedente en la Sentencia de 9 de Mayo de 1914. En ella ocupose el juzgador del caso siguiente: merced a los ruegos

(1) Ob. cit.

de un moribundo, herido en un desgraciado accidente de caza, su padre y su hermana firman un documento en el que se hacía constar que "satisfaciendo estímulos de conciencia que los obligaban más que cuantos vínculos creara el Derecho", se comprometen a pagar una pensión a M. -embarazada del hijo en trance de muerte- mientras permaneciese soltera y en todo caso al hijo, si nacía. El padre pagó, en efecto, durante algún tiempo, dejando posteriormente de hacerlo. Demandado judicialmente por M., el supremo, casando la sentencia de instancia, considera que "no hay razones de ningún género que excluyan del derecho a percibir la pensión a M."

Muy matizada es también la doctrina que sienta el fallo dictado con fecha cinco de mayo de 1958. Los hechos eran éstos: una heredera única que escribe a parientes de la causante manifestándoles que por voluntad de la misma les corresponden ciertas cantidades. Las que, aceptadas, comienza la heredera a pagar. Más tarde suspende los prometidos pagos, alegando tratarse de donativos a los que no estaba obligada. El T. S. al casar la sentencia de instancia determinó que: "la obligación estrictamente moral en que pudo consistir en su origen el encar go hecho a la demandada por su causante, al desbor dar el recinto de la conciencia para tener su mani festación externa, no de mera publicidad intrascen -

dente en Derecho, sino reveladora, como los términos de las epístolas demuestran, de un deliberado propósito de cumplimiento, la convierte en una declaración unilateral constituída por la promesa, posteriormente aceptada, cuyo cumplimiento es obligado por el oferente.

He aquí una muy curiosa situación. Cómo una persona, la heredera, declara, en principio, es tar vinculada a efectuar unos desembolsos a favor de otras. Y luego, desdiciéndose -probablemente mal aconsejada- arguye que las cantidades pagadas no lo fueron tal sino que eran cantidades simplemente donda das. De nuevo la pugna reiterada: "solvendi animo versus donandi animo". Sin embargo los textos epistolares condenan a su autora: pagó, no donó. Pagó porque a ello venía obligada. En su fuero interno? Sí, es posible. Pero al exteriorizar una "conducta significativa" ya quedó civilmente obligada por su actuación. De esta suerte se le vedó un hacedero rectificar.

La sentencia de 8 de Marzo de 1957 afirma incidentalmente que "aún concediendo a los deberes morales o de conciencia su mayor rango de aproxima ción o equivalencia a la obligación natural, carecer ía en Derecho Civil positivo del impulso necesario y determinante de acción para imponer su cumplimen-

to, quedando así remitida la eficacia de la obligación de conciencia a la esfera íntima de los demandantes".

Claro es que, como estima ALBALADEJO (1) el decir ésto no es afirmar nada en realidad, pero parece presuponer la admisión legal de la figura.

El núcleo del asunto era la aplicación del Art. 1901 (no el cumplimiento de una promesa) que solicitara el recurrente en base a la tenencia de unos valores pertenecientes a persona fallecida. No se probó respecto de los mismos a quién ni para qué se entregaron. El aludido deber de conciencia refiérese a unos deseos, no concretados, de dejar los bienes a una fundación (de la que era patrono quien teneía puestos a su nombre tales bienes).

Aunque no se haga referencia expresa a obligaciones naturales parece habérselas tenido intrínsecamente en cuenta en otras sentencias del Supremo. Así acontece en la de 16 de Febrero de 1899: la participación en beneficios ofrecida al tenedor de libros y luego reconocida en favor de la viuda, se considera vinculante. Se arguye no es donación: su móvil sería recabar su cooperación más activa e inteligente.

(1) ALBALADEJO: "Derecho de obligaciones". Parte general, pág. 251.

En fín, otra de 1 de Diciembre de 1955 en la que la declaración de asumir obligaciones, voluntaria y espontáneamente, "obedeciendo a los dictados de su conciencia cristiana", descubriendo una situación preexistente, cuyos orígenes y desenvolvimiento a través del tiempo no se conoce con detalle, es tenida en consideración.

Tal es, contemplada en su conjunto, la panorámica que ofrece la jurisprudencia española cuando en sus pronunciamientos se ha ocupado, directa o indirectamente del tema de las obligaciones naturales. Acaso no sea una doctrina muy satisfactoria desde el punto de vista dogmático o técnico. Pero de lo que no hay duda es de que en ella se ha dado completa acogida a esta singular categoría obligacional. Y, además, se ha reconocido a la obligación natural la eficacia de "causa retinendi" ("soluti retentio") o de especial "causa adquirendi" de lo voluntariamente entregado.

De cualquier forma, no se olvide que "se considera obligación moral a efectos jurídicos, la que se estima concretamente necesitada de amparo jurídico ("naturae et aequitate vinculum"). Y se entenderá que ella es causa suficiente para que sea exigible el cumplimiento de la promesa libre y seria de darle efecto, cuando la conciencia social se rebele (por herir pro-

fundamente su sentido de la justicia), ante la posibilidad de que el promitente -o sus causahabientes- puedan desdecirse, defraudando la confianza de quién recibe la promesa y la de la misma sociedad, ante el esperado restablecimiento del buen orden jurídico". (1)

Una reflexión final: el hecho de que nuestra jurisprudencia haya dado carta de naturaleza a las obligaciones naturales induce a la creencia de que, con innegable oportunidad y sentido de equilibrio, el T. S., marginando cualquier tentación formalista, acude al "Vulgarrecht", a las concepciones jurídicas latentes en el pueblo, cuando lo estima necesario. Hay como una escapada del Derecho, de la letra de la ley, para penetrar en lo que CARBONNIER llama "la noche bienhechora del no-derecho" (2).

(1) Vide F. DE CASTRO : "El negocio jurídico", pág. 223

(2) Cfr. CARBONNIER: "Derecho flexible", pág. 278

7.- SUMARIA ALUSION AL DERECHO FORAL NAVARRO . -

En la extensa (aunque se proclame no lo es) "Compilación del Derecho Foral de Navarra", aprobada por Ley (de prerrogativa) 1/1973, de 1 de Marzo, encontramos -ley 510, bajo el epígrafe "obligaciones naturales"- una regulación de las mismas al ocuparse el legislador del enriquecimiento sin causa. Dice así el precepto :

"Ley 510. OBLIGACIONES NATURALES. -

NO SERA REPETIBLE EL PAGO CUANDO SE HAYA HECHO EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER MORAL, O IMPUESTO POR EL USO, AUNQUE NO SEA JUDICIALMENTE EXIGIBLE. EL RECONOCIMIENTO, LA NOVACION, LA COMPENSACION Y LA GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES NATURALES PRODUCEN EFECTOS CIVILES.

CAUSA INMORAL PARA EL QUE PAGO. - ASIMISMO ES IRREPETIBLE LO QUE SE DA A CAUSA DE UN CONVENIO INMORAL PARA EL QUE PAGO, AUNQUE LO SEA TAMBIEN PARA EL QUE COBRO."

Entendemos que el juicio que merece esta nor-

ma no debe ser desfavorable. Con claridad se estatuye la irrepetibilidad del pago, incluso en el supuesto de causa inmoral para el que pagó. Manifiestamente se deja abierto un portillo, tal vez peligroso, para facilitar transacciones quizá ilícitas. No obstante la prudencia de los Tribunales y el buen sentido, ético y jurídico, del pueblo navarro impedirán, eso es lo deseable, se produzcan hechos de tal índole.

C O N C L U S I O N E S

1a.) En términos generales no puede afirmarse que los perfiles de la obligación natural, a la luz de los textos jurídicos romanos, sean muy precisos. Su delimitación conceptual resultó en Derecho Romano propicia a la confusión.

2a.) En el Derecho Romano clásico parece que la "naturalis obligatio" significó algo semejante a una derivación o secuela del "ius naturale" ya que en él tuvo su origen. No se olvide que, en tema de obligaciones naturales, hay que tener muy presente la dicotomía "Derecho Civil - Derecho Natural (o Derecho de Gentes)".

3a.) Se sostiene que, pese a algún indicio de contrario signo, en Roma la obligación natural no se emparejó, ni menos se confundió con la obligación moral. El hecho de su posterior -y evidente- confusión es debido, muy probablemente, a dos razones: una, sistemática, de encuadramiento en categorías o

areas existentes y sobradamente conocidas; otra, práctica, consistente en la perentoriedad de cubrir jurídicamente ciertos deberes de conciencia, deberes que, sin tal cobertura, quedarían en total desamparo, es decir, incoercibles de todo punto.

4a.) El Derecho Comparado moderno en lo que respecta a esta singular especie obligatoria, a partir -por fijar una fecha clave- del "Code", se resiente, en buena medida, de la confusión antes apuntada. La regulación de las obligaciones naturales resulta, diríase, vergonzante y se deriva, como es lógico, del confusionismo heredado de Roma. Vacilante la ley, oscura por demás en ocasiones, también la Jurisprudencia muéstrase tal al comienzo.

5a.) La aceptación de la obligación moral como causa del deber de cumplir una determinada promesa -obligatoriedad de cumplir unos ciertos tipos de promesas, nada más- es consecuencia del enfoque, que tal vez queda calificar de revolucionario- del Derecho Civil. Lo que con él se pretende, desde los Tribunales, es, abandonando el formalismo jurídico, hallar soluciones justas y equitativas a problemas que o no las tenían o que, de tenerlas, no eran satisfactorias. Ello acontece en orden a la cuestión de la causa de un convenio libremente consentido. Pues bien,

basta con que la finalidad sea justa y razonable para dar validez al mismo. Unicamente carecerán de validez aquellos actos o negocios jurídicos cuyos fines o motivos (en sentido objetivo) se revelen como absurdos o ilícitos. Queda, por consiguiente reconocida la plena eficacia jurídica del pacto por el que alguien se obliga a cumplir lo que "moralmente" debiera, supuesto el carácter necesariamente razonable y justo de su intención.

6a.) Se admite hoy por el Derecho y la Jurisprudencia de la generalidad de los países, la valoración, trascendente en Derecho, de la obligación moral. Está ya así dotada de un nuevo sentido la expresión "obligación natural"; el sentido al que se alude es el moral. Al hilo del aserto se han considerado vinculantes las promesas escritas de pago de una obligación extinguida por prescripción o por convenio con los acreedores, la de reparar un daño producido sin culpa, la de restituir un enriquecimiento injusto, la de cumplir un deber de asistencia; y, en general, los deberes de gratitud y reconocimiento. Sólo en el Derecho anglosajón no han logrado relieve jurídico -o lo consiguieron en escasa medida- los deberes morales. En Derecho inglés, concretamente, se prefirieron las razones de la seguridad jurídica.

7a.) Se afirma en algún Código reciente -en forma

absolutamente coherente con las nuevas perspectivas de la temática- que la obligación natural -entendida como deber moral cualificado- es susceptible de servir de causa a una obligación civil. Así, por ejemplo, se pronuncia el Código Civil egipcio de 1945.

8a.) Si bien en nuestro Código Civil no aparece "nominatim" la obligación natural, claramente resalta la plena admisión de la figura por el legislador español. Pero con un matiz especial, con una inexcusable anotación: el precepto contenido en el Art. 1901, creemos, significa admitir la figura como una categoría general dentro de las especies obligatorias reconocidas o reconocibles en nuestro Derecho Positivo.

9a.) En todo caso, se piensa que este tipo especial de relaciones obligatorias (supuesto que puedan así calificarse) encontrarían, en última instancia, el apoyo y encaje precisos en los Principios Generales del Derecho, tal como los mismos son entendidos por el legislador español a través de la nueva redacción del Título Preliminar del Código; es decir, en su doble misión, de fuente jurídica supletoria y -especialmente- como informadores del ordenamiento jurídico (Art. 1, apartado 4 del C.C. según redacción del Decreto legislativo de 31 de Mayo de 1974 que recoge el texto ar-

ticulado de la Ley 3/1973 de 17 de Marzo, de Bases para la modificación del Título preliminar del C.C.

10a.) Incluso, reglas de nuestro primer cuerpo legal, cuya justificación acaso se encuentre en las obligaciones naturales (Arts. 619, 622, 1163, 1208, 1304, 1310, 1756, 1824 y 1937) llevan a la conclusión de que esta figura tiene completamente probada no sólo su existencia, sino también su utilidad. No obstante, somos partidarios, como antes queda reflejado, de la opinión de que su existencia se circunscribe al ámbito del Art. 1901 en el cual tienen cabida, repetimos, como categoría general. El precepto citado (tomado del Proyecto de 1888) que dice no se considera cobro de lo indebido lo que se recibe a título de liberalidad "o por otra justa causa", indica, en virtud de estas últimas palabras, el reconocimiento de otras causas de pago debido, además de las citadas en el Art. 1274. Ahora bien, aunque se ha motejado el texto de poco diáfano, parece indudable podría acoger la "nueva" obligación natural!. El anómalo supuesto que se contempla en el precepto tan solo se comprende bajo el prisma de una razón o causa moralmente suficiente merced a la cual lo que no era debido civilmente, y se entregó, pese a ello, está jurídicamente apoyado en una causa justa y justificante de la entrega y posterior aceptación.

11a.) Se afirma que en el Art. 1901 hay, desde luego, una "causa adquirendi" suficiente. Pero, además, ofrece la norma base sobrada para postular que la obligación natural se muestra en él, claramente, como indiscutible "causa retinendi" ("soluti retentio") de lo espontáneamente pagado. Por encima de estas afirmaciones importa destacar, en definitiva, que el precepto ofrece apoyo para entender que la obligación moral puede servir de causa a una promesa contractual. Dirección que viene avalada por la jurisprudencia del T.S. a partir de la conocida sentencia de 17 de Octubre de 1932. En tan importante como equitativo fallo (bien que adoleciera de imprecisión técnica) se sostuvo la posibilidad de que ciertos deberes morales deviniesen obligación civil perfectamente coercible. Sentido éste que, por lo demás, encaja perfectamente en el contexto espiritualista en que tradicionalmente se ha movido el Derecho español. Si bien la tendencia se funda más, quizá, en los Principios Generales del Derecho -atmósfera jurídica que se respira, al fin, que en la letra de la ley.

12a.) Se mantiene que, si ciertamente pudiera resultar peligroso a efectos de seguridad jurídica la amplitud excesiva del concepto "obligación natural", integrando en su seno los deberes morales, ello procede habida cuenta de que no todos los de-

beres morales son susceptibles de inclusión en las obligaciones naturales. Lo son exclusivamente aquellos deberes morales con trascendencia o repercusión social, sólo los cuales pueden encajar dentro de las previsiones del Art. 1901. Por el contrario, los deberes morales de índole personal pueden ser cumplidos "via donandi", sin más alcance vinculante.

13a.) Los deberes morales de fondo social o comunitario no constituyen categoría de muy exactos límites. Habrá de estarse para su caracterización, a las especiales circunstancias de cada supuesto fáctico. Una correcta y meditada ponderación de las mismas llevará a que el Juez afirme -o a que niegue- la presencia de obligaciones naturales. Con las consecuencias que de una u otra alternativa se deriven.

14a.) Conviene constatar que el encuadre sistemático de las obligaciones naturales se halla, más que en la teoría general de las relaciones obligatorias (como rutinariamente se efectúa), en la teoría de las atribuciones patrimoniales y, exactamente, en el terreno de la causa de la atribución patrimonial. Porque en el cumplimiento de la obligación natural hay pago sólo aparentemente. Lo que, en rigor, hay es una atribución patrimonial que no tiene "causa solvendi" sino, como antes se apuntó, otra causa que el ordenamiento jurídico considera justa y legítima: el deber

moral de trascendencia social.

15a.) La "soluti retentio" constituye el síntoma de que la ley considera la existencia de la obligación natural como una causa bastante de la atribución patrimonial. Pues bien, si ello es así -y de la misma forma que la existencia de la relación obligatoria justifica la atribución patrimonial que, mediante el cumplimiento, hace el deudor al acreedor- la presencia de un deber no jurídico justifica la atribución realizada entre quien cumple este deber y el destinatario de la atribución.

16a.) En fin, existe en el pensamiento jurídico alemán la idea de que el Derecho positivo debe abrirse progresivamente a los dictados del Derecho natural y de la Moral, de que el Derecho positivo debe ventilarse con estas aportaciones especialmente en determinados institutos. Uno de ellos podría ser, pensamos, el ancho campo de las obligaciones. En el cual y por obra del influjo moral y jurídico-natural debieran abrirse paso decididamente las obligaciones naturales. Porque son la mejor prueba de un mejor y más equitativo Derecho, en suma de un fortalecimiento de la Justicia aplicable.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- ALBALADEJO : Instituciones de Derecho Civil. Parte general. Derecho de obligaciones. Tomo I. Barcelona, 1960.
- Derecho de obligaciones. Parte general. Barcelona, 1970.
- ANSON : Principles of the English Law of Contracts. Oxford, 1940.
- ARIAS RAMOS : Derecho Romano. Tomo II, Madrid, 1958.
- AUBERT : La repetition des prestations illicites ou immorales. Lausanne, 1954.
- BARASSI : Obbligazioni naturali. Nuovo Digesto Italiano. Vol. VIII.
- BARBERO : Sistema del Derecho Privado. Tomo III. Trad. española. Buenos Aires.

- BAUDRY -
LACANTINERIE : Des obligations. Paris, 1906,
1908.
- BELTRAN DE
HEREDIA : El cumplimiento de las obligacio-
nes. Madrid, 1956.
- BIONDI : Aspetti universali e perenni del
pensiero giuridico romano. Jus.
Riv. di Science Giuridiche. Mi-
lano, Junio 1956.
Arte y Ciencia del Derecho. Tra-
ducción española. Barcelona,
1953.
- BONFANTE : Instituciones. Trad. española.
Scritti giuridici. Vol. VIII.
- BONNECASSE : Supplement au Traité de Baudry-
Lacantinerie. Tomo V.
- BORJA SORIANO : Teoría general de las obligaciones.
Tomo II. México, 1961.
- BURDESE : La nozione classica di naturalis
obligatio.
- CARBONNIER : Theorie des obligations. París,
1963.
Derecho Flexible. Traducción es-
pañola de Díez Picazo. Madrid,
1974.
- CARNELUTTI : Obbligo del debitore e diritto del
creditore.

- CARRESSI : L'obbligazione naturale nella piu recente letteratura giuridica italiana. RTDP, 1948.
- CASTAN : Derecho Civil Español Común y Foral. Tomo III, Madrid, 1954.
La formulación judicial del Derecho. Madrid, 1953.
Hacia un nuevo Derecho Civil. Madrid, 1933.
La idea de equidad y su relación con otras ideas, morales y jurídicas, afines. Madrid, 1950.
- CASTRO : Derecho Civil de España. Madrid, 1955.
El negocio jurídico. Madrid, 1967.
Temas de Derecho Civil. Madrid, 1972.
- CENDRIER : Les effets de l'obligation naturelle a l'encontre des créanciers civils. Rennes, 1932.
- CLEMENTE DE DIEGO : Instituciones de Derecho Civil. Tomo II. Madrid, 1959.
- COLIN (Y CAPITANT) : Curso elemental de Derecho Civil. Trad. española de la 3a. edición.
- CRUET : La vie du Droit. Paris, s/f.
- CHESHIRE : Law of Contracts. London, 1945.

- DE BUEN : Notas al Curso elemental de Colin y Capitant.
- DIEZ PICAZO : Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Madrid, 1970.
Lecciones de Derecho Civil. Tomo II. Madrid, 1965.
- ENNECCERUS (Y LEHMANN) : Tratado de Derecho Civil alemán. Derecho de obligaciones. Tomo II, volumen 1º.
- ESMEIN (RADOULANT Y GABOLDE) : Obligations. Traité pratique de Droit Civil de Planiol y Ripert. Paris, 1930-31.
- ESPIN : Apuntes sobre la obligación natural en nuestro Código Civil. AUM, 1952-53.
Manual de Derecho Civil Español. Volumen III. Madrid, 1970.
- FERNANDEZ MIRANDA : Estado y Constitución. Madrid, 1975.
- FORNIELLES : Caracteres de la hipoteca. Buenos Aires, 1945.
- FUENMAYOR : El cumplimiento "post mortem" de las obligaciones naturales. AAMN. Tomo X. Madrid, 1959.
- FUNAIOLI : Debiti di giuoco e di scommessa. RDDC, 1956.

- GALLARDO
RUEDA : El método y el Derecho Comparados. Boletín de información del Ministerio de Justicia. Año III, nº 105.
- Sobre el concepto y significación del Derecho Comparado. Boletín de información del Ministerio de Justicia. Año III, nº 102.
- GARCIA GOYENA : Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español. Madrid, 1852.
- GAUDEMET : Theorie generale des obligations. Paris, 1965.
- GIORGI : Teoria delle obbligazioni nel Diritto Moderno Italiano. Vol. I. Firenze, 1907.
- GIORGIANNI : La obligación. Trad. española.
- GOBERT : Essai sur le role de l'obligation naturelle.
- GUHL : Das schweizerische obligationenrecht.
- GUASP : Derecho. Madrid, 1971.
- HEDEMANN : Derecho de obligaciones. Traducción española. Madrid, 1958.

- HERNANDEZ GIL : Derecho de obligaciones. Tomo I.
Madrid, 1960.
- IBARGUREN : Las obligaciones y el contrato.
Buenos Aires, 1948.
- IGLESIAS : Derecho Romano. Instituciones de
Derecho Privado. Estudios. His-
toria de Roma, Derecho Romano,
Derecho Moderno.
- IHERING : El fin en el Derecho. Traducción
española. Buenos Aires, 1960.
- JONESCO : Les obligations naturelles. Paris,
1911.
- JOSSERAND : Derecho Civil. Tomo II. Vol. 1º.
Traducción española, Buenos Aires,
1950.
- KRUCKMANN : Nachlese zur unmoglichkeitslehre.
JJ fur die dogmatik des burger-
lichenrechts.
- LACRUZ : Estudios de Derecho Civil. Barce-
lona, 1958.
- LAFAILLE : Derecho Civil. Tratado de obliga-
ciones. Buenos Aires, 1948.
- LARENZ : Derecho de obligaciones. Traducción
española, 1958-59.

- LIRA URQUIETA : Estudio preliminar al Código Civil chileno. Madrid, 1961. ICH.
- LON FULLER : La moral del Derecho. México, 1967.
- MANRESA : Comentarios al Código Civil Español. Tomo XI. Madrid, 1950.
- MARTIN PEREZ : Explicaciones de Cátedra. Curso 1956 - 57.
- MARIN MONROY : Las obligaciones naturales. RCDI, 1931.
- MARTINEZ G. CALCERRADA : Problemática de las obligaciones naturales. Eficacia jurídica del deber moral cualificado. RGLJ, Marzo, 1964.
- MOISSET DE ESPAÑES : Las obligaciones naturales en Derecho Civil Argentino. Temas de un curso. Córdoba, 1967.
Obligaciones naturales y deberes morales. RGLJ, 1964.
- MORI CHECCUCCI : Apunti sulle obb. naturali. Genoa, 1947..
- NAWIASKY : Teoría general del Derecho. Madrid, 1962.
- NEGRI : La obligación. Buenos Aires, 1970.

- NUÑEZ LAGOS : Pago de lo indebido sin error.
- OPPO : Adempimento e liberalità. Milano, 1947.
- OSSORIO MORALES : Lecciones de Derecho Civil. Obligaciones y Contratos. Granada, 1956.
- PACCHIONI : Delle obbligazione in genere. Padova, 1935.
- PEREZ GONZALEZ (Y ALGUER) : Notas al Tratado de Enneccerus. Tomo II, Vol. 1º.
- PERLINGIERI : Le vicende dell'obbligazione naturale. RDC. 1969, nº 4.
- PLANIOL : L' assimilation progressive del' obligation naturelle et du devoir moral. Rev. Critique, 1913.
- POLACCO : Le obbligazione nel Diritto Civile Italiano. Roma, 1914.
- POLLOCK : Contracts.
- POTHIER : Tratado de las obligaciones. Trad. española, 1947. Buenos Aires.
- PRIETO RAVEST : Teoría general de las obligaciones. Santiago de Chile, 1959.

- PUIG BRUTAU : Fundamentos de Derecho Civil.
 Tomo I, Vol. 2º.
- RECASENS SICHES : Introducción al estudio del Dere-
 cho. México, 1970.
- ROCA SASTRE (Y : Estudios de Derecho Privado. To
 PUIG BRUTAU) : mo I. Madrid, 1948.
- ROCAMORA : Contribución al estudio de las
 obligaciones naturales. RDP.
 Madrid, 1945.
- RIPERT : La regle morale dans les obliga-
 tions civiles. Paris, 1949.
- ROMANO : Note sulle obbligazioni naturali.
 Firenze, 1953.
- RODRIGUEZ : La obligación natural. Madrid,
 ARIAS : 1953.
- ROSCOE POUND : Law and Morals. Chapel Hill,
 1926.
 Las grandes tendencias del pensa-
 miento jurídico. Traducción espa-
 ñola. Barcelona, 1950.
- RUIZ GALLARDON : Derecho Civil. Obligaciones. Ma-
 drid, 1957.
- SALVAT : Tratado de Derecho Civil Argenti-
 no. Obligaciones en general.
 Tomo I.

- SANCHEZ ROMAN : Derecho Civil Español Común y Foral. Tomo 4. Libro II. Madrid, 1899.
- SAVATIER : Des effets et de la sanction du devoir morale en droit positif contemporain et devant la jurisprudence. Poitiers, 1926.
- SAVIGNY : Le droit des obligations. Vols. I y II. Traducción francesa. Paris, 1873.
- VON TUHR : Tratado de las obligaciones. Trad. española de W. Roces. Madrid, 1934.
- TEZANOS PINTO : Derecho Civil argentino. Obligaciones y Contratos. Buenos Aires, 1940.
- VELEZ SARSFIELD : Notas al Código Civil de la República Argentina.
- VISINTINI : Obbligazioni naturali. RDC., 1962, II.
- WILLINSTON : Contracts.